

DIARIO DE SESIONES DIGITAL

PERÍODO 143°

15° REUNIÓN
4° SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL
EXTRAORDINARIA

26 de febrero de 2026

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

A U T O R I D A D E S

Presidencia del Senado

Victoria Villarruel

Presidencia Provisional

Bartolomé Esteban Abdala

Vicepresidencia

Vicepresidencia primera

Carolina Losada

Vicepresidencia segunda

Alejandra María Vigo

Secretaría Administrativa

Alejandro Eduardo Fitzgerald

Secretaría Parlamentaria

Agustín Wenceslao Giustinian

Prosecretaría Administrativa

Lucas Clark

Prosecretaría Parlamentaria

Dolores Martínez

Prosecretaría de Coordinación Operativa

Dirección General de **Taquígrafos**

PRESENTES:

ABAD, Maximiliano
ABDALA, Bartolomé Esteban
ALMEIDA, Romina María
ALVAREZ RIVERO, Carmen Silvia
ANDRADA, Guillermo Eduardo
ARCE, Carlos Omar
ARRASCAETA, Ivanna Marcela
ATAUCHE, Ezequiel
ÁVILA, Beatriz Luisa
BAHL, Adán Humberto
BEDIA, Vilma Facunda
BENEGAS LYNCH, Joaquín Alberto
BENSUSÁN, Daniel Pablo
BULLRICH, Patricia
CAPITANICH, Jorge Milton
CARAMBIA, José María
CERVI, Mario Pablo
CORPACCI, Lucía Benigna
CORROZA, Julieta
COTO, Agustín
CRISTINA, Andrea Marcela
DE PEDRO, Eduardo Enrique
DI TULLIO, Juliana
ESPINOLA, Carlos Mauricio
FAMA, Flavio Sergio
FERNANDEZ SAGASTI, Anabel
FULLONE, Enzo
GADANO, Natalia Elena
GALARETTO, Eduardo Horacio
GIMÉNEZ NAVARRO, María Celeste
GODOY, Juan Cruz
GOERLING LARA, Enrique Martín
GONZÁLEZ, María Teresa M.
GUZMÁN CORAITA, Gonzalo
HUALA, María Victoria

JUEZ, Luis Alfredo
JURI, Mariana
KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia
KRONEBERGER, Daniel Ricardo
LEWANDOWSKI, Marcelo Néstor
LINARES, Carlos Alberto
LÓPEZ, Cándida Cristina
LÓPEZ, María Florencia
LOSADA, Carolina
MANZUR, Juan Luis
MARKS, Ana Inés
MARQUEZ, Nadia Judith
MAYANS, Miguel Ángel
MENDOZA, Sandra Mariela
MOISÉS, María Carolina
MONTE DE OCA, Belén
MONTEVERDE, Agustín Aníbal
MORENO, Elia Esther del Carmen
NEDER, José Emilio
OLIVERA LUCERO, Bruno Antonio
OROZCO, María Emilia
PAGOTTO, Juan Carlos
PAOLTRONI, Francisco Manuel
RECALDE, Mariano
REJAL, Jesús Fernando
ROJAS DECUT, Sonia Elizabeth
ROYÓN, Flavia
SALINO, Fernando Aldo
SCHNEIDER, Silvana Lorena
SORIA, Martín Ignacio
SUÁREZ, Rodolfo Alejandro
TERENZI, Edith Elizabeth
UÑAC, Sergio Mauricio
VALENZUELA, Mercedes G.
VIGO, Alejandra María
VISCHI, Eduardo Alejandro
ZAMORA, Gerardo

ÍNDICE

1. **Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional Argentino.**
2. **Convocatoria.**
3. **Asuntos Entrados.**
4. **Plan de Labor.**
5. **Homenaje.**
6. **Acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Fernando A. Iglesias. (O.D. 704/25.)**
(Oradores: Pagotto, Carambia, Salino, Moisés)
7. **Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Linares. (S. 2.200/25.)**
8. **Tratado Mercosur – Unión Europea. (O.D. 703/25.)**
(Oradores: Paoltroni, Capitanich, Valenzuela, Cervi, Bensusán, Abad, Mayans, Losada, Fernández Sagasti, Bahl, Lewandowski, Monte de Oca, Arrascaeta, Rojas Decut, Zamora, Moisés, Goerling Lara, Vischi, Mayans, Bullrich, Fernández Sagasti)
9. **Modificación de la Ley 26.639 de “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”. (O.D. 700/25.)**
(Oradores: Terenzi, Coto, Bensusán, Salino, Bensusán, Linares, Olivera Lucero, Kirchner, Capitanich, Fullone, Soria, Marks, Abad, Bahl, Vigo, Juez, Carambia, Rojas Decut, Royón, Andrada, Terenzi, Fama, Fernández Sagasti, Bullrich, Di Tullio, Vischi)
10. **Apéndice.**
 - I. **Convocatoria.**
 - II. **Actas de votación.**
 - III. **Inserciones.**
(Solicitantes: Bedia (O.D. N° 703/25.), Álvarez Rivero (O.D. N° 703/25.), Terenzi (O.D. N° 700/25.), De Pedro (O.D. N° 703/25.), De Pedro (O.D. N° 700/25.))

-En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11:11 del
jueves 26 de febrero de 2026:

Sra. Presidente (Villarruel).- Habiendo quórum, queda abierta la sesión.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL. ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sra. Presidente (Villarruel).- Invito a la señora senadora María Victoria Huala a proceder al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto y a los demás a ponernos de pie para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

-Así se hace. (Aplausos.)

2

CONVOCATORIA

Sra. Presidente (Villarruel).- Se incorporan al Diario de Sesiones la nota de varios senadores mediante la cual solicitaron la convocatoria a sesión pública especial y el respectivo decreto dictado por esta Presidencia.

-La nota y el decreto figuran en el Apéndice.

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidente (Villarruel).- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta de la lista de Asuntos Entrados hasta la fecha en la web oficial del Senado de la Nación, a efectos de que, eventualmente, los senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.

-Para ver los Asuntos Entrados, haga clic [aquí](#).

4

PLAN DE LABOR

Sra. Presidente (Villarruel).- Obra sobre las bancas el Plan de Labor acordado en la reunión de Labor Parlamentaria celebrada el 24 de febrero del corriente.

Se pone a consideración del Cuerpo a mano alzada.

-Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobado.

-Para ver el Plan de Labor, haga clic [aquí](#)

5

HOMENAJE

Sra. Presidente (Villarruel).- Para un homenaje, tiene la palabra el senador Joaquín Benegas Lynch.

-Manifestaciones de la senadora Bullrich fuera del micrófono.

Sr. Benegas Lynch.- Gracias, señora presidente.

Tiene la palabra la senadora Bullrich.

Sra. Bullrich.- La verdad es que la senadora Sagasti confunde un orden de un discurso con leer un discurso. Usted mismo lo aclaró. Así que esta chicanita de la senadora me parece que no tiene ningún sentido.

Sé perfectamente lo que hago. He sido parlamentaria en muchas oportunidades y sé perfectamente lo que digo. Así que le pediría que se corrija, porque es de buena persona corregir un error.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra la senadora Anabel Fernández Sagasti.

Sra. Fernández Sagasti.- No es la primera vez que sucede. Por eso, la dejamos pasar en otras ocasiones. Obviamente que se puede tener una guía de lectura -todos lo sabemos-, pero leer todo el discurso, no. Está filmado, lo vimos todos y se lo dije en el momento. Esperé a que terminara para no interrumpir su discurso.

La próxima vez, se lo diré en el momento si eso es lo que usted quiere. Me parece que es de mal gusto hacer eso. Por eso, lo hice después de que terminara. Lamento que esto suceda en el Senado, pero la única verdad es la realidad.

Sr. Presidente (Abdala).- Le reitero que esta Presidencia es la que conduce...

Sra. Fernández Sagasti.- Le voy a pasar la filmación.

Sr. Presidente (Abdala).-...y de ninguna manera se observó esa falta al artículo 196 del Reglamento que usted acaba de leer.

9

**MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.639 DE “RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS
MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL
AMBIENTE PERIGLACIAL” (O.D. 700/25.)**

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, corresponde la consideración del Orden del Día que por Secretaría se enunciará.

Sr. Secretario (Giustinian).- Orden del Día N° 700/25. Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 26.639 de “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”. (PE. 161/25.)

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra la senadora Terenzi, y, después, a continuación, va a tener la palabra el senador Agustín Coto.

Carolina Moisés, por favor, ¿me podés reemplazar?

-Así se hace.

Sra. Terenzi.- Muchas gracias, señor presidente.

Con el senador Agustín Coto, hemos decidido compartir parte del tiempo que tenemos para actuar como miembros informantes de este proyecto.

En realidad, yo lo haré en mi calidad de presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

El proyecto de Ley de Glaciares fue girado a esta Comisión y, en segundo término, a la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.

A continuación, quiero hacer una breve cronología, desde que recibimos este proyecto hasta que pudimos lograr el dictamen.

Luego, si me permite la senadora, tengo una guía de fechas, porque no las recuerdo y las tengo que leer.

Vamos a recordar que, a partir del 5 de diciembre de este año, el Poder Ejecutivo Nacional convocó a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación a partir del 10 al 30 de diciembre, mediante el decreto 865/2025.

Justamente, en ese decreto 865 estableció un temario para introducir sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. Ese temario tiene seis puntos. El sexto punto del temario es el relativo al proyecto de Ley de Adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, Ley N°26.639, que según el anexo dice que iba a ser enviado al Congreso de la Nación. Es decir, el 5 de diciembre recibimos la convocatoria a sesiones extraordinarias, pero el proyecto de glaciares aún no había ingresado.

Finalmente, el proyecto ingresó el 15 de diciembre del año 2025 a través de un mensaje del Poder Ejecutivo, el mensaje N°36/2025, introduciendo modificaciones y adecuaciones a lo que llamaremos, de ahora en adelante, la Ley de Glaciares. Eso sucedió el día 15 de diciembre.

El día 16 de diciembre, con una nota presentada por presidentes de bloques, que representamos a cuarenta y cuatro senadores de este Cuerpo, hicimos una solicitud a la Presidencia del Cuerpo para la convocatoria de comisiones a fin de tratar los proyectos que habían ingresado. Había ingresado la reforma laboral y también el proyecto de modificación de Ambiente.

El mismo día 16 se hizo la convocatoria a las comisiones y allí se llamó a convocar a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable para el 17, a las diez de la mañana, con el objeto de designar las autoridades de la Comisión.

El mismo día, también 17, a las 10:30 horas, se convocó a la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, también con el mismo objeto: designar a sus autoridades. Y el mismo 17 de diciembre, pero a las 11 horas, se convocó a reunión plenaria de ambas comisiones –Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Minería Energía y Combustibles–, para dar comienzo al tratamiento de este proyecto de ley.

A partir de ese momento, señora presidenta, en forma conjunta con el senador Flavio Fama, que es quien preside la Comisión de Minería, nos sentamos con todos nuestros equipos de trabajo, además de los equipos de ambas comisiones, para tratar de cumplir con una convocatoria lo más amplia posible a fin de tener, en tan poco tiempo, todas las voces que pudiéramos conseguir en este plenario que iba a suceder en unas horas más.

Así fue que decidimos que, en primer lugar, vinieran los miembros del Poder Ejecutivo para explicar el objetivo, el alcance y la pretensión que buscaban con esta modificación de la Ley de Glaciares. Así fue que a las 11 de la mañana del mismo día 17, y en plenario de ambas comisiones, recibimos al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; a las 11:30

recibimos al subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom, y a las 11:45, en representación del Consejo Federal de Minería, a María Laura Delgado, a través de una conversación que tuvimos en forma virtual, vía Zoom.

Al día siguiente hicimos una lista bastante importante y también tengo que reconocer que, a través de ambas Comisiones, la de Ambiente y la de Minería, se invitó a que los senadores que formaban parte de dichas comisiones pudieran hacer aportes con nombres de invitados para enriquecer el debate, y, de hecho, así se hizo.

Es importante que lea -permiso senadora y presidenta-; voy a tener que leer un listado de nombres, para no obviar a nadie.

El jueves 18 de diciembre, a partir de las 10 horas, en plenario de ambas comisiones, recibimos a Andrés Nápoli de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales; a continuación, Hernán Casañas, de Aves Argentinas; luego, José Esaín, también de Aves Argentinas; Agostina Rossi, representante de Greenpeace; Eugenia Testa, en representación del Círculo de Políticas Ambientales; Alfredo Vitaller, en representación de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros; Manuel Benítez, presidente de CAPMIN, que es la Cámara Argentina de Proveedores Mineros; Pablo Villagra, director del IANIGLA, que es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, a quien también tuvimos por plataforma Zoom, en vía remota.

Después estuvo el doctor Enrique Viale, en representación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas; además, estuvo Manuel Jaramillo, de Fundación Vida Silvestre Argentina. Y, finalmente, antes del mediodía, Gabriela González Trilla, investigadora del Conicet, representando a Ecosistemas Azules.

Ese mismo 18, hicimos un cuarto intermedio, al mediodía, y, a solicitud de los gobernadores, que, según los fundamentos de esta ley, son los que solicitaron la modificación de la Ley de Glaciares, en nombre de la Mesa del Cobre recibimos al gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego, y al presidente de la Mesa del Litio, gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil.

Eran casi ya las 6 de la tarde y teníamos un compromiso: después de terminar todo este debate y de escuchar todas estas voces -que, insisto, intentamos que fueran lo más plurales posibles y que hubiera representantes, tanto de las cámaras mineras, como de las mineras, como de las organizaciones ambientales- para poder tener una mirada, incluida también la del Poder Ejecutivo.

A partir del retiro de los gobernadores, lo que hicimos con el presidente de la Comisión de Minería, senador Flavio Fama, fue poner a disposición de los senadores que conforman ambas comisiones el dictamen para su firma -o no-.

Y, finalmente, ese dictamen llegó. Tuvo diecinueve firmas en total. De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, el dictamen pasa directamente al orden del día. Insisto, logró un total de diecinueve firmas: diecisiete comunes, por decirlo de alguna forma, y solo dos firmas en disidencia.

Yo necesitaba explicar esta parte del procedimiento que habíamos llevado adelante entre ambas comisiones, la de Minería y la de Ambiente. Habíamos acordado con el bloque oficialista que el senador Agustín Coto se iba a referir al dictamen y a llevar adelante el resto de la conversación, de la discusión, y la aceptación o rechazo de las modificaciones que aquí puedan surgir.

Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Moisés).- Gracias, senadora.

Tiene la palabra el senador Coto.

Sr. Coto.- Gracias, señora presidenta.

Primero, felicitaciones. No soy el primero, soy el segundo que habla con usted en este rol de presidente, así que quería saludarla.

Pido disculpas. Tengo una *tablet* chiquita; quizás la voy a mirar un poquito, pero no voy a leer de acá. Es muy chiquita. Aclaro que yo soy de los nuevos. Lo digo por eso.

En la misma tónica planteada por la senadora Terenzi, me parece que lo que va a ser oportuno, y lo que puede ser más valioso también para este debate que llevaremos en las próximas horas, es hacer un *racconto* del contenido, básicamente.

Antes de ello, me parece que está bueno decir algo, que voy a repetir seguramente más adelante: estamos finalmente, después de quince años, resolviendo algunas de las dudas que muchos senadores se planteaban en esta Casa.

Por deformación profesional, algo que me gusta hacer es leer las versiones taquigráficas. Han sido muy elocuentes. Creo que fueron el comienzo de un camino que nos llevó hasta 2026, pero que tuvo una serie de instancias en el medio: ocho años para el inventario, quince en total.

Eso era lo primero que quería decir. Después de quince años, nuevamente estamos discutiendo esto que responde a una necesidad, no a una voluntad. Acá no hay una voluntad de hacer leyes nuevas porque tenemos ganas, ese tipo de cosas que la verdad es que no tienen sentido. A título personal les digo que cuantas menos leyes, mejor. Honestamente, creo que una de las palabras más lindas que podemos usar es “derogar”.

Pero creo que lo que nos está sucediendo es que estamos respondiendo a una necesidad. Y eso nos va a suceder también con otros textos que seguramente trabajaremos en este Cuerpo más adelante. Ya me tocó, quizás, algo similar hace poco, en la Legislatura provincial de la que vengo a este Senado.

Sobre el artículo 1° de este dictamen que estamos trabajando, el Orden del Día 700 –y esto es interesante–, escuché un montón de cosas en los medios últimamente, comentarios de todo tipo. Ahora bien, el primer párrafo de lo que ustedes tienen en sus bancas es bastante elocuente, es virtualmente igual al de la ley vigente.

¿Esto qué quiere decir? Que se preserva la protección de las reservas hídricas estratégicas. ¿Por qué? Porque es el objeto de la norma.

Escuché de todo al respecto. Bueno, me parece que eso es valioso aclararlo. Es valioso decir: “Che, este primer párrafo está deliberadamente

pensado para mantener lo que hoy se está protegiendo". Y veremos más adelante que en algunos aspectos vamos a elevar cierto nivel en materia de protección.

¿Qué es lo que se agrega allí? El segundo párrafo. Vamos a charlar un poquito de eso. Del segundo párrafo no hay mucho que analizar. Simplemente, es la armonización de la norma con el artículo 41 y el artículo 124 de nuestra Constitución Nacional.

Esto se lo preguntaban algunos senadores nacionales hace quince años atrás. Gioja se preguntaba, en esta misma Casa, por qué el dictamen de Diputados había omitido la referencia al artículo 124 que había salido de esta Casa. Bueno, senador, le respondemos con quince años de distancia: estamos viendo si lo podemos enmendar.

Ese artículo 124, en última instancia, si alguno tiene algún problema, puede ir a discutirlo con los convencionales constituyentes del año 94, puede discutirlo con la Constitución del 49, puede discutirlo con Alberdi en el 53, y hasta podría discutirlo con Pedro de Angelis en su proyecto de 1852. No sería materia de esta discusión real.

Materia de esta discusión es armonizar la norma con lo que nos manda la Constitución de la Nación y con lo que nos manda la Corte Suprema, que oportunamente nos pidió que lo hagamos.

Entonces, como dijo alguien -no en este recinto-, no se hagan los rulos. Estamos cumpliendo con la manda que nos pide la Constitución, en armonía con lo que nos pide la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso, en lo que respecta al agregado en el artículo 1°. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como les dije, armonizando la normativa.

Vamos al segundo artículo. En el segundo artículo hablamos del inventario. Esto también se escuchó muchísimo; se discutió en esos dos días de comisión. Y les puedo garantizar que muchas de las modificaciones que hemos incorporado ahora están basadas en ese diálogo que hubo en esos dos días. Alguno puede decir que fue corto. Puede ser, yo qué sé. Seguramente, no le va a alcanzar a todo el mundo. Seguramente, el contexto de un período extraordinario es medio tirano con los tiempos. Yo vengo de ser opositor. La verdad es que no me encantaría, en otro contexto. Pero bueno, muchachos, así funciona el mes de febrero, que tiene veintiocho días.

El inventario sigue estando. Y el inventario -otro de los problemas que se plantearon en el año 2010- tardó ocho años en producirse. En tiempo político, son dos gestiones de un gobernador. Lo digo para que lo podamos medir acá, en esta Casa. Son dos gestiones de un gobernador.

Se preguntaba Fellner, en ese momento, cuánto tiempo tenía que esperar su provincia: ocho años, Fellner.

Pero vamos a aprovechar que tenemos un inventario que tiene casi 17.000 entradas. ¡Enhorabuena! Van a ver -lo vamos a hablar un poco más adelante- que incorporamos un principio precautorio justamente para hacerlo valer, para que esos ocho años tengan un valor y para que ese esfuerzo técnico que ha hecho el IANIGLA tenga valor. No tenemos ningún problema. Es más, le estamos reconociendo el criterio. ¿Y cuál fue el criterio con el que se constituyó? La reserva hídrica.

Entonces, no hay mal que por bien no venga. Tenemos un inventario que es científico y que vale la pena valorar, lo cual estamos haciendo en esta norma dándole un rol importantísimo. El artículo 3° bis, del que vamos a hablar ahora, me parece que lo deja más que claro.

La consulta del inventario es ineludible. Ahora bien, ¿dónde está el cambio acá? Y en esto no nos vamos a hacer los tontos –es el núcleo de esta discusión–: en el artículo 124. De nuevo, los recursos a las provincias. El inventario, naturalmente, también se conformará según lo que las provincias soliciten no solamente retirar, sino también, eventualmente, incorporar. Nos van a decir: “Che, muchachos, ustedes hacen esto para retirar”. No, estamos haciendo una ley. Punto. Cuanto más duren, mejor, agrego yo. Punto y aparte. Y cuanto menos haya, mejor. Pero, bueno, es lo que hay. Si hacemos un digesto, se nos cae el edificio. Si imprimimos el digesto en papel, se cae el edificio del Congreso. Yo tengo esta *tablet* chiquita, pido disculpas.

Hablando del inventario –que, como les dije, valoramos enormemente–, lo que hacemos es decir que la autoridad jurisdiccional será la que se encargue de la actualización eventual del inventario en materia técnica. ¿Qué es lo que va a hacer el IANIGLA? Seguir llevándolo adelante, seguir siendo un organismo técnico como lo era originalmente desde la década del 70, cuando se creó. Un organismo que se creó, además, con una perspectiva federal, porque es un organismo mendocino, esencialmente. Eso no lo digo como algo malo; lo digo como algo bueno. Yo hablo desde la provincia que queda más lejos de todas, así que lo digo como algo fantástico.

Ahora bien, cuando le dimos responsabilidad administrativa al IANIGLA, le hicimos un flaco favor. Tuvimos al director del organismo –que sigue estando– procesado. Esto no es un tema menor.

Perdón por la referencia de nuevo a la versión taquigráfica de 2010: era algo que se preguntaban si iba a suceder, y también sucedió. Me parece que ese procesamiento al doctor Villalba es bastante elocuente. Lo voy a citar al doctor más adelante, por eso lo nombro.

Este inventario, según el propio Villalba, debía tener un criterio central que era la función hídrica y no necesariamente la clasificación geomorfológica. No lo digo yo, lo dice Villalba. Pido permiso para leer: un suelo que se congela en forma temporaria no es importante desde el punto de vista de reserva hidrológica, por lo que no hay que protegerlo.

Es decir, que hay que proteger los que son permanentes, decía el doctor Villalba en su momento, antes de que lo procesen. Me da mucha pena que así lo diga. ¿Por qué? Porque se tuvo que comer ser el responsable administrativo, siendo él un técnico, un científico.

Acá, lo que estamos haciendo es convertir en ley lo que el científico más calificado del país en su momento en esta materia recomendaba. Si acá hay una concesión, es a la ciencia; no a ninguna industria en particular.

Vamos al artículo 3°. El artículo 3° es del que hablábamos recién. Es el que modifica el artículo 3° bis; es el principio precautorio. Esto me parece que también es muy valioso. Hemos hablado bastante, durante estos últimos días, en las comisiones, etcétera, sobre este inventario. Bueno, lo estamos consagrando. Estamos diciendo que todo eso que está en el inventario sigue estando allí, sigue siendo protegido.

¿Qué es todo? El ciento por ciento de las casi 17.000 entradas del inventario. No está en discusión. No debe estarlo. Además, no deja de ser un patrimonio del Estado Nacional y de las provincias, porque es información que es nuestra y que es valiosísima, porque es la que nos permite administrar los recursos.

Ahora bien, de aquí en adelante, como veremos, según criterio de cada provincia, según los criterios que establece esta ley de presupuestos mínimos, no ley de presupuestos máximos redactada adentro un frasco, una empanada, en el barrio de Palermo por dos chetos, que es lo que tuvimos la vez pasada... ¿Se acuerdan cuando hablaban de los pinos? Que pongan un pino en el Senado. ¡Abajo de los pinos no crece absolutamente nada! Eso es lo que sucede cuando plantás un pino. Diez años, ocho años, Fellner. ¡No creció nada! Eso es lo que ha sucedido.

Bueno, esta ley de chetos, que parece que no conoce la diversidad de nuestro país, que era lo que se preguntaban los demás senadores y que era el motivo central por el cual la expresidenta de la Nación... En realidad, la firma es del doctor Massa, Sergio Tomás. Vetó oportunamente la ley original, no nos olvidemos de eso. El presidente en funciones, Massa, en su momento jefe de Gabinete, vetó la ley original con criterios que eran estrictamente económicos, que no son los criterios que están en esta norma. Esta norma es un poco más amplia. Esta norma, como les dije, tiene criterios diferentes.

Ahora bien, los puedo remitir al texto de ese veto, que es fantástico. La verdad es que me suena un poco poco, pero entiendo que quizás, a los intereses mineros de ese momento, les servía y por ese motivo vetaron como vetaron. Hay que preguntarle a Massa. Yo la verdad es que no tengo ni idea. En 2008 yo vivía acá, en Buenos Aires, era estudiante. Sergio era jefe de Gabinete.

Ahora bien, hablamos nuevamente sobre este principio precautorio. En cuanto a este principio precautorio, obviamente, yo no le puedo pedir al texto anterior que lo tenga porque no existía el inventario. Pero sí puedo decir que en este es una incorporación valiosa. Y me parece que, indistintamente de la discusión que vamos a dar en esta Cámara, en sí mismo también es un reconocimiento a ese trabajo que se hizo. Y eso está bueno decirlo. Como dije, no hay mal que por bien no venga. Gracias a esta ley contamos con esta investigación, y está bueno que la preservemos porque estamos hablando de una parte de esa norma. Y está muy bien que así lo hagamos, porque esta es una modificación y, por lo tanto, debemos hacer valer lo que está bueno de esa norma original.

El IANIGLA conserva la titularidad del inventario, eso no está en discusión. No se desmantela el organismo, no se lo desfinancia, no se lo toca. Se le da el valor que tiene: valor científico.

Se incorporan novedades. ¿Cuáles? Que las provincias puedan incorporar o retirar cuerpos de hielo del inventario. Repito: artículo 124 de la Constitución. ¿Según qué criterios? ¿Los que les parezcan? ¡No! Criterios técnicos científicos. ¿Según qué criterio? ¿Los que alguno diga? ¡No! Los del 41 de la Constitución.

De vuelta: a veces, parece que alguien puede terminar viendo que está discutiendo más con los convencionales del 94 que otra cosa. De vuelta: desde la Comuna 14... Perdón para los vecinos de la Comuna 14 -cuando

estoy acá, en la Ciudad de Buenos Aires, de hecho, vivo en la Comuna 14, me cae simpática-, pero tiene valor simbólico. Perdonen.

A los muchachos del interior, que allá lejos, en 2010, se preguntaban, al igual que los senadores del interior: che, ¿están diciendo que los de las provincias somos una manga de salvajes que no podemos tener los organismos técnicos que puedan encargarse de esto? ¿Acaso no tenemos universidades nacionales? ¿Acaso no fue la política de los últimos quince años tener una universidad nacional en cada lugar que se pueda? Bueno, pónganse de acuerdo. Es evidente que las provincias sí podemos hacerlo. Las exposiciones de los dos gobernadores que estuvieron en la Comisión así lo demuestran. También estuvo presente el ministro de Minería de una de esas dos provincias. Es más, en algunas provincias tienen el rango máximo, son ministerios. Aquí, en la Nación, no, son secretarías.

Entonces, me parece que reconocer acá, en la Casa de las Provincias, que las provincias no somos una manga de salvajes es algo extremadamente valioso. Y me parece una reivindicación histórica a quienes se quejaban por esto en esa ley original y tan unitaria.

Hemos incluido, entonces, este principio central, el del 124, que se había omitido oportunamente en la Cámara de Diputados. Y, en lo que respecta al inventario, la participación de las provincias, a partir de ahora, va a ser determinante.

Además, esto seguramente elevará el nivel de las provincias. Porque las provincias van a tener que estar a la altura de lo que esta ley de presupuesto mínimos les pide. Si, eventualmente, algún distrito no cuenta con la capacidad técnica, tendrá que ir por ella. En última instancia, es un problema de las provincias. Se tendrán que encargar, tanto en su propia normativa provincial –en sus legislaturas provinciales– como desde sus ejecutivos, de cumplir con esos requisitos. ¿Por qué? Porque estamos reconociéndoles en esta normativa lo que la Constitución les reconoció en el 94. Simple y claro en ese aspecto.

En lo que respecta a actividades prohibidas, vamos a una parte que quizás puede ser un poco tensa también; pero no lo es. Las prohibiciones se mantienen todas. Y todas es todas.

Y le voy a agregar algo más, señora presidente. Si usted mira el texto, va a encontrar en el artículo 6º –y leo, perdón–: “Actividades prohibidas en los glaciares y en el ambiente periglacial, identificados por autoridad competente...”. Sigue el texto. Se acaba de incorporar un criterio extra en este texto. Es aún más restrictivo que el anterior, dato no menor para quienes se preocupaban de por qué, si acaso íbamos contra un objeto protegido. No lo digo yo, lo dice el texto, lo dice el artículo 1º, lo dice el 6º, lo decía el doctor Villalba: estamos cuidando el agua.

A su vez –y esta también es una discusión que parece con ese cuerpo anterior–, hemos incorporado un criterio extra en materia de estudio de impacto ambiental. Esto me parece que vale la pena señalarlo. Estoy buscando la cita textual porque de memoria no me la acuerdo. Estoy citando a un senador, por eso lo busco. Era una senadora de mi provincia, una senadora fueguina, que respecto de los estudios de impacto ambiental se hacía la siguiente pregunta: ¿qué pasa cuando hay megaemprendimientos y el informe de impacto ambiental individual no contempla ese impacto

múltiple? Bueno, para ello, lo que necesitamos es una evaluación ambiental estratégica de que sí lo hace. Bueno, incorporamos el criterio aquí, lo incorporamos en el texto. Me parece que así se subsana una falla, una falta o una deficiencia que tenía el texto original, y no lo digo yo, sino que lo decía la senadora Díaz hace quince años.

Ir al artículo final, que es el artículo que habla sobre las autoridades competentes, sería virtualmente redundante.

Pero hay una cosita más que quiero agregar: Parques Nacionales, el 7° modifica el 8°...

Sra. Fernández Sagasti.- ¿En qué artículo?

Sr. Coto.- El 7°, que modifica el 8°.

Se habló de algunos distritos en los cuales no tenemos una controversia respecto del tema que estamos discutiendo hoy, por ejemplo, el mío, por ejemplo, la provincia de Santa Cruz. Para ser gráfico, el Perito Moreno queda en el Parque Nacional; la autoridad competente es Parques Nacionales. Eso no está en discusión, directamente. No lo estaba en la ley original, no está en esta. Lo que quiero decir es que no es parte de la discusión, nada más. Y esa aclaración está buena, no para la taquigráfica, porque es autoevidente el error del texto, sino para quienes nos están escuchando y que quizás tenían esta pregunta. Bueno, me parece que eso también valía la pena aclararlo.

En lo que hace a la intervención que tiene que hacer el Estado provincial para poder lograr que el IANIGLA retire, eventualmente, o incorpore una entrada en su inventario, sí que está más que claro en el texto. Pero me parece que valía la pena hacer la aclaración respecto de los parques nacionales. Y lo digo desde una provincia que tiene un parque nacional enorme, que es el Parque Nacional Tierra del Fuego; lo digo desde una provincia que además tiene un glaciar, el Alvear, que se redujo en un 80 por ciento en el último tiempo; y desde una ciudad que es mi ciudad natal, Ushuaia, que es toda área periglacial. De hecho, tenemos el glaciar Martial al lado, literalmente al lado, lo vemos de abajo. Si estás aburrido, podés ir y volver. Nosotros vivimos en un glaciar, en un glaciar que es reserva hídrica, o sea en aquello que estamos protegiendo en esta ley.

Como le decía, señora presidente, estamos teniendo que resolver un asunto que la Corte nos mandó a resolver. Estamos resolviendo un asunto que este mismo Senado planteó desde diferentes espacios políticos. Porque, de hecho, creo que la totalidad de las citas que hice eran justicialistas, entendiendo que realmente la ley que en este momento estamos modificando iba a generar problemas por el tiempo que tardó en crearse el inventario, por el retroceso en materia federal que significaba decirles a las provincias que eran convidadas de piedra respecto de sus propios recursos, y por una normativa que parecía realmente diseñada en favor de los intereses de algún país vecino, o de quienes invertían en algún país vecino, y no de los intereses de los veinticuatro distritos de nuestro país. Y muy particularmente de las provincias que tienen esos recursos a mano y que pueden representar la posibilidad de desarrollo que tanto necesita nuestro país y cada uno de esos distritos.

Y no solamente ellos, sino también todos los beneficios indirectos: para la metalmecánica, para la logística, para nosotros en Tierra del Fuego, que en algunos casos nos encargamos de importar bienes y distribuirlos en el

país. Esa ley tan controvertida en este Senado de la Nación –quizás porque se tuvo que tratar un dictamen tan poco federal que vino de Diputados– hoy está siendo modificada en este recinto, y me parece que es una deuda que teníamos con los argentinos, con los distritos y con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como les dije.

Me parece que –como les decía y con esto termino– no estamos haciendo leyes porque tenemos ganas. Estamos teniendo que resolver un cuerpo normativo que a veces se da de bruces con la misma Constitución Nacional.

Nada más, señora presidente.

Sra. Presidente (Moisés).– Gracias, senador Coto.

Tiene la palabra el senador Daniel Bensusán.

Sr. Bensusán.– Gracias, presidenta.

Señora presidenta: ¿a través suyo le puedo hacer una consulta a los miembros informantes?

Sra. Presidente (Moisés).– Creería que sí, por supuesto.

Sr. Bensusán.– Porque nos dejaron un papel impreso en cada una de las bancas. ¿Qué sería esto?

Sra. Presidente (Moisés).– Señor senador.

Sr. Coto.– Entiendo que es lo que distribuyó Parlamentaria. Del dictamen, del Orden del Día 700 original, vamos a introducir modificaciones, algunas de las cuales –como dije hace un ratito– surgieron de las conversaciones en la Comisión. Lo que tiene usted en la mano, senador, es justamente esa propuesta de modificación, que se hará oportunamente cuando se haga la votación particular.

Sra. Presidente (Moisés).– Senador Bensusán.

Sr. Bensusán.– ¿Y de qué vamos a hablar, entonces? Porque no sabemos cuáles son las modificaciones.

Sra. Presidente (Moisés).– Continúa en el uso de la palabra el senador Bensusán.

Sr. Bensusán.– Otra vez lo mismo que con la ley laboral. ¿De dónde corno salió esto? ¿De la Comisión? ¿Para qué están las comisiones? Esto es un papel impreso que nos trajeron hace cinco minutos. Otra vez lo mismo. Ya les pasó con el artículo 44 de la ley laboral. Y después, a los que acompañan les dicen: lo estuvimos entreteniéndolo con una cosa para aprobar otra. O sea, una vergüenza, de vuelta.

¿De qué vamos a discutir? ¿Quién explicó? Para eso están los miembros informantes. Que nos expliquen cuáles son las modificaciones que introdujeron si es que las hay, porque no lo sabemos.

Estamos tratando un dictamen que se firmó en comisión, no un papelito que nos dejaron impreso en las bancas. ¡Esto es joda! O sea, podemos llegar a decir cosas, y después decir “no, en realidad modificamos los artículos...”. Seriedad absoluta...

Se hizo muy el gracioso el miembro informante y no explicó nada de las modificaciones que quieren introducir. ¡Una vergüenza!

¿Van a votar un texto, nuevamente, sin leerlo, o por lo menos sin haberlo discutido de cara a la gente, de cara a la sociedad, en las comisiones, que para eso están? ¿Dónde lo discutieron? ¿En una oficina? ¿Qué les dieron a los que lo discutieron y modificaron? Es una vergüenza.

Estamos cambiando una de las leyes más importantes que cuida el medioambiente de la Argentina entre cuatro paredes, entre gallos y medianoche. Así no se legisla, así no se discute.

Díganme, por lo menos, cuáles son los artículos que cambiaron, y los podemos discutir. O los argumentos por los cuales modificaron el texto de un artículo que fue firmado en comisión.

¿Para qué dijo la senadora miembro informante todos los que pasaron por la Comisión? Ni tronco de pelota le dieron. Firmaron un dictamen y ahora lo modificamos. Parte de las modificaciones son las que escuchamos.... ¿De quién, si no sabemos cuáles son? La verdad es que da vergüenza. Da vergüenza que la ciudadanía argentina nos esté viendo.

Y más vergüenza me va a dar cuando voten algo sin saber qué están votando...

Sr. Salino.- ¿Me concede una interrupción?

Sr. Bensusán.- Sí, cómo no.

Sra. Presidente (Moisés).- Perdón. Que se dirija al estrado, por favor.

Sr. Salino.- Exactamente esto es lo que les dijimos en la ley anterior.

Nos mandan a los constituyentes del 94. Vayan a quienes redactaron el Reglamento. Esto está fuera del Reglamento.

Encima están orgullosos de lo que hicieron, porque la senadora leyó meticulosamente cómo violaron el Reglamento. Exactamente, lo que acaba de decir el senador por La Pampa.

El dictamen es el final. Por lo menos entiendan a futuro. Todo esto que hicieron después lo tienen que hacer antes del dictamen.

Dijo la senadora: teníamos poco tiempo –por qué tenían poco tiempo, no se entiende–, lo recibimos el 15 de diciembre. Y el 18 tenían un dictamen. Claro, después vienen acá, a las 15:32, y entregan una modificación de la que –como acaba de decir el senador– nadie sabe quién es el autor, qué dice. Y nadie explica nada. Entonces, todo lo que hablamos nosotros es absolutamente de gusto, porque refiere a algo que solo conocen ustedes.

Y después, la presidenta del bloque es la reina de la transparencia en la información. Pone las siete llaves, pero dice que todo el mundo conoce todo.

Esto lo recibimos a las 15:32. Y debe quedar claro que son modificaciones a los artículos que estamos tratando, porque esto desmerece absolutamente el debate legislativo, desmerece la calidad de la ley.

Lo dice el Reglamento, se los explicamos en la ley laboral y lo vuelven a hacer. La metodología es recibo un proyecto, de inmediato firmo dictamen y, después, lo vamos a estudiar. No corresponde proceder así. ¿Quieren cambiar el Reglamento? Adelante, cambien el Reglamento. Mientras tanto, como decía el miembro informante, “vayan a la Constitución del 94”. Bueno, vayan a los que redactaron el Reglamento, pero mientras tanto, cúmplanlo.

Gracias, senador.

Y le pido perdón.

Sra. Presidente (Moisés).- Continúa en el uso de la palabra el senador Bensusán.

Les pido a los señores senadores que si van a interrumpir, no hay ningún problema. Pero si tienen algo que decir, les pido, por favor, que se agreguen a la lista de oradores porque si no se va a desordenar el recinto.

Muchas gracias.

Tiene la palabra el senador Bensusán.

Sr. Bensusán.- Presidenta: simplemente quiero decirle que el desorden en el recinto lo están haciendo con este dictamen, no lo estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos buscando las explicaciones de dónde surgen estas cosas. Entonces, nosotros, lo que queremos es discutir de cara a la gente.

Esta no es una norma técnica menor que estamos discutiendo. Estamos discutiendo el futuro del agua en la Argentina. El agua es el futuro. Es el futuro para la producción, para las economías regionales. Eso es lo que estamos discutiendo hoy.

Vamos a discutir si intereses económicos en unas pocas provincias van a ser superiores al interés que tenemos todos los argentinos en el medio ambiente y en el agua.

Dice el miembro preopinante que el IANIGLA va a seguir con las mismas facultades. Va a tener un libro nomás para ir llevando el inventario, no va a poder hacer otra cosa. Porque cuando una provincia le diga “sacá o poné tal glaciar”, no podrá decir nada.

Y si una de las modificaciones que está acá -veremos qué dice el dictamen final- es a la Ley General del Ambiente, esa ley ya se aplica porque está aprobada, no porque se la incorpore en un artículo de este dictamen. Una vergüenza. La verdad es que es una vergüenza lo que está pasando.

Voy a hablar del dictamen que se firmó en la Comisión. ¿Qué quieren que haga? La verdad es que es para lo que preparé la alocución, que es lo que corresponde, que es lo que se va a votar, teóricamente.

Recién, el miembro preopinante señalaba que en su provincia había desaparecido un porcentaje importante del glaciar. ¿Por qué será eso? No es gratis eso. Eso es la crisis climática, la crisis ambiental que estamos viviendo. Esta crisis ambiental está generando procesos climáticos de altas temperaturas, de lluvias, de viento, a los cuales la Argentina no estaba acostumbrada. En mi provincia, la semana pasada, entre Santa Rosa y Toay, sufrimos lo que fue un hecho climático totalmente novedoso para nosotros. En ese marco de crisis climática ambiental en el mundo, el Gobierno nos manda esta ley en la cual hace una modificación regresiva de la Ley de Glaciares. ¡Muy bien! La verdad, un tiempista.

Como decía el miembro preopinante, la Ley de Glaciares fue sancionada en el 2010, la que ahora quieren modificar. La ley fijó límites para que el daño sea irreversible. Ahora, nos quieren venir a vender que necesitan

aclaratorias, que necesitan seguridad jurídica para las inversiones multimillonarias que las mineras quieren hacer en toda la Argentina.

La Ley de Glaciares es bien clara. Si hay una ley que es clara y que dice qué está prohibido y qué está permitido es la Ley de Glaciares. Efectivamente, está prohibido que en los glaciares y en la zona periglacial haya explotaciones mineras. Habla de que... Recién la Corte nos pidió que aclaremos.

Leí el fallo Barrick, si es al que él se refiere, y no dice nada por el estilo.

El artículo 41 de la Constitución Nacional es claro cuando nos habla del derecho que tenemos todos los argentinos a tener un ambiente sano. Ya que se habló de la Corte, permítame, presidenta, que lea un parrafito del fallo Barrick, Considerando 13, que dice: "Antes que buscar la confrontación de sus mandatos [señor miembro preopinante] los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional deben ser interpretados buscando adaptar la gestión de los recursos naturales a las directivas de la cláusula ambiental, para cumplir de la forma más fidedigna posible un mecanismo propio del federalismo concertado que estableció el constituyente reformador de 1994. En ese marco, la tarea de concertación federal es primariamente de las autoridades políticas nacionales y provinciales, que deben conjugar intereses para potenciar el cumplimiento del texto constitucional, sin vaciar de contenido el modelo federal del Estado ni el proyecto ambiental de la Constitución. En este punto, cabe recordar que el poder delegado a la Nación por las provincias de establecer los presupuestos mínimos ambientales, no constituye una mera declaración teórica, sino que es el Estado Nacional quien recibió la facultad de instrumentar, mediante el tipo de leyes, los medios para lograr el fin constitucional de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano". Considerando 13 del famoso fallo Barrick.

No hay conflicto constitucional, es claro. La Corte fue clara. Lo que hoy tenemos es una decisión política, y lo dijo el miembro informante a pedido de la Mesa del Litio y de la Mesa del Cobre.

Entonces, seamos sinceros, vamos a modificar la Ley de Glaciares para favorecer la inversión económica de unos pocos en algunas provincias, en detrimento de defender el medioambiente en la Argentina, el de ahora y el de las futuras generaciones.

Esto no es federalismo, es feudalismo ambiental. El federalismo es otra cosa, señor miembro informante.

Vamos a fragmentar los criterios de conservación y defensa de los glaciares y los periglaciales. Hay doce provincias que tienen glaciares, vamos a tener doce criterios diferentes. Cada provincia va a tener su criterio para determinar si un glaciar sirve o no sirve; si sirve para alimentar una cuenca hídrica o no.

Jujuy va a tener uno, Catamarca va a tener otro, Mendoza va a tener otro, San Juan va a tener otro. Hasta ahora hay un criterio sistémico y científico que lo hace el IANIGLA, que lo están haciendo desaparecer en todas las funciones científicas que tiene. El IANIGLA, además, es un organismo del Conicet, a quien muchos defendimos y otros se llenaron la boca, pero después...

Entonces, a partir de ahora, en vez de exigirle a las empresas que hagan explotación minera que cumplan con un impacto ambiental, le vamos a tener que exigir a los glaciares a ver si son fuente de agua o no. Algo que hoy no se discute. Hoy, no se discute eso. Hoy, los glaciares, son recursos hídricos y fuente de agua de todas las cuencas hídricas de la Argentina.

Realmente, estar discutiendo estas cosas me parece absurdo, me parece anticientífico, irresponsable y un delirio, como está haciendo todas las cosas este Gobierno del presidente de Milei.

Algunos estarán de acuerdo o no con las organizaciones ambientales, pero la verdad es que si hay algo que no tienen es militancia política. Tienen militancia ambiental: son técnicos, son profesionales, son estudiosos y son defensores del medioambiente. No responden a ningún partido político. A lo único que responden es a cuidar y a resguardar el medioambiente de todos los argentinos.

Dentro del tiempo que tengo, le voy a pedir a la señora presidenta si me da permiso para leer, para que quede también en la taquigráfica. Para que cuando... Si esto lamentablemente se aprueba, la semana que viene ya... La semana que viene no, porque falta el tratamiento del Diputados. Pero si alguna vez se llega a aprobar la ley, rápidamente, va a estar judicializada.

Quiero traer la voz de una de esas organizaciones, que es Greenpeace, a quienes también le dieron duro y parejo hoy a la mañana en una manifestación pacífica que hicieron. No le pegaron a nadie, no hicieron nada, pero los castigaron bastante, incluso a un fotógrafo, como dijo hoy el senador por Chubut, en la cuestión de privilegio.

Dice lo siguiente: “Desde Greenpeace, junto a otras muchas organizaciones socioambientales, que desde hace más de quince años trabajamos y nos movilizamos en todo el país, queremos recordar que la Ley de Glaciares fue el resultado de una lucha ciudadana histórica. Miles de personas marcharon, debatieron en asamblea [cosa que no pasó nada en esta hora], enfrentaron un veto presidencial y no se retiraron hasta que el Congreso volvió a sancionar la ley. Fue una construcción colectiva para establecer límites claros en defensa del agua. Detrás de esta norma hay comunidades y ciudadanos que expresaron algo fundamental: el agua no es un recurso prescindible ni reemplazable. La ley se sancionó con la conciencia de que el agua que cuidamos hoy será la que sostenga al país en las próximas décadas, reconociendo a los glaciares y el ambiente periglacial como bienes de carácter público. Esto implica una responsabilidad concreta: el agua que resguardan pertenece a toda la sociedad y no puede quedar sujeta a decisiones de corto plazo ni a determinaciones unilaterales que afecten a provincias que dependan de estos ríos.

En un contexto de crisis climática, que altera la lluvia, reduce la nieve y profundiza las sequías, estas reservas sostienen los caudales en tiempos secos y estabilizan las cuencas. Lo que se degrade en un punto repercute en todo el sistema, porque las partes hídricas no son locales, su impacto es nacional. Lo que se pierda hoy no podrá recuperarse mañana. No hay prosperidad posible sin agua. No lo decimos solo las organizaciones ambientalistas, lo expresa una sociedad que sabe que sin agua no hay comunidades que se sostengan ni economías que puedan crecer. Sin glaciares no hay agua y sin agua no hay vida”.

Esto lo escribió Agostina Rossi en representación de Greenpeace, una persona que no es militante política, es una bióloga recibida de la UBA. Deberíamos escuchar un poco más a los técnicos y a los profesionales.

Como decía hoy, con esta ley hay un retroceso institucional en un proceso de crisis climático histórico, donde la mayoría de los países del mundo, sobre todo de Europa, tienen reglas claras y, cada vez, más duras en favor del ambiente.

Hace un ratito votamos con una amplia mayoría un tratado entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Sabe qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a incumplir.

Hace cinco minutos que lo votamos y ya lo vamos a incumplir. ¡Qué viveza la del Gobierno Nacional! No lo digo yo, dentro del Acuerdo que votamos, el artículo 18 refiere al comercio y desarrollo sostenible. ¿Saben qué dice? Porque capaz que no lo leyeron, como eran cuatro mil y pico de hojas...

Dice lo siguiente: "Derecho a regular y niveles de protección. Cada parte se esforzará por mejorar sus disposiciones legislativas y reglamentarias y sus políticas pertinentes a fin de garantizar unos niveles elevados y efectivos de protección medioambiental". Y también laboral, que lo van a incumplir mañana con la ley laboral.

"Ninguna de las partes deberá debilitar los niveles de protección otorgados en sus disposiciones legislativas y reglamentarias en materia medioambiental o laboral con la intención de fomentar el comercio o la inversión". ¡Ajá, es lo que quieren hacer ahora!

"Las partes no establecerán dispensas ni excepciones, ni ofrecerán establecer dispensas ni excepciones, de sus disposiciones legislativas y reglamentarias en materia medioambiental o laboral con el fin de fomentar el comercio o la inversión". Artículo 18.2 del Tratado Unión Europea-Mercosur que acabamos de votar.

¿Ya lo van a incumplir? Esperen un rato, por lo menos. Hoy estaban apurados en votar enseguida el Acuerdo porque queríamos ser los primeros. No fuimos los primeros, pero fuimos los primeros en incumplirlo. Vamos a ser los primeros en incumplirlo. Para eso sí son rápidos. Para eso no dicen nada. Una locura, la verdad.

Además, ¿en qué cabeza cabe que, destruyendo los glaciares, los periglaciares, el medioambiente y perjudicando el agua para todos los argentinos, vamos a tener poblaciones prósperas que puedan beneficiarse, teóricamente, con todas esas inversiones que van a venir?

Acá, me permito llevar esta modificación o este proyecto de modificación a cómo afecta a mi provincia, La Pampa. Nosotros no tenemos glaciares, pero sí tenemos dos ríos que nacen de los glaciares que se encuentran en la región andina de Mendoza: el río Atuel y el río Colorado. Somos una provincia, aguas abajo, históricamente perjudicada. Todos nuestros pobladores, sobre todo los del oeste, saben lo que sucede cuando se toman medidas arbitrarias aguas arriba, en la provincia de Mendoza, sin cumplir ningún mandato constitucional. Los perjudicados somos nosotros, los que estamos aguas abajo.

Los pampeanos sabemos de estas cosas. Cuando se toman estas decisiones unilaterales, ¿saben cómo termina? Con conflictos sociales, con

conflictos económicos y con conflictos judiciales. Está bien, hay provincias que incumplen las resoluciones judiciales.

Lamentablemente, no están presentes algunos senadores, pero hace unos cuantos años la Corte le ordenó a Mendoza volver a garantizar el cauce del río Atuel para la provincia de La Pampa. Ni el gobernador actual, que lo era al momento en que fuimos a la audiencia de la Corte cuando salió el fallo, ni el gobernador posterior, que hoy es miembro de esta Cámara, cumplieron este fallo.

¿Y por qué lo traigo a colación? Porque con esta modificación el Gobierno de Mendoza puede hacer lo que quiera con los glaciares que se encuentran en su territorio y que son una fuente de recursos hídricos para el río Atuel y el río Colorado.

Les quiero explicar qué significa eso. El río Colorado, a través del acueducto que tenemos, lleva agua potable a cuarenta y seis localidades de mi provincia. Más de la mitad. Cuarenta y seis localidades cuyos pobladores, cuyos ciudadanos, reciben agua potable gracias al río Colorado. Con esto, corremos el riesgo de sufrir graves perjuicios de contaminación, de contaminación ambiental en los glaciares que alimentan al río Colorado.

¿Y qué vamos a hacer? ¿Le vamos a llevar agua contaminada a cuarenta y seis localidades pampeanas, a cada uno de sus pobladores? Yo no voy a permitir eso. Yo no lo voy a permitir. Y espero que este recinto, este Congreso, tampoco lo permita.

Hablo de La Pampa y de sus ríos, pero lo traslado al resto de los ríos interjurisdiccionales que se alimentan de los glaciares y que recorren varias provincias. ¡Los ríos interjurisdiccionales son de cada una de las provincias que atraviesan, no de la provincia donde nacen! Y ya lo dijo la Corte.

Sra. Presidente (Moisés).- Se le acabó el tiempo, senador.

Sr. Bensusán.- Sí, ya termino, presidenta.

Esto es defender el agua. ¡Esto es supervivencia! La supervivencia de poblaciones. Yo siempre lo digo y lo defiendo: el desarrollo de mi provincia no se negocia; el desarrollo de las localidades de mi provincia no se negocia. Y menos lo que han hecho ustedes, a puertas cerradas, vaya uno a saber con qué objetivos.

Sin agua, no hay desarrollo; sin agua, no hay medioambiente; sin agua, no hay economías regionales; sin agua, no hay producción, no hay desarrollo geográfico. Y el rechazo que yo hago a esta ley no es a la explotación minera, porque yo no estoy en desacuerdo con que se usen los recursos naturales de la Argentina. Ahora bien, que sea a conciencia y sin perjudicar. Y acá no estamos cubriendo esto.

El rechazo de la provincia de La Pampa a esta modificación es porque va a perjudicar el agua que llega a muchas poblaciones de la provincia. Entonces, no puedo acompañar este tremendo boicot a mi provincia, a los pobladores de mi provincia y a toda la Argentina. No seamos cómplices de este desmantelamiento ambiental. Se los pido como ciudadano de una provincia que ya es perjudicada por las decisiones que se toman en una provincia aguas arriba y que, a partir de esto, muchos pobladores corren el riesgo de recibir agua contaminada por la contaminación que pueden hacer del río Colorado.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Moisés).- Gracias, senador.

Tiene la palabra el senador Linares.

Sr. Linares.- Señora presidenta, como dijo el compañero y amigo Bensusán: otra vez entre gallos y medianoche, otra vez mal, otra vez nace una ley torcida.

Yo voy a hablar un poco de mi provincia, la provincia del Chubut, que tiene una historia grande en la lucha y defensa del agua.

En mi provincia, no hay minería extractiva de este sentido. Y no hay minería porque hace unos años atrás -bastantes años atrás- hubo algún principio de querer llevar la minería. Pero no la quisieron llevar con el debate, no la quisieron llevar con la discusión con todos los sectores. Lamentablemente -o no-, pasó lo que pasó: entre gallos y medianoche, en una Cámara de Diputados, la quisieron sacar.

De ese momento, hay un recuerdo muy grande en nuestra provincia: había un legislador del oficialismo que estaba defendiendo por qué teníamos que tener minería en la provincia del Chubut. Se usaba un teléfono, que se llamaba Blackberry, y un fotógrafo inquieto no tuvo mejor idea que fotografiarlo. ¿Y qué había en ese teléfono? Los mensajes que le mandaba un representante de la minera que estaba en las gradas.

Imagínense lo que pasó en el momento cuando se supo. Después hubo otros intentos y terminó, lamentablemente, con una crisis muy grande en la provincia del Chubut. Esto es porque no hay debate, porque se hace entre gallos y medianoche. Si una ley es buena, se debate, se habla.

En la ciudad de Esquel, en mi provincia, hubo un plebiscito, donde el 83 por ciento de los ciudadanos estaba en contra de la explotación minera.

También hay que sacar eso de que las mineras traen riquezas. Traen riqueza para unos pocos, no para el pueblo argentino. Nosotros tenemos muy cerca a la provincia de Santa Cruz, donde hay minería con pueblos muy pobres.

En mi ciudad tenemos actividad petrolera, nos dicen que somos la capital del petróleo, y cuando a algunas empresas no les convino más la actividad petrolera o hubo un aliciente para ir a Vaca Muerta, porque es mejor o más rentable, rápidamente abandonaron la ciudad dejando un desastre ambiental: más de siete mil pozos dentro del ejido urbano.

Por eso, es bueno que Neuquén, que hoy está en ese esplendor, vea lo que pasa en otros lugares cuando esto se termina, porque las empresas... Es verdad, es interesante y necesario, pero es necesario que los Gobiernos provinciales les hagan sentir el rigor a esas empresas en cuanto a que no todo se lo pueden llevar, porque después terminan y quedan esos pueblos abandonados a la buena de Dios.

Nosotros tenemos un refrán, en nuestra ciudad decimos: Juan Comodoro, buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed. Hay que tener cuidado con eso. No todo es válido.

Nosotros tenemos que respetar el pedido de la gente. Lo vimos acá cuando Greenpeace vino a explicar lo que la minería podía hacer..., y los

glaciares y periglaciales. ¡Ya estamos rascando la olla! Hoy, hay minería y hay provincias que la aceptan y hay gente que la ha aceptado. ¡No está mal! Pero ya quieren raspar la olla en algunos lugares. Y lo hacemos de la forma indebida: no respetando absolutamente ningún reglamento.

Recién se fue el senador Juez, que hace un tiempo atrás decía que debemos tener cuidado, porque las empresas que vienen... Acá hay algo raro. Aparentemente, ahora ya no es más raro y todo pasa a ser blanco, transparente. Esto es por lo que la gente desconfía: ¿por qué en una época era malo y por qué ahora es bueno?

Debemos tener cuidado con estas cosas que no tienen retorno: un país puede vivir sin minería, pero no puede vivir sin agua. Tengámoslo en cuenta por nosotros y por nuestras generaciones. El mundo va a tener peleas y una de esas peleas va a ser por el agua. Ya estamos incumpliendo: la mayoría de las tierras en zonas de frontera son extranjeras, cosa que no se puede o no se podría. Entonces, debemos tener mucho cuidado cuando legislamos no para nosotros, sino para nuestras generaciones. Con consenso social es válido, sin consenso social no es válido.

No se puede cambiar esto. No se puede cambiar una ley a la una y treinta y cinco otra vez. La otra vez fue a la madrugada. Yo creo que todos los que estamos acá somos personas de bien y no queremos que esto nos pase, que nos utilicen. Porque nos están utilizando a todos acá, eh. Algunos vivos de acá, que van saltando de gobierno en gobierno, que siempre tienen una nueva idea... Yo me acuerdo cuando la senadora Bullrich decía que Milei tenía ideas malas y peligrosas, y ahora pasó a ser Churchill.

Entonces, ¡algo pasa! No podemos mutar tan rápido, y esto no fue hace veinte años atrás. No quiero decir otras cosas más que decía Milei de Bullrich, porque, si no, tiene que venir la brigada de explosivos acá. Debemos tener cuidado con lo que decimos.

Yo voy a rechazar esta ley, pero no porque la propone el Gobierno. No, la rechazo porque estoy convencido de que así no se legisla, porque no nos votaron para venir a hacer esto. Esta es otra vergüenza que le vamos a dar a la ciudadanía.

Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Moisés).- Muchas gracias, senador Linares.

Tiene la palabra el senador Olivera Lucero.

Sr. Olivera Lucero.- Gracias, señora presidenta.

Hoy, nos convoca un debate muy esperado. La verdad es que llevamos esperando quince años para tratar algo que es de vital importancia no solamente para las provincias cordilleranas, sino también para toda la República Argentina.

Para despejar toda duda respecto de las alocuciones que vengo escuchando, quiero aclarar que este proyecto de ley no deroga la protección de glaciares, no habilita las actividades prohibidas y, sobre todo, no viola la Constitución Nacional. Todo lo contrario, hace que se cumpla.

La Constitución Nacional es clara y establece en su artículo 41 que la Nación debe establecer los presupuestos mínimos para la protección

ambiental, pero presupuestos mínimos significa un piso, no una regulación que lo abarca todo y termina anulando el federalismo.

El artículo 124, como explicó el miembro informante, les da a las provincias el dominio originario de sus recursos. Con lo cual, lo que está haciendo esta ley es armonizar ambos recursos, que fue lo que nos pidió la Corte Suprema que hiciéramos.

Hay quienes presentan este debate como una elección imposible. Acá hay varios que dicen que es o agua o el desarrollo productivo de un montón de provincias. Esta dicotomía es totalmente falsa. Lo digo con convicción, después de haber escuchado a un montón de especialistas, después de haber analizado análisis científicos de que el agua y la minería no son enemigos. Nunca lo fueron. Lo que sí es enemigo, lo que sí está mal, es una buena práctica ambiental con una ambigüedad jurídica como la que tenemos con la ley actual. Esta ley, justamente, viene a terminar con esa ambigüedad y, de esa manera, vamos a proteger mejor el agua y vamos a habilitar el desarrollo de las provincias que tanto lo necesitan.

¿Por qué es necesaria esta reforma? Hoy, tenemos una legislación que abarca definiciones tan amplias que terminamos protegiendo absolutamente todo lo que no es agua. Trata exactamente igual a una geoforma que aporta un recurso hídrico que a una roca congelada a cuatro mil metros de altura, que no tiene ninguna injerencia hídrica. Digo más, esta ley fue tan mala, tan técnicamente deficiente, que la primera versión que tuvo, en el año 2008, fue derogada. Dos años después, el mismo Gobierno la terminó aprobado, pero fue una ley que nació torcida. Y cuando uno lee por qué se derogó en el año 2008, las explicaciones dicen que esta ley afectaba el desarrollo de las provincias. Hoy, quince o dieciséis años después, estamos tratando de arreglar esta ley mala que comprometió a un montón de provincias.

En el plenario de las comisiones de Minería y de Ambiente tuvimos la oportunidad de escuchar al director del IANIGLA, que, a través de Zoom, dio una exposición en la que citó expresamente que se necesita un estudio de campo para saber si una geoforma presente en el ambiente periglacial es o no un recurso hídrico. Y el IANIGLA no realiza esos estudios de campo, simplemente se basa en imágenes satelitales; con lo cual, hemos paralizado el desarrollo de provincias enteras sobre la base de una realidad hidrológica. Por eso, es algo que hay que modificar y, por suerte, llegó ese debate.

Además, la Argentina es el único país en el mundo que convirtió el ambiente periglacial en una categoría jurídica; el único país en el mundo, ni Chile, ni Perú, ni los Estados Unidos, ni Canadá, ni ningún país europeo con cordillera, con glaciares, tiene una legislación similar. ¿Y eso quiere decir que ellos no protegen el medioambiente? ¡No, todo lo contrario! Lo protegen, pero lo protegen con institutos serios que se basan sobre análisis científico y no sobre presunciones teóricas de alguien sentado mirando una imagen satelital que determina si es o no un periglacial. Estamos convencidos de que no existe un control ambiental eficaz cuando la base legal no puede medirse científicamente.

Entonces, ¿qué protege esta ley? Esta ley es clara: protege la geoforma dentro del ambiente periglacial, que cumple, efectivamente, una función hídrica. Eso es lo que se protege; eso es lo que se va a inventariar. Ahí es donde cae la prohibición: sobre lo que aporta el recurso hídrico, no sobre todo lo demás. Porque si vamos a proteger un suelo congelado que no aporta

absolutamente nada, eso no es ambientalismo, es burocracia que paraliza el desarrollo entero de varias provincias del país.

Quiero dejar en claro que si la ciencia –no alguien sentado analizando una imagen– demuestra que la geoforma da un recurso hídrico, es intocable, se acaba la discusión. Ahora, si demuestra lo contrario, si demuestra que es una roca petrificada, que no aporta ningún recurso hídrico, ¿por qué no vamos a realizar una actividad ahí?

El artículo 124 de la Constitución Nacional no es una sugerencia, es un mandato. Le da a las provincias la potestad para administrar sus recursos. Y este proyecto devuelve a las autoridades locales la facultad y, también, la responsabilidad de decidir sobre una base técnica –como lo establece el proyecto–, sobre un estudio de impacto ambiental si se puede o no ejercer una actividad. Ese es el verdadero federalismo; esta es la gestión basada en un conocimiento real del territorio y es, también, la verdadera protección ambiental, aquella que podemos medir, aquella que podemos auditar y aplicar sin arbitrariedades.

La protección ambiental moderna no delimita la actividad humana por su mera existencia; todo lo contrario, gestiona sus impactos y establece la prohibición que se activa cuando hay un daño relevante. Esto es importante: si hay un daño relevante, se activa la prohibición. Cuando se trata de un daño que se pueda medir, un daño que sea real, ahí es cuando la protección ambiental es efectiva.

Si la Argentina puede extraer el cobre, el litio, el oro, la plata que el mundo necesita para la transición energética, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué le vamos a negar a las provincias, por qué le vamos a negar a los argentinos la oportunidad de explotar nuestra cordillera sin distorsionar estas fuentes de agua para que le podamos proveer al mundo los minerales que tanto necesitan para esa transición energética?

Estamos votando un federalismo de concentración maduro, con una protección ambiental que se basa en hechos científicos, donde la ciencia reemplaza el perjuicio.

Venimos a terminar. Este Gobierno viene a terminar con el Estado ineficiente, con las normas que traban el desarrollo productivo, porque sin técnica no tenemos una política seria; sin federalismo real no hay un país posible y sin seguridad jurídica no tenemos futuro, no tenemos desarrollo y no tenemos inversión.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Paoltroni).- Muchas gracias, senador Olivera Lucero.

Tiene la palabra la senadora Alicia Kirchner.

Sra. Kirchner.- Gracias, primero que nada.

Tal como informaba nuestro miembro informante, la verdad es que la ciencia advierte, pero el Gobierno sigue avanzando y atropellando. Y lo más claro y lo más ejemplificador de lo que estoy diciendo es este dictamen que circuló hace unos minutos, que, por lo poco que pude leer, realmente es un adorno en el que no se toca el tema de fondo. No sé, ¿pretenderán lavar, después, estas torpezas con el agua de los glaciares?

La verdad es que por respeto a los que nos escuchan, siento que haya este retroceso institucional. ¡Y ustedes saben que hay retroceso institucional! Pero, bueno, te mandan la orden y a cumplir.

El mundo necesita del agua. La Argentina es la tercera reserva de agua. ¿Cómo no la van a mirar algunas multinacionales o corporaciones?

No es que yo no quiera que se trabaje con la minería. De hecho, en mi provincia -les voy a contar un poquito, porque, a veces, es bueno abundar en detalles-, hace veintiocho años se empezó a trabajar en el Cerro Vanguardia, una mina de oro y plata, cuando Néstor Kirchner era gobernador, con la empresa Pérez Companc, Pecom. Se cuidó el ambiente, se trabajó en la biodiversidad, en el respeto de todo lo que corresponde, sin tener todavía esta ley nacional.

Hoy, tenemos cinco proyectos de minería, de explotación. Somos la primera provincia que exportamos oro y plata en la Argentina. Si ustedes me preguntan cómo se trabajó con las mineras, con la cámara minera: excelente. ¿Pero saben por qué? Porque hay un respeto institucional, porque respetamos las reglas.

No sigan en este camino. Nuestras aguas son vida. Y, realmente, caminar con este desorden institucional en una ley como esta me da muchísima pena. Pensé que había más seriedad. Últimamente, no terminaron de exponer quienes han venido a las distintas comisiones y se pasan los dictámenes antes. La nueva: no hay respeto por el Reglamento. Como bien dijo el miembro informante, si quieren cambiar el Reglamento, cámbienlo, total, las manos les dan, pero hagan las cosas como debe ser.

Pero ahora lo que me preocupa es esta ley. Usted sabrá que entre mil doscientos y dos mil millones de personas hoy viven en tierras desérticas. Por ejemplo, Medio Oriente; por ejemplo, el norte de África. Acá, en Latinoamérica, también tenemos en Chile los mismos problemas.

Con respecto a los humedales, cada vez se secan más esos lagos y lagunas, y todos lo vemos. Negar el cambio climático, señor presidente, es una barbaridad. La verdad es que no comprendo tan poca seriedad. El cambio climático está, el calentamiento global está y el sentido de lo colectivo no está. ¿Qué le quiero decir con el sentido de lo colectivo? Cuando la ley habla de un piso, de un presupuesto mínimo, está protegiendo nuestro territorio nacional.

Esta ley, si se aplica como ustedes pretenden, no va a permitir lo mismo. Sí va a haber muchos litigios, eh. Va a haber mucho trabajo en la Justicia. Realmente, es incomprensible.

¿Ustedes no piensan en sus familias, en sus hijos? ¿O piensan en el ahora? Y con esto no me quiero volver retórica, pero si vinieron dieciséis organizaciones a hablar a este Congreso y también autoridades institucionales, supongo que fue para recoger información concreta en base a nuestras preguntas. La verdad es que tampoco se respetó lo que ellos dijeron.

El Instituto que regula los glaciares, los periglaciares y todo lo que tiene que ver con el ambiente cuenta con profesionales y becarios de primer nivel. Lo necesitamos; yo lo necesito en mi provincia. Díganme qué provincia va a estar en condiciones de hacer las investigaciones que sean necesarias -

¡díganme!- si hasta el personal básico de salud pública de los hospitales es cada vez menos.

-Manifestaciones fuera de micrófono.

Sra. Kirchner.- Sí, señora. Cada vez tenemos menos. Pensar que las provincias están en condiciones de hacer todas las evaluaciones es pecar con mucha ligereza.

El agua es un recurso estratégico; el agua potable es fundamental como recurso hídrico, es fundamental para la siembra, es fundamental para la vida. El pensamiento...

-Murmullos en el recinto.

Sra. Kirchner.- Disculpe, señor presidente, estoy siendo interrumpida y me gustaría seguir hablando.

Sr. Presidente (Abdala).- No hablemos, por favor.

Muchas gracias.

Sra. Kirchner.- Bueno, eso se llama respeto institucional.

Realmente, si quieren hacer las cosas bien, sería bueno que esta ley vuelva a comisión y que escuchen. ¡¿Tanto cuesta escuchar?!

Mire, el agua es un problema desde la época de Roma, 312 años antes de Cristo. Con una ingeniería fenomenal supieron darle respuesta, abrir acueductos y repartir más de un millón de metros cúbicos de agua por día. ¡Miren en qué época! Pensando en la comunidad, pensando en la salud de la gente.

Insisto con que no creo que una cosa sea contradictoria con la otra, pero el piso mínimo, el presupuesto mínimo, lo tiene que establecer la Nación.

De esta manera, yo creo que la ley va a ser intervenida porque no tiene seguridad jurídica. Y cuando escuchen las distintas opiniones que tenemos, se van a dar cuenta de cómo hicieron este cambio entre gallos y medianoche, como diciendo ¡ganamos! No es cuestión de ganar o perder, no es cuestión de ser primeros o segundos: es cuestión de darle respuestas a la gente de nuestro país.

El agua es vida. Y ¿saben una cosa? Yo apuesto a la vida y también a las reglas claras.

Muchísimas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Alicia Kirchner.

A continuación, tiene la palabra el senador Jorge Capitanich.

Sr. Capitanich.- Gracias, señor presidente.

El mundo tiene 510 millones de kilómetros cuadrados de superficie: el 70 por ciento es agua y el 30 por ciento es tierra. Dentro del 70 por ciento de agua, el 97 por ciento es agua salada y el 3 por ciento es agua dulce. Eso significa que el 29 por ciento de la superficie terrestre es forestal, el 27 por ciento es superficie cultivable y el 9 por ciento de la superficie es agrícola; de manera tal que son 1.400 millones de hectáreas que, efectivamente, garantizan la provisión de alimentos del mundo.

El agua, ese 3 por ciento del agua dulce, tiene que ver con una puja desde el punto de vista de la preservación del agua dulce como reserva estratégica, por una razón muy sencilla: porque tiene múltiples usos. El primer uso es el de consumo humano, el segundo uso potencial es el consumo productivo vinculado a la agricultura y a la ganadería, y el tercer uso es para la preservación de la biodiversidad en el marco de la coexistencia de la fauna y de la flora.

En ese contexto, quiero transmitir que pertenezco a un movimiento político cuyo líder, el 21 de febrero de 1972, dirigió un mensaje a los pueblos y a los gobiernos del mundo en el momento en que, efectivamente, se realizó la primera conferencia ambiental de la humanidad en Estocolmo, Suecia. Y en ese contexto, también pertenezco a un movimiento que predica y propone la doctrina social de la Iglesia, donde consideramos al Hombre como imagen y semejanza de Dios, en virtud de lo cual tuvimos un papa, el Papa Francisco, que el 24 de mayo de 2015, a través de la encíclica *Laudato si'*, estableció, claramente, una cosmovisión respecto de la protección de la casa común, para lo cual, obviamente, plantea la defensa asociada entre el desarrollo productivo con la protección del ambiente en términos de sostenibilidad.

Quiero transmitir que hemos recibido a treinta y ocho organizaciones de la sociedad civil que nos han planteado sus observaciones, y también a la Academia Argentina de Ciencias Ambientales.

Es absolutamente imprescindible entender que los glaciares constituyen una fuente de provisión de agua, resguardan el 70 por ciento del agua dulce que forma el hielo y la nieve, y, naturalmente, constituyen una gran acumulación de hielo. Y sus cuerpos, efectivamente, son hielos perennes formados por la cristalización de la nieve. En ese contexto, es importante remarcar que el cambio climático, que afecta a la humanidad y tiene que ver con el calentamiento global y con la emisión de gases de efecto invernadero, implica claramente una afectación, en el período 2010-2019, de los glaciares en todo el mundo, en virtud de lo cual han perdido masa producto de ese calentamiento de carácter global.

La República Argentina, que tiene 2.780.000 kilómetros cuadrados –y 3,7 millones de kilómetros cuadrados si se incluyen las Islas Malvinas, islas del Atlántico Sur y la Porción Antártica Argentina–, es un país bioceánico y uno de los de mayor diversidad de glaciares en el mundo. Tenemos 16.968 cuerpos de hielo que ocupan una superficie de 8.484 kilómetros cuadrados. En ese contexto, a lo largo de 5.000 kilómetros también tenemos 36 cuencas con 12 provincias que, efectivamente, forman parte de esta. Son 36 cuencas, 12 provincias, 5.000 kilómetros de largo y, naturalmente, una superficie muy significativa, como ya dije.

Entonces, lo que me parece clave es fijar una posición concreta. Nosotros estamos observando la propuesta de modificación de la Ley 26.639, que antes estaba regulada por la Ley 25.688, que era el Código Civil, y la regulación desde el punto de vista del Código de Aguas. Lo que quiero transmitir es que si hay un Gobierno que ha impulsado la inversión minera en la República Argentina, ha sido el peronista. La Ley 14.222, la primera; en segundo lugar, el Acuerdo Federal Minero; en tercer lugar, la Ley de Inversiones Mineras y, en cuarto lugar, todo el flujo de atracción de la minería para el desarrollo en la República Argentina.

De manera tal de que la compatibilización entre inversiones mineras de carácter estratégico y preservación del ambiente constituyen para nosotros una fuente de desenvolvimiento y desarrollo. Es más, siempre se cuestiona cómo es posible que Australia, con 7,7 millones de kilómetros cuadrados de superficie total, tenga más de 120.000 millones de dólares de exportaciones mineras, y cómo puede ser que Chile tenga más de 60.000 millones de dólares de exportaciones mineras, lo mismo que Perú. Y, en ese contexto, con Chile se plantea teniendo la misma cordillera.

En efecto, los incentivos están, y ustedes saben que un proyecto minero puede tardar entre dieciséis y treinta y cuatro años. Dependiendo de las características de su envergadura, puede tardar un promedio más o menos de veintidós a veinticuatro años, pero requiere una serie de etapas. Por lo tanto, estamos absolutamente de acuerdo con tener previsibilidad, reglas claras.

Ahora bien, aquí de lo que se trata es de que había una ley. Primero, la ley de 2008, que fue vetada en su totalidad. En 2010, tuvo una sanción, y a partir del fallo Barrick contra el Estado Nacional, la Corte Suprema de Justicia falla el 4 de junio del año 2019 estableciendo claramente la compatibilidad del artículo 41 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, y del artículo 124, respecto de la combinación de los presupuestos mínimos en materia ambiental, juntamente con el dominio originario de las provincias desde el punto de vista de sus recursos naturales.

De manera tal que lo que transmitimos acá es que las recomendaciones tienen que ver con una cuestión que es clave. Nosotros aquí estamos discutiendo sustancialmente el principio precautorio. Y el principio precautorio tiene que ver con una cuestión clave, que son las autoridades locales que pueden decir qué es un glaciar y qué no es un glaciar. Y acá hay un tema central que son los glaciares y lo que implica el entorno periglacial.

Entonces, ¿cuáles son las cuestiones claves? Nosotros propiciamos –por el tiempo que tenemos– un rechazo a la reforma de la Ley 26.639, porque consideramos que los presupuestos mínimos están perfectamente enmarcados no solamente para la inversión minera correspondiente, sino también para el Inventario glaciar y para el desarrollo de la evaluación del impacto ambiental, de la evaluación del impacto estratégico, y para garantizar, con una precisión meridiana, qué es un glaciar o área periglacial y qué no es.

Eso da seguridad jurídica, previsibilidad y garantía efectiva de que no existe incompatibilidad entre una autoridad local y una autoridad nacional, por una razón muy sencilla: porque esto también nos pasa a las provincias del norte cuando discutimos la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Bosques Nativos, la Ley 26.331. Y para tener coherencia en lo que uno dice, desde el punto de vista de ambas cuestiones, aquí la tutela ambiental determina, claramente, que el presupuesto mínimo es la base, y después está el principio de progresividad, desde el punto de vista de la protección ambiental.

En consecuencia, frente a un proyecto minero, una autoridad provincial establece claramente el impacto que tiene en materia paisajística, el impacto que puede tener en la fauna, el impacto en la flora.

En ese contexto, lo que quiero transmitir es que el principio precautorio es el núcleo de este debate: si el glaciar o la geoforma periglacial del Inventario no están alcanzados por la ley o se excluye. Por lo tanto, nosotros planteamos el rechazo a la reforma de la ley.

Segundo, planteamos que esto no contribuye a la eficiencia en materia del desarrollo de la industria de la minería.

Tercero, debilita la adopción de medidas y políticas que requieren preservar cuencas hidrográficas e hidrogeológicas, proveedoras de agua, no solamente para el consumo humano, sino también para el consumo de carácter productivo y la protección de la biodiversidad.

Entendemos que la interpretación de la Constitución Nacional es perfectamente clara desde el punto de vista de la compatibilidad de los artículos 41 y 124; que las autoridades competentes deben tener la consulta al IANIGLA, que tiene que tener obviamente el fortalecimiento de las capacidades estatales e institucionales para tener estudios adecuados; que el principio precautorio es la clave para dirimir con precisión qué es un glaciar o qué es un área periglacial, y qué es y qué no es, desde el punto de vista de la inversión minera.

Y lo que nosotros consideramos clave es la aplicación de la Ley de Presupuestos Mínimos de carácter general, que es la Ley 25.675, que oportunamente ha garantizado y promueve, eficaz y eficientemente, inversiones de carácter minero. La Argentina ha tenido un avance de 4.000 a 7.000 millones de dólares en exportaciones con oro y plata, que hoy es cerca del 70 por ciento de las exportaciones totales; litio, que tiene una incorporación muy importante; el cobre, en el marco de un incremento de los precios de estos bienes que son estratégicos. Y la minería estratégica es clave, del mismo modo que la incorporación de tierras raras u otros bienes minerales estratégicos.

La proyección, desde el punto de vista de las exportaciones mineras, puede crecer sustancialmente. Pero crecerá si y solo si existen capacidades estatales regulatorias muy eficientes y claves que combinen adecuadamente el dominio originario de los bienes por parte de las provincias con una regulación ambiental apropiada; y que toda inversión en esta materia nos permita garantizar producción, generación de empleos de buena calidad, cadenas de valor eficientes y red de proveedores locales, como han hecho Australia, Canadá, Chile y como lo hace el resto de los países del mundo.

Tener garantías de inversión, crecimiento, reproducción de empleo de buena calidad y la preservación del ambiente implicaría no solamente reducir y eliminar conflictos, sino también potenciar las garantías correspondientes, no solamente para la inversión y para los inversores, sino también para nuestra población y nuestros habitantes. Digo esto porque de muchos de los ríos -como ya lo mencionaron, Atuel, Colorado y otras cuencas correspondientes- dependen, sustancialmente, la preservación de la vida humana y el desarrollo colectivo de pueblos, comunidades, provincias, para hacer grande a la Nación.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Capitanich.

A continuación, tiene la palabra el senador por Río Negro, Enzo Fullone.

Sr. Fullone.- Gracias, señor presidente.

Me gustaría que imaginemos una Argentina donde la protección ambiental no sea sinónimo de parálisis sino de reglas claras. Hoy en día tenemos grandes recursos en la Argentina, y las provincias conocen mejor que nadie su territorio, sus cuencas, sus recursos naturales y su clima, aunque digan que las provincias son inútiles para administrarlas. Eso hace que esta ley que queremos modificar hoy transmita el federalismo que necesitamos y en el que el Gobierno Nacional viene trabajando en estos dos últimos años, a fin de que todas las provincias puedan ser exitosas y desarrollarse de mejor manera para tener mayores ingresos, mayores recursos y así el país pueda seguir saliendo adelante. Una Argentina donde el agua es protegida y esta ley no lo cambia, al contrario, se aclara –como bien decía el senador preopinante–, y se integra un principio precautorio donde el Inventario, que tardó ocho años en crearse, no se va a tocar, salvo estudios pertinentes o que la provincia así lo decida.

Otro de los artículos que se agrega fortalece el federalismo de las provincias, haciendo que todos esos impactos ambientales, las consultas sociales que se requieran, tampoco se saquen y se sigan haciendo como se venía haciendo hasta ahora. Es decir, el Inventario Nacional sigue siendo la consulta ineludible, pero no puede menoscabar atribuciones locales.

Como bien lo dice la Constitución, el artículo 41 ordena proteger el medioambiente. Pero también en su artículo 124 establece que los recursos naturales son de las provincias. Eso hay que respetarlo y trabajar ambos artículos para llegar al bien común.

En 2008, esta ley fue vetada. Llevamos más de quince años trabajando para que poco se haya avanzado en materia de minería, pensando en que un país como Chile tiene entre el 10 y el 15 por ciento del PBI de sus ingresos por exportaciones mineras, y un 50 por ciento de sus exportaciones son la minería. Comparado con nuestro país hermano, nosotros tenemos muy poco desarrollo, hasta hace poco que comenzó esta gestión.

Quiero recalcar algo importante que también escuché decir hoy a otros senadores que hablaban del agua como la supervivencia. Supervivencia es lo que tuvimos que hacer estos dos años del país que heredamos. Un país con un montón de pobreza, con poco desarrollo. Lo que buscamos con la modificación de la ley es que se siga protegiendo el agua y los glaciares, pero que en pocos años podamos tener un segundo campo, un segundo ingreso –como las exportaciones que hoy tiene la Argentina con el campo– con la minería, porque en el mundo en el que vivimos no podemos dejar de producir con los recursos naturales que tiene nuestro país, me refiero al cobre, al oro y al litio, y que hacen al cambio energético mundial en este momento.

Señor presidente: es ilógico que sigamos pensando que la minería no va a generar empleo y que no va generar desarrollo local y provincial. Pensemos que esto desarrolla grandes actividades secundarias, como la construcción, la gastronomía y todo lo que conlleva una industria –como lo podemos ver en nuestra zona del Alto Valle con la industria energética– en provincias que no tienen glaciares, como decía mi compañero senador Bruno Olivera hoy, rocas a 4.000 metros de altura congeladas que hoy no sirven para nada y no implican ningún problema para el recurso hídrico.

Por eso, creo que es importante no perder más décadas y explotar este recurso natural tan agraciado que tenemos en el país, que genera empleo y genera desarrollo provincial y nacional, y además va a hacer grande nuevamente a la Argentina.

Pensemos que la materia energética viene creciendo a una escala formidable, que el campo también viene creciendo gracias a la baja de retenciones, y hoy tenemos la oportunidad de poder darles previsibilidad a las empresas que quieran seguir invirtiendo en la minería en la Argentina, para que podamos exportar –como dije anteriormente– los recursos naturales y generar desarrollo local, provincial y nacional en las provincias que hoy no lo tienen.

Por estas razones, como seguramente lo harán mis compañeros de bloque, mi voto hoy va a ser por la afirmativa para esta ley que viene a cambiar y a mejorar la ley que tenemos vigente.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).– Gracias, senador Fullone.

A continuación, tiene la palabra el senador también por Río Negro, Martín Soria.

Sr. Soria.– Vamos todos juntitos hoy.

A mí me encanta que el miembro preopinante, de alguna manera, termine confesando que la aclaración que contiene este proyecto a la ley de presupuestos mínimos para la protección y preservación de nuestros glaciares y zonas periglaciales tiene que ver con la minería, la megaminería y la extracción de recursos. Me encanta, porque hasta ahora no muchos miembros preopinantes del oficialismo lo habían reconocido tan explícitamente. Y la verdad es que celebro la honestidad intelectual, porque es cierto. Este no es un proyecto técnico, no es un proyecto que tenga fines ambientales, claramente, es una reforma ideológica, totalmente servil. Por eso ya venía escondida en la Ley Bases. ¿Se acuerdan, no? Estas aclaraciones a la Ley 26.639 ya venían en la Ley Bases. Y también esto de modificar la ley que protege a los glaciares fue parte de la discusión del Pacto de Mayo con algunos gobernadores. Hay desesperación detrás de todo esto.

Lo que el oficialismo pretende con esta reforma claramente ideológica es una Argentina reducida, una reducción a la exportación de recursos naturales en bruto. Esto es. El modelo de país como el que pretenden Milei y ustedes es el de un país primarizado, donde se exportan recursos naturales de todos los argentinos y de las futuras generaciones, totalmente subordinado a los intereses del mercado global.

Tenemos que decirlo: no es casualidad que estemos tratando esta modificación a la Ley de Glaciares y mañana tratemos la flexibilización laboral, que ustedes dicen que es una modernización. No es casual. ¿Qué mejor que vengan de afuera los socios que pusieron a este presidente en la Casa Rosada, destruyan los glaciares, nuestra cordillera, nuestros recursos naturales, y se los lleven de la manera más barata? ¿Y qué mejor que una flexibilización laboral, con trabajadores debilitados, con menos derechos y que puedan ser despedidos de la manera más barata posible? Esta es la Argentina de ustedes, de la que el otro día uno de sus integrantes hablaba como la de 1880. ¿Se acuerdan?

Estamos ante una avanzada del oficialismo que, claramente, bajo el disfraz de que quieren mejorar la ley, de que quieren “aggiornarla”... Porque es una ley a la que le falta claridad. Miren, más clara que la Ley 26.639, que protege los glaciares, no creo que haya. No hay nada que aclarar. No hay nada a qué brindarle seguridad jurídica, salvo a negocios turbios, que seguramente los habrá. Es para desguazar y destruir glaciares que, insisto, son recursos naturales; para abrirle la puerta a la producción minera en zonas en donde hoy, por suerte, no pueden poner un pie.

A su vez, claramente, la intención del oficialismo es restringir la protección de nuestros glaciares solamente cuando tengan dimensiones considerables. A menos que hayan cambiado a último momento el proyecto, eso era lo que se entiende por glaciares y zonas periglaciales. Que tengan dimensiones considerables dice el proyecto, o que cumplan con una función hídrica verificada. De esa manera, si bien no lo dicen, dejan excluidos a los que se denominan como glaciares de escombros, a las zonas periglaciales, lo que en Río Negro, Neuquén y en nuestra cordillera los patagónicos conocemos como las nieves eternas en las altas cumbres.

El miembro informante habló de “Estas leyes de chetos”, y otro recién hablaba de piedras congeladas allá arriba, a 4.000 metros –mirá vos, che–, sin saber que estas zonas periglaciales y estos glaciares representan entre el 25 y el 50 por ciento del recurso hídrico cuencas abajo de estos glaciares en provincias patagónicas en donde sus bosques vienen de dos veranos de incendiarse. Hablamos de bosques que nuestros hijos y nietos no van a volver a ver dentro de cuarenta años porque tenemos un presidente al que no le importa destruir el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, no le importa destruir parques nacionales, no tener brigadistas, y no le importa mandarles los recursos que les corresponden a los bomberos voluntarios; se los manda en emergencia como si fuera un gran gesto, cuando en realidad es plata que les deben a los cuarteles de bomberos.

En medio de esta emergencia hídrica que sufren la Patagonia y varias provincias, en medio de los incendios forestales de nuestra cordillera, además, quieren autorizar que empresas mineras extranjeras –grandes amigas de ustedes, de Toto seguro y de Sturzenegger ni les digo– vengán a hacer minería de altura.

Por eso es que, como odian la ciencia y la tecnología, dicen “leyes de chetos”. Por eso quieren dismantelar un instituto que tiene técnicos y científicos del Conicet, que es un instituto autárquico, como el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología –el IANIGLA–, del que tanto se ha hablado acá, que depende de la Universidad de Cuyo. Quieren sacarles las facultades a estos técnicos y científicos de ser quienes digan cuáles son los glaciares y cuáles son las zonas periglaciales estableciendo el inventario. Lo quieren vaciar de contenido.

Ahora, gracias a esta fabulosa ley, ¿qué quieren hacer ustedes? Dicen: “Que sean las provincias, porque adoramos el federalismo”. ¡No pueden ser tan caraduras! ¿Ustedes federalismo? “Que sean las provincias las que decidan dónde se puede hacer minería en un glaciar o en un periglacial”. ¡No me digan! Che, ¿se enteraron de que, en mi provincia, en Río Negro, había un secretario de Minería y Energía que le dio doscientas canteras de arena al primo de un narco? ¿Así que ustedes les van a dar la facultad a los secretarios de Minería o de Medioambiente de las provincias para vaciar de

contenido a un instituto autárquico formado por técnicos y científicos? ¡Es de locos! Y todavía el otro papanatas hablaba de una “ley de chetos”; de que defender los glaciares es de chetos ¡Mirá vos, che!

Además, es increíble este proyecto de ley para aclarar y darles seguridad jurídica a estas grandes empresas que van a hacer megaminería de altura destruyendo glaciares; dicen que va a quedar prohibida la minería en un glaciar siempre y cuando se acredite que se altere de modo relevante la condición natural del glaciar. Insisto: en mi provincia un secretario de Minería le dio doscientas canteras de arena al primo de un narco, y además era funcionario público: era ñoqui de la Legislatura.

¿Se imaginan a ese funcionario negociando con una empresa minera canadiense o con una corporación norteamericana de minería? ¿Se lo imaginan? Saqueo y depredación se llama.

Pero, además, hay una gran mentira, porque recién el miembro preopinante volvió a decir que esto va a traer producción, trabajo y futuro desarrollo para la Argentina y habló de las ideas bondadosas de la libertad. ¡Dejen de mentir! ¡No mientan más! En algún momento la gente les va a sacar la careta; bueno, ya se las está sacando, ¿no?

Fíjense: dicen que esta es una ley del futuro, es para el futuro y el desarrollo, el crecimiento de la producción y para generar trabajo. ¡Todos dijeron eso! La verdad es que esta ley –y ustedes lo saben– no va a permitir ni generar el desarrollo de la Argentina; esta ley no va a permitir ni va a generar que salgan de esta crisis económica en la que ustedes nos sumergieron con este modelo que profundizan cada día; esta ley no va a generar ni evitar que dejen de cerrar treinta empresas por día –acaba de cerrar La Suipachense–. Esta ley no va a hacer que se dejen de perder miles de puestos de trabajo por día. ¡No mientan más! Esta ley es para un grupo de empresas privilegiadas, seguramente amigas de Milei, Toto y Sturzenegger.

Fíjense todo lo que vienen haciendo desde dos años para las empresas mineras. Miren lo que decía *La Política Online* el 13 de diciembre de 2024: Gracias al vacío legal permitido por Toto Caputo –el Messi de las finanzas–, hace siete meses que la Barrick no paga retenciones por el oro que extrae. Se olvidaron de sacar el decreto y la Barrick se lleva todo sin pagar nada, ni un centavo. Exportación en bruto se llama esto. Piratería. Esto lo permiten ustedes.

Tengo otro artículo periodístico de agosto del año pasado que dice que el Gobierno Nacional, el Gobierno de Milei, eliminó las retenciones a más de doscientos treinta productos mineros. ¿Qué implica la medida? Que a estos doscientos treinta productos les quitaron las retenciones, se las bajaron a cero. ¡Cero retenciones! ¡Piratería! Exportar recursos naturales en bruto, sin procesamiento, sin nada. ¿Qué se llevan sin pagar retenciones? Hierro, cobre, plomo, zinc, cal, cemento, mármol, dolomita, canto rodado, adoquines, piedra pómez, granito, caliza, cuarzo, potasio. Son doscientos treinta productos mineros, además del oro y la plata que se llevan los muchachos de la Barrick y otras más, sin pagar nada.

Además, está el RIGI, a través del cual, gracias a la Ley Bases y demás, generaron condiciones infernales para que saqueen, depreden y no dejen un mango en la Argentina, además de no generar trabajo. Pero, además de todo

eso, miren lo que decía *Infobae* a fines del año pasado: Paradoja. Pese a todos los beneficios y los anuncios de inversión, el empleo en el sector minero cayó por décimo mes consecutivo. Che, avísenles a sus amigos, los socios de las mineras, que se están llevando todo. Ahora, gracias a ustedes, van a destruir los glaciares y los periglaciales; van a dinamitar nuestra cordillera y no pasa nada.

Repito: el empleo en el sector minero cayó por décimo mes consecutivo. Esto es de fines del año pasado, 2025.

¿Y saben qué es lo más grave, y lo que seguramente más bronca da e indigna de todo esto? Que algunos hablan de la protección del medioambiente. Miren, yo no estoy en contra de la minería y de generar puestos de trabajo, pero responsablemente, cuidando el medioambiente, cobrándoles lo que hay que cobrar, pagando lo que tienen que pagar por los recursos que son de nuestros hijos y de nuestros nietos, que son de los argentinos y de las provincias.

Algunos de ustedes hablan del cuidado del medioambiente: “¡Quédense tranquilos que lo vamos a cuidar!”. ¿En serio quieren que creamos eso cuando un personaje como Milei dice que una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera? ¿En serio? Bueno, este personaje es el que manda esta ley firmada hablando de modificar la Ley de Glaciares y de los periglaciales para dar mayor seguridad jurídica, vaya a saber a quién.

Por eso, desde Río Negro, desde el peronismo y como representante de mi provincia, no estoy de acuerdo con acompañar una ley que va a generar semejante perjuicio para la Argentina, para sus recursos naturales, para mi provincia y para todo el pueblo argentino.

Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Soria.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de Río Negro, Marks, Ana Inés.

Sra. Marks.- Gracias, presidente.

Como lo hizo nuestro miembro informante, quiero reiterar la falta de respeto que significa este papelito que nos trajeron. (*Exhibe una hoja.*) ¡Ni el logo del Senado le pusieron! No le pusieron ni el logo del Senado a esto que se supone que tenemos que aprobar y que dudo que lo conozcan quienes lo van a aprobar, porque –para los que nos están viendo– aclaro que nos acaba de llegar. Es una falta de respeto absoluta a quienes participaron de las comisiones en la semana anterior, al Reglamento de esta Cámara; ni más ni menos que lo que vienen haciendo permanentemente.

También quiero poner en evidencia la falta de coherencia que podemos encontrar entre el debate de la mañana, en el que nos hablaban de la importancia del sostenimiento de las economías regionales, y dinamitar los cuerpos hídricos y dinamitar la cordillera, donde se resguardan nuestros cuerpos de agua.

Asimismo, quiero evidenciar la enorme inconsistencia e incoherencia que significa hablar de la importancia de reglas claras, de seguridad jurídica, y venir a romper una ley que, si hay algo que tiene, es que es absolutamente clara, en el sentido de que en el ambiente glaciar y periglacial no se puede

generar minería. Proceden ahora a la fragmentación absoluta de la normativa, dejando la decisión en manos de cada una de las provincias, bajo los criterios que a cada provincia le parezca, bajo el desarrollo científico que a cada provincia le parezca y con los funcionarios que cada provincia tenga a mano. Yo dudo que haya muchos glaciólogos en las secretarías de ambiente de las provincias. En algunas de las provincias, como la nuestra, la Secretaría de Ambiente y la de Minería es la misma; o sea que, en este caso, pone a los funcionarios en ambos lados del mostrador, rompiendo las reglas claras y el establecimiento de presupuestos mínimos que establece el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional.

Hay una absoluta incoherencia en quienes tienen la mirada de sostener el extractivismo y de seguir profundizando este país, que se reprimariza, que entrega y que permite que se extraigan sus recursos y nuestros bienes naturales comunes en función de los intereses de las corporaciones y, en este caso, de las empresas mineras.

No va a haber posibilidad de cuidar las economías regionales si destruyen las cuencas de agua y los recursos hídricos. Porque sin agua no hay vida, no hay economías regionales, no hay posibilidad de producción, no existe seguridad sanitaria, no existe desarrollo, no existe futuro, no existe posibilidad de bienestar para nuestra población.

Sin lugar a dudas, el agua es nuestro bien natural común máspreciado, y también uno de los más escasos, uno de los más buscados. Tenemos un reservorio de agua dulce importante de la Argentina que hace también que seamos observados a nivel internacional, y esto no solo requiere un compromiso en cuanto a la protección ambiental, sino también una mirada geopolítica estratégica sobre ese recurso que tenemos nosotros y nosotras, los argentinos y las argentinas, y que tenemos la necesidad de cuidar y proteger.

Como se decía al comienzo, esta ley que hoy pretenden modificar cumplió quince años, y surgió en un momento donde en este Congreso de la Nación se entendió que, ante el avance de la crisis climática y de los proyectos mineros en la alta montaña, era necesario establecer reglas claras para poder desarrollar esta actividad. Ahí surgió esta ley. Bueno, quince años después, aunque el presidente lo niegue, el cambio climático ha empeorado, está empeorando y acecha nuestros territorios. Quince años después los proyectos mineros de alta montaña, lejos de retirarse, están esperando que ustedes les modifiquen esta ley para poder dinamitar nuestra cordillera.

Entonces nosotros, lejos de estar pensando en flexibilizar la normativa, deberíamos estar pensando cómo nos resguardamos ante estas condiciones que dieron lugar a la sanción de esta ley que hoy pretenden modificar y que hoy, sin dudas, se han recrudecido. Pero, no, tenemos un Gobierno flexibilizador, un Gobierno entreguista, un Gobierno que sin dudas busca el saqueo, un Gobierno al que le interesan más los bolsillos de las corporaciones que nuestros pibes y nuestras pibas tengan agua cuando abran la canilla, que tomen agua sin contaminar. Queda clarísimo en este debate dónde está puesta la mirada, y está puesta ahí: en flexibilizar para responder a las necesidades del saqueo de empresas foráneas.

En mi provincia estamos en emergencia hídrica. En la provincia de Río Negro estamos teniendo un verano durísimo y hay emergencia hídrica. En los departamentos de Bariloche, de Ñorquinco, de Pilcaniyeu, de 25 de Mayo,

de 9 de Julio, de El Cuy y de Valcheta, básicamente, hoy no hay agua. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a levantar la mano para sancionar una ley que, sin dudas, va a seguir dificultando la situación de nuestras cuencas hídricas? ¿Cómo vamos a levantar la mano para aprobar una ley flexibilizadora que va a poner en riesgo la posibilidad de nuestros vecinos de abrir la canilla y tener agua? ¡No lo vamos a hacer bajo ningún punto de vista! Y la verdad es que me sorprende que haya senadores y senadoras que no estén pensando en esto. Me sorprende que haya senadores y senadoras que nos vengan a decir que es más importante garantizar un negocio minero que garantizar el agua en los territorios de sus provincias. Sinceramente, me sorprende, me llama notablemente la atención, y me llama notablemente la atención también que acepten este tipo de debate, donde se modifican los dictámenes, y acá pareciera que ni siquiera se sabe qué se está votando.

Esta ley es peligrosa ambientalmente, y no va a traer seguridad jurídica, sino todo lo contrario, porque tiene serias inconsistencias jurídicas, ya que va en contra del artículo 41 de nuestra Constitución. Porque nuestra Constitución reconoce a las provincias como dueñas de los recursos, pero en ese artículo 41 también nos manda a poner estándares mínimos, presupuestos mínimos de preservación ambiental, y un presupuesto mínimo de preservación ambiental es justamente la ley que están dinamitando, como pretenden dinamitar los glaciares. Entonces, ¿de qué seguridad jurídica nos hablan?

Además, esta ley también viola el Acuerdo de Escazú. Muchos estaban acá cuando se aprobó dicho Acuerdo. Hace solo cinco años este Congreso Nacional aprobó la ley que adhiere al Acuerdo de Escazú. ¿Qué nos dice? Que no se puede ser regresivos en materia de derechos ambientales. ¿Qué estamos haciendo con esta ley que hoy nos traen? Siendo absolutamente regresivos en materia de derechos ambientales, además de violar el artículo 41 de la Constitución.

Está claro que la seguridad jurídica no es para los ciudadanos argentinos; en todo caso, será la seguridad jurídica de cumplir con los compromisos que habrán asumido con algunas empresas. ¿Y qué excusa usan? Como ya apareció en varios de los oradores, la excusa es el supuesto respeto a las provincias.

Yo me muero de risa viendo cómo el Gobierno Nacional, que viene extorsionando a gobernadores, que suspendió la obra pública, que hizo que bajen la coparticipación y los recursos que las provincias reciben, ahora nos dice que está haciendo esto para respetar el rol de las provincias. Bueno, la verdad es que acá nadie quiere ni sería capaz de negar la importancia que tenemos las provincias como dueñas de los recursos naturales, pero sin dudas sacarse de encima la responsabilidad que tiene este Congreso de generar los presupuestos mínimos ambientales está absolutamente por fuera de la Constitución Nacional.

Lo que buscan acá es destruir ese piso de protección y convertirlo en un sótano; en un sótano para el saqueo. Eso están haciendo con esta ley en nombre de un supuesto federalismo, que más que federalismo es una absoluta fragmentación de las normas ambientales.

Lo decía al comienzo: cada una de las provincias establecerá el criterio y cuál es el funcionario que pueda levantar el teléfono y decir: “Sacame este glaciar”, “Poneme este otro”, “Este me parece que no está teniendo un rol

muy importante en materia de recurso hídrico”. Treinta segundos dura ese llamado, pero el daño ambiental que genera es irreversible, y sin dudas es para las próximas generaciones.

Están disfrazando de empoderamiento a las provincias; algo que, en definitiva, las pone a competir entre sí viendo qué provincia flexibiliza más. Competirán flexibilizando estándares ambientales para ver si se atraen inversiones. Bueno, no; nosotros creemos en un proyecto nacional, creemos en un proyecto de país, creemos en que el Estado Nacional tiene que tener una política clara y que los presupuestos mínimos ambientales se deben cumplir, se deben tener y se deben resguardar, y que el margen de acción de las provincias tiene que ser para arriba en materia de protección a esos presupuestos mínimos. Por eso esta ley, lejos de ser federal, atrasa y arrasa con toda la protección que hemos conseguido, y que sin dudas debería ser mayor, porque si no tenemos agua en las canillas de nuestros territorios deberíamos estar pensando cómo la cuidamos y no cómo la entregamos.

Quiero traer un ejemplo de mi provincia que no tiene que ver con minería pero que sí tiene que ver con el agua, y que pone en juego esto que venía planteando de este Gobierno que nos dice que les quiere dar poder a las provincias.

Hace pocos meses en nuestra región se volvieron a privatizar las represas de las hidroeléctricas de la región Comahue. Con mi colega senador Soria, y también a instancias de los senadores mandato cumplido Martín Doñate, Parrilli y Sapag, hicimos una presentación para que en esta nueva etapa las provincias tuvieran protagonismo. ¿Qué nos dieron? ¿Qué les dieron a las provincias de Río Negro y Neuquén en relación al manejo de las represas? ¡Nada! ¡El ciento por ciento de las concesiones fueron a manos privadas, a manos de amigos y a un precio vil! ¡Eso hicieron con el manejo del agua en las represas hidroeléctricas de Río Negro y Neuquén!

¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque, así como en la reprivatización de las represas del Comahue no les importaba el rol de las provincias sino qué empresa hacía un negocio, también ahora nos disfrazan de que les importa el rol de las provincias cuando, en realidad, lo que les importa es qué negocio está atrás de esta modificación que intentan instalar. Entonces, son cínicos, son mentirosos, y nos intentan convencer de cuestiones que claramente no les están importando. Porque si al Gobierno de Javier Milei le importase el rol de las provincias, lo primero que debería hacer es devolver la obra pública, porque están destrozando nuestras escuelas, están destrozando nuestras rutas y nos están dejando absolutamente abandonados.

El discurso del federalismo es puro cotillón. No nos vengán a correr con el discurso del federalismo, porque esto no es federalismo; y si es federalismo es un federalismo de fragmentación, un federalismo que va a poner a competir a las provincias entre sí para ver quién es menos restrictiva en materia ambiental.

Las consecuencias de esta flexibilización ambiental y de esta ley que nos traen, sin dudas, van a ser durísimas: son durísimas. No tienen ningún criterio común. Los glaciares pasan a tener que demostrar si son o no importantes en materia de la provisión de agua. ¡Es una cosa rarísima! Por definición, el glaciar y la zona periglacial es un lugar donde el agua se concentra y está a disposición, pero ahora hay que demostrarlo con criterios científicos que nadie sabe de dónde saldrán.

Esta contradicción constante, esta falta de claridad, esta visión que se nota en cada uno de los actos...

Hoy hablamos de flexibilización ambiental; mañana, de flexibilización laboral. Y en el medio, todo responde al mismo modelo de país que ustedes están buscando, vinculado al extractivismo, al endeudamiento, a la falta de desarrollo en los territorios y a garantizar los negocios para unos pocos.

Nosotros no estamos en contra de las inversiones ni del desarrollo. Lo que defendemos es la sostenibilidad de nuestros territorios. Lo que defendemos es el acceso igualitario al agua. Lo que defendemos es la existencia del agua como un recurso y un bien común. Lo que defendemos es el crecimiento económico y que sea con soberanía. Lo que defendemos es un ambientalismo popular, un ambientalismo que proteja a sus territorios, pensado desde las necesidades de nuestros pueblos.

En esta mirada, la Ley de Glaciares no necesita ser reformada. Lo que se necesita es que sea cumplida para que nuestros territorios y nuestra agua estén resguardados.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Marks.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad.

Sr. Abad.- Gracias, presidente.

Quienes me conocen saben que, en los últimos años, defendí con convicción el aprovechamiento de los recursos naturales.

La minería puede convertirse en ese círculo virtuoso que necesita la Argentina. Ese círculo virtuoso que tiene que ver con inversión, empleo, exportaciones y divisas.

Estamos hablando de ingresos por 30.000 millones de dólares anuales para la próxima década.

No hay dudas, señor presidente, de que la Ley 26.639 debe ser modificada.

Hay una laguna jurídica en torno a la implementación del Inventario Nacional de Glaciares que dificulta la instrumentación de proyectos mineros de gran envergadura.

Lamentablemente, esta iniciativa no solo no resuelve ese problema, sino que además trae otros.

Yo lo vengo diciendo: es un error debilitar el IANIGLA y dejar en manos de la provincia la decisión de eliminar los glaciares del Inventario. Porque lo que se invierte es la jerarquía normativa. Se subordina el orden jurídico nacional a la decisión de las autoridades provinciales, en franca contradicción con lo que establece el artículo 31 de la Constitución Nacional por el que se le da supremacía al derecho federal.

Como si esto fuera poco, también se viola la uniformidad de los presupuestos mínimos ambientales establecidos en la Ley 25.675.

Veámoslo en un caso concreto: una provincia respeta el Inventario y otra pide sacar un hielo para poder llevar adelante actividades extractivas. Ahí lo

que se termina produciendo es un esfuerzo ambiental absolutamente desigual.

Yo lo quiero alertar: si este proyecto se convierte en ley, va a ser pasible de muchos recursos de inconstitucionalidad.

Mientras esta ley esté vigente, vamos a construir un federalismo de conveniencia, de discrecionalidad y absolutamente desarticulado, como bien ha sido planteado en distintas intervenciones en este Senado.

Además de tener graves consecuencias ambientales y constitucionales, hay muchas inconsistencias desde el punto de vista económico. Porque tenemos que verlo por el lado de la seguridad jurídica. Si una empresa interesada en minerales vinculados al cobre y al litio ve semejante desorden en la Argentina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar sus cosas y se va a ir.

Hay que dar mucha seguridad jurídica en la Argentina para que las inversiones se radiquen.

Yo no soy ingenuo. Este es un debate complejo y legítimo. Entiendo perfectamente la posición de los gobernadores y la de los legisladores de las provincias cordilleranas. Y todos sabemos que existe una tensión histórica a nivel global entre la preservación de los ecosistemas esenciales y el progreso económico. Y que los países con altos niveles de desarrollo no solamente reconocen esta tensión, sino que también la solucionan con instituciones sólidas, con controles eficaces y con reglas que se cumplen.

Yo estudié este proyecto. Hace bastante tiempo que lo vengo haciendo. Y, sinceramente, no veo que haya una mirada de equilibrio. Este proyecto no la ofrece.

Por lo tanto, mi voto va a ser no positivo.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Abad.

A continuación, tiene la palabra la senadora Flavia Royón.

Le doy la palabra porque hay algunos senadores que la han pedido y no están presentes.

-Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Perdón.

El senador Bahl tiene la palabra.

Gracias.

Sr. Bahl.- Vamos a tener que hablar después, presidente. *(Risas.)*

Muchas gracias.

Yo siento que este debate no se debería dar como un partido de fútbol en el que unos ganan y otros pierden. Tampoco creo que es minería versus ambientes ni tampoco desarrollo frente a bienes naturales. Yo creo que se trata de encontrar soluciones inteligentes para que ambas dimensiones puedan convivir bajo reglas claras, previsibles y estables.

Hago una pequeña referencia a lo que ya se ha dicho: el hecho de haber recibido el dictamen un minuto antes del debate.

La verdad es que quiero entender que esta ley busca prioritariamente generar seguridad jurídica para seducir capitales, con el objeto de que vengan a invertir.

Imaginemos que en algún momento alguien lea la versión taquigráfica y le diga a un inversor: “Tené cuidado. Mirá que a los senadores les cambiaron el dictamen un minuto antes”. Y luego lo golpee en la espalda y le diga: “Mucha suerte con su inversión en la Argentina”.

Lo quiero destacar porque no es un hecho menor. Y si, justamente, gran parte de la justificación es generar seguridad, el ejemplo que estamos dando no es muy virtuoso que digamos.

La Argentina, claramente, necesita dólares genuinos, es decir, no del endeudamiento, sino divisas que puedan ser generadas. Necesita generar trabajo. Necesita un desarrollo productivo real. Porque a la estabilidad macroeconómica no la vamos a poder mantener si no tenemos ingreso de divisas genuinas. No vamos a bajar la pobreza si no generamos trabajo desde el sector privado. Y no vamos a tener trabajo privado si no generamos condiciones apropiadas para que los sectores estratégicos –incluso la minería– puedan invertir.

En el desarrollo del siglo XXI, crecer no es hacerlo de cualquier forma, sino de manera sustentable. ¿Y qué es crecer de manera sustentable? Es hacerlo cuidando los recursos para que puedan ser utilizados el día de mañana, es decir, no eliminando esos activos. Es cuidar las condiciones para desarrollarnos y generar de alguna manera un compromiso intergeneracional con las generaciones futuras.

Claramente, nosotros vemos que la ley vigente ha tenido interpretaciones divergentes. Pero como ya se ha dicho acá, el texto que se propone no resuelve ninguna de estas situaciones divergentes. Todo lo contrario, genera mayores grises cuya constitucionalidad seguramente será cuestionada.

Si realmente queremos generar seguridad jurídica, necesitamos una norma que sea técnicamente robusta y jurídicamente no discutible. Una ley que se judicialice no va a proteger el ambiente, pero tampoco va a proteger las inversiones.

Quiero destacar tres cosas fundamentales que se están tocando en este debate: el principio precautorio, el Inventario Nacional de Glaciares y la función hídrica como único criterio.

Actualmente, el principio precautorio establece que ante una duda científica debe priorizarse la protección. Esto está relativizado en esta nueva ley. Esta no es una cuestión ideológica. Es una cuestión técnica y jurídica que tiene sustento constitucional.

El Inventario Nacional de Glaciares no es una herramienta administrativa. Es, claramente, una herramienta científica que sostiene la política pública.

Y en cuanto a la función hídrica como único criterio, de alguna manera tenemos que entender que el derecho ambiental no protege solo lo que estamos viendo, sino lo que va a ser de alguna manera una cuestión estratégica para el día de mañana.

No estamos acá para oponernos a cualquier reforma ni para acompañar cualquier modificación. Creemos que estamos acá para legislar de una

manera mejor. Por lo tanto, si el Congreso desea avanzar sobre una verdadera Ley de Glaciares, debe cumplir con cuatro condiciones que son básicas.

Primero, debe elaborar un texto constitucionalmente sólido.

En segundo lugar, la ley debe ser ambientalmente responsable.

En tercer lugar, debe ser económicamente viable.

Y, por último, debe ser políticamente sostenible.

Claramente, esta reforma no cumple con estas cuatro condiciones. Estaremos generando más incertidumbre de la que nosotros pretendemos resolver.

Finalmente, señor presidente, quiero decirle que mejorar no es debilitar. Las reformas deben fortalecer las instituciones ambientales y no erosionarlas. Y la verdadera seguridad jurídica no se logra bajando estándares. Se logra con reglas claras, respaldo científico y controles previsibles.

Por eso, mi posición es clara. ¿Acompañar una reforma que cumpla con estos cuatro principios básicos? Claro que sí. ¿Acompañar este texto? Claro que no.

El agua no tiene ideología y el desarrollo tampoco.

Lo que no podemos hacer es resolver problemas complejos con leyes frágiles.

La Argentina necesita crecimiento, pero también reglas que duren más que un Gobierno. Ese es el desafío y la responsabilidad que hoy tenemos.

Por eso, desde la provincia de Entre Ríos, y desde el peronismo, adelanto mi voto negativo con respecto a este proyecto.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador.

A continuación, tiene la palabra -ahora sí- la senadora por Córdoba, Alejandra Vigo.

Sra. Vigo.- Gracias, presidente.

En primer lugar, quiero mencionar todos los tratados internacionales que la Argentina se animó a firmar ya hace muchos años.

Nuestro país ha ratificado los principales tratados internacionales sobre cambio climático. Y quiero destacar, sobre todo, la Convención Marco de las Naciones Unidas; el Protocolo de Kyoto, reafirmado en la Ley 25.438, y el Acuerdo de París, firmado en 2016.

Al firmar todos estos protocolos, estos tratados internacionales, la Argentina se comprometió a reducir emisiones de gases de efecto invernadero y a fortalecer las medidas de adaptación.

El Protocolo de Montreal y las enmiendas tienen como objetivo la eliminación de sustancias que agotan la capa de ozono y potentes gases de efecto invernadero. Y el Convenio de Viena, la protección de esa capa de ozono.

Todos estos tratados internacionales sobre cambio climático suscriptos por nuestro país, principalmente el Acuerdo de París, obligan a la Argentina a implementar medidas de mitigación y adaptación que busquen, justamente, reducir el derretimiento de los glaciares.

Estos compromisos internacionales respaldan la protección legal de los glaciares como recursos estratégicos de agua dulce, ante el acelerado retroceso que se está produciendo en los Andes, sobre todo en los Andes patagónicos.

Por eso quiero destacar, en primer lugar, que este proyecto de ley que estamos tratando ha sido elaborado, yo diría, desde abajo hacia arriba. Es decir, no se ha realizado el menor análisis de cuáles serían el impacto, el respaldo y el respeto a estos tratados internacionales que la Argentina ha suscripto.

No se ha realizado el menor análisis sobre los nuevos paradigmas del cuidado de nuestra casa común, como decía el Papa Francisco.

Nada se ha tenido en cuenta sobre protocolos internacionales y pactos firmados que discuten las medidas necesarias a las que cada país tiene que comprometerse en temas como la protección ambiental, el calentamiento global, las reservas naturales, los gases de efecto invernadero, y otros que incluyen, principalmente, la reserva de agua en las regiones más críticas del planeta.

El proyecto carece entonces, a mi modo de ver, de un enfoque centrado en esos nuevos paradigmas y en el cambio climático que, hoy por hoy, ningún país es capaz de negar. Y omite el rol adaptativo que tienen nuestros glaciares ante esta realidad.

Pero creo que ya algo se dijo aquí. Sabemos –no digo nada que no se sepa– que el Gobierno Nacional no tiene un interés específico o estratégico sobre este aspecto de la agenda internacional. No lo tiene desde el momento en que desconoce los tratados ambientales que han sido firmados por la mayoría de los líderes globales.

No estoy diciendo nada nuevo, porque lo demostró el presidente argentino ante la Asamblea de Naciones Unidas al decir que la Agenda 2030 era un programa de carácter socialista que atentaba contra la soberanía de los Estados Nación.

Eso dijo el presidente de los argentinos.

Por eso, la Ley 26.639, a la que estamos haciendo referencia y se quiere modificar, creó, hace ya muchos años –en 2010–, el Inventario Nacional de Glaciares que está a cargo del organismo IANIGLA, una entidad responsable de monitorear los glaciares y todo el ambiente periglacial.

Esto ha permitido generar un inventario científicamente riguroso, estableciendo parámetros de protección de esos glaciares.

El cambio climático sigue siendo el motivo central de la vigencia de este organismo y el porqué de que haya que sostenerlo, además, con recursos, para que siga brindando los informes y las acciones que está llevando a cabo.

El cambio climático sigue siendo el motivo central de esta vigencia. Y lejos de atenuarse ese fenómeno, se ha intensificado. Y según la última actualización de ese Inventario Nacional, por resolución de 2024, la

superficie de los glaciares argentinos se ha reducido, aproximada y escandalosamente, en un 17 por ciento en la última década.

Por eso digo que este proyecto no contempla esta situación internacional de la cual la Argentina quiere ser parte protagonista. No contempla el cambio climático como factor determinante, por el contrario, avanza sobre los glaciares y ambientes periglaciales, desconociendo la rigurosidad científica del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales – IANIGLA– y los criterios técnicos mínimos para el futuro de nuestras reservas estratégicas.

Todos sabemos que esta modificación de la Ley 26.639 –la Ley de Glaciares– va a tener efectos negativos en los próximos años.

Esta reforma nace de un interés estrictamente comercial. Y no está mal que pensemos en las inversiones y también en el desarrollo de una actividad minera si eso es lo que permite generar desarrollo y mejores empleos, siempre y cuando no matemos la gallina de los huevos de oro. Aunque no está mal pensar estas inversiones, a mi modo de ver no hacía falta esta ley para que las empresas mineras pudieran invertir, salvo que la intención fuera –en muchos casos ya se dijo aquí– extender esa explotación hasta estas zonas que están preservadas. Porque –digámoslo con todas las letras–, evidentemente, esa es la intención.

El proyecto simplifica la realidad a un planteo absolutamente administrativo, ignorando que los glaciares son pilares de seguridad hídrica y estabilidad para el desarrollo del país.

Cualquier modificación que debilite el rol científico de este Instituto –ya se ha dicho aquí también– generará un escenario de judicialización permanente que producirá el efecto contrario al que se busca.

Los puntos en cuestión los enumero rápidamente.

En primer lugar, el riesgo de discrecionalidad. Porque la propuesta permite que solo la autoridad política decida qué glaciar es reserva estratégica, eliminando el piso común de protección nacional.

Hay un gran recorte conceptual. Porque después de años de trabajo y de avances en ese sentido, con todas las lumbreras que tiene la Argentina sobre este tema, se limita la protección solo a los glaciares de escombros, ignorando que el ambiente periglacial completo es el regulador crítico de nuestras cuencas; aunque el Poder Ejecutivo, evidentemente, eso lo ignora.

Otro de los puntos que me parecen críticos –también se lo mencionó aquí– es el desafío federal. El verdadero reto institucional no es modificar la ley nacional. El verdadero desafío que tenemos en el país es que cada provincia pueda dictar las leyes complementarias que prevé la Constitución y que fija claramente, para optimizar la gestión del recurso sin perforar los estándares de protección.

Seguramente, era necesario reformular esta ley vigente. Y quizás, como dijeron muchos expertos, y lo mencionan continuamente, haya que evolucionar hacia una evaluación ambiental estratégica obligatoria por cuenca, brindando reglas claras para que los inversores puedan ejecutar los proyectos teniendo en cuenta esas reglas claras.

La Ley de Presupuestos Mínimos y complementarias no están siendo tenidas en cuenta.

La postura respecto del principio de no regresión es absolutamente peligrosa, porque este principio establece que el nivel de protección ambiental alcanzado no puede ser disminuido por normas posteriores. Ese principio es clave. Y lo es para muchísimas jurisdicciones argentinas.

La desprotección –como decíamos– del ambiente periglacial.

El artículo 1° de este proyecto restringe la protección –repito– solo a los glaciares y a los glaciares de escombros, descartando el resto del ambiente periglacial. Yo me pregunto: ¿qué persona o qué organismo determinará si se cumplen estas funciones?

La ley vigente protege el ambiente periglacial como un regulador hídrico sistémico. Reducir la protección implica un recorte que no refleja el conocimiento sobre la hidrología de montaña.

La evaluación de impacto ambiental por proyecto es insuficiente. Y eso es importante destacarlo.

Debemos tener una base reglamentada para que, a partir de ahí, puedan surgir los proyectos de inversión.

Estos son los nuevos estándares internacionales a los que hacía referencia y que tanto se han discutido a niveles internacionales. Y están en cada uno de los tratados internacionales que el país ha firmado.

Ni hablar de que, en el Presupuesto de 2026, la Subsecretaría de Ambiente tiene asignados 51.506 millones, un 33,8 por ciento menos en términos reales que en 2025 y un 79,5 por ciento menos que en 2023, que fue el último presupuesto en el que figuraban estas acciones referidas a la protección del ambiente y, en particular, de los glaciares.

En definitiva, este proyecto está signado por una gran improvisación. Y me preocupa –sé que lo han dicho otros colegas– que una iniciativa de esta envergadura en lo que hace a los recursos estratégicos de la Argentina avance de esta manera. Porque el agua, los glaciares y la provisión de agua no son solamente de las provincias, son de toda la Argentina. Porque cada provincia provee, a su vez, a distintas regiones. Y este es el futuro que está discutiendo el nuevo concierto internacional.

No podemos tapar el sol con la mano. Queremos dar veinte pasos para adelante, pero para ello damos cuarenta para atrás.

En definitiva –como decía–, este proyecto está signado por la improvisación, arriesgando el capital natural que tiene la Argentina. Si hay un capital importante que tiene la Argentina, es el capital natural. Y lo estamos arriesgando por cuestiones meramente coyunturales.

Ustedes dirán: una inversión no es coyuntural. No, la decisión es coyuntural.

Esta iniciativa es la expresión cabal –no hay que sentirse ofendido– del Ejecutivo para evitar, en todo caso...

En esto quiero ser muy clara, porque para mí es lo más preocupante. Creo que esta es la mejor manera que tiene el Ejecutivo de evitar devolver recursos a las provincias para garantizar el desarrollo. Algo así como si necesitás

plata, no te doy, pero te voy a concesionar este quiosco para que puedas generar recursos y aplicarlos en la provincia; porque del Estado Nacional no te va a llegar plata.

Es una suerte, como decía, de concesión que forma parte de una concepción de la gestión de gobierno y de qué hay que hacer en la Argentina como proyecto político.

Además, hay otro tema que en el futuro vamos a padecer: aquí, el Estado Nacional queda sin ninguna responsabilidad.

Quiero advertir que la responsabilidad pasa a las provincias. Y si mañana aparece cualquier cuestión de responsabilidad, serán las provincias las que deban responder con su propio patrimonio.

Vuelvo a preguntar si en serio queremos aprobar una ley de semejante envergadura, que habla nada más y nada menos que de los recursos estratégicos de la Argentina y que, por otro lado, miran un montón de países del mundo, porque no pueden creer que -como decía- queramos dar diez pasos para adelante a partir de cuarenta pasos para atrás.

Como decía un senador cordobés en el año 2010 -que no sé ahora cuál será su posición-, no estamos hablando de minería, estamos hablando del agua, del recurso más importante que tiene la Argentina para el futuro, para el desarrollo, para el futuro de las inversiones y, sobre todo, para el futuro de nuestra sociedad. Un recurso esencial y estratégico de la reserva argentina. Por lo tanto, presidente, voy a adelantar mi voto negativo a este proyecto. Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Vigo.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Córdoba, Luis Juez.

Sr. Juez.- Presidente: muy brevemente. Me he sentido algunas veces elíptica y otras veces directamente aludido. Voy a hacer un poco de memoria.

Allá al fondo me sentaba con Pino Solanas, en septiembre de 2010. Teníamos un debate duro. Había posturas encontradas en aquel momento. Pino era un gran amigo, un tipo que había hecho de su defensa del medioambiente casi una bandera de su vida. Era un proyecto controvertido, con muchas contradicciones en el seno del gobierno. El gobierno tenía, sobre el tema, miradas absoluta y diametralmente opuestas. De hecho, acá ganamos esa votación 35 a 33, y el bloque oficialista votó decididamente en contra. Hoy, pareciera que vivieran en un iglú en medio de un glaciar, rodeados de pingüinos. Todos defensores de los glaciares y los periglaciales. Pero, en aquel momento, votaron en contra. Decididamente en contra.

Esto parece un campeonato de hipocresía y de cinismo. Recién le dije, bórreme, porque capaz que diga algo que genere un clima inconveniente. Pero bueno... Todos los que votaron en contra, hoy se han convertido en pequeñas aves australes. Viven en el glaciar... En aquel momento, cuando había que defenderlos... Me acuerdo. Y yo en ese momento le decía "Pino, pero mirá que acá hay senadores que son de provincias cordilleranas, que están hablando con algún nivel de argumento". Yo entiendo que el tema de la defensa del agua y todo ese discurso, que lo siento como propio... Se imagina en Córdoba, nosotros estamos muy lejos de la cordillera. Podría ser una excusa para no involucrarme.

En aquel momento, yo le sugería a Pino: “pero mirá que acá hay gobernadores que tienen recursos para sacar a sus provincias de la pobreza y tienen que andar mendigando una cuota, que le modifiquen un ATN, que le tiren una moneda más de la coparticipación, tienen cómo, tienen instrumentos, tienen herramientas y son serios. Podrán no estar en el pensamiento nuestro, pero son gente que...”. En aquel momento lo que había que hacer era establecer un presupuesto mínimo. Generar un organismo para que hiciera un relevamiento, para que pudiera determinar cuáles eran los glaciares, los periglaciares para, a partir de ahí, poder determinar puntualmente de qué estábamos hablando y cómo era la cuestión.

Fue un debate muy intenso, no me arrepiento, quiero decirle, porque, por ahí, a alguno que le gusta el patrullaje, empieza, “no, porque Juez en 2010, dijo...”. Yo tengo el cuero duro como una tortuga.

Pasaron dieciséis años, presidente. Digo, porque por ahí cuando nos volvemos así, tan cerrados para pensar y tan obtusos para mirar la cuestión... ¡Pasaron dieciséis años! En aquel momento, cuando discutíamos decíamos “pero ¿cómo hacen aquellos países que viven de la explotación minera?”, “¿Cómo hace Chile para vivir de la explotación minera y no tener contaminación?”, “Y, son serios”, decían. Bueno, ¿y nosotros no podemos ser serios? ¿No podemos tener gobernadores que sean serios, que verdaderamente tengan un área de minería, que controlen con seriedad, porque tienen ahí la posibilidad cierta y concreta de sacar a sus provincias...?

¡En aquel momento, la discusión era cómo armábamos la posibilidad cierta y concreta de establecer un parámetro mínimo, básico, un piso! No es la definición concreta, pero se trataba de cómo terminábamos de reglamentar el artículo 41 de la Constitución para que no colisionara con el 124, 125. Pasaron dieciséis años, presidente, de aquella discusión.

El Gobierno, con un criterio inteligente, no como plantean algunos... Yo no voy a entrar a analizar el discurso de nadie. Pero no es como decir, “mirá, no te voy a dar un mango, tomá, arreglate con esto, violá la ley de glaciares, fijate si podés tener un negocio, un conchabo, el problema es tuyo”. “Yo, plata no te voy a dar”.

¡Nos llenamos la boca hablando de que la Argentina necesita generar empleo, pero cuando empezamos a generar empleo...! Hace un rato estábamos hablando del Acuerdo Mercosur y Comunidad Europea y empezamos con un montón de peros. ¡Viejo, ahí tenés una oportunidad! ¡Hay 400 millones de tipos para venderles cosas! ¡Todo es un “pero”!

¡Siempre nos llenamos la boca de decir que la Argentina necesita, que la mitad de los empleados lo hacen en negro, mañana, seguramente, vamos a tener un gran debate sobre este tema, que necesitamos generar empleo, que no se genera empleo, pero, cuando generamos oportunidades para generar empleo...! Aparecen gobernadores y dicen: “che, si esto funciona nosotros podemos aprovechar el RIGI. Y si esto funciona, podemos generar entre doce mil y quince mil puestos de trabajo”. Usted sabe lo que significan quince mil puestos de trabajo en una provincia... Bueno, no, ahora resulta que somos todos pingüinos y, en esa discusión, empezamos.

En cuanto a la norma, no quiero pasar por encima de la autoridad de los miembros informantes y quiero reconocerle a la bancada opositora todo el derecho que le asiste en plantear la desprolijidad reglamentaria. Como

veterano de esta Casa, quiero decirle que el Reglamento es la Constitución, es la ley, es la Biblia; hay que emprolijar esas cosas. Ahora, también quiero decirles, con igual contundencia e igual firmeza, a esos que andan haciendo patrullaje permanente de qué hacía y qué decía cada uno, que yo no me olvido nunca de esa gran discusión que tuvimos en la madrugada de un –creo– 10 de septiembre del año 2010. Yo era uno de los senadores más jóvenes que había, discutíamos y había senadores... Logramos llegar a los 35 votos con un grupo de senadores de la bancada oficialista que había acompañado la medida. Y otros –que vine especialmente para escucharlos– que en aquel momento tenían un discurso provincial monstruoso, que se aferraban a los recursos naturales “como que son de las provincias y que esta es una ley porteña, armada por los porteños para joder a los provincianos”. Vamos a ver, quiero escucharlos, me he venido para eso.

Ahora, ¿qué quiero decirle, presidente? Esta ley no persigue de ninguna manera, no vulnera ningún extracto consagrado. Quiero decirle, lo planteó el miembro informante, ya lo tiene dicho la Corte: de acá para abajo, nada; de acá para arriba, puede ser.

Simplemente, esta ley permite articular la posibilidad de que las provincias puedan hacer uso de las facultades que le concede la Constitución, pero con una ley tan estricta, desde el punto de vista de la interpretación concreta. Porque, claramente, cuando uno interpreta glaciares y periglaciares tiene que ver con el tema de la conformación para la cuenca hídrica. Les permite a las provincias la posibilidad de avanzar, con sus órganos predispuestos y con sus autoridades, supongo, como decía algún senador preopinante, para no comerse el día de mañana un juicio, para no tener un problema y que la Corte les diga que esa inversión no está permitida porque es inconstitucional.

La ley, créame –y no porque esté justificando por qué voy a votar distinto a lo que voté hace dieciséis años– ¡no vulnera ninguna de las garantías que en aquel momento se consagraron! ¡No destruye ningún parámetro! Digo, para aquellos que están haciendo terrorismo ecológico: ¡no destruye ningún parámetro! ¡Establece la posibilidad cierta y concreta para que las provincias puedan ejercer un derecho natural que les consagra la Constitución, con arreglo de las leyes y de las disposiciones vigentes! ¡En dieciséis años hay un plexo legal verdaderamente sólido! ¡Entonces, no cualquier gobernador, como escuché por ahí, puede hacer cualquier cosa! Créame que la mayoría de los gobernadores que seguramente puedan utilizar este recurso –si se termina aprobando– no son gobernadores de mi palo.

Con lo cual, quiero decirle, presidente, y con esto quiero terminar, para que salgamos de este terrorismo ecológico que se ha pretendido instalar a partir de esta discusión: lo que está bien, está bien, y lo que está mal, está mal. Es la historia de mi vida. Puedo reconocer que reglamentariamente este tema hay que emprolijarlo. Ahora, quiero darle una tranquilidad a usted y quiero dármela a mí, a los que me votan, a los que me conocen, a los que saben que no soy un falso, que no soy un cínico, que no soy un hipócrita... Porque esto pareciera un campeonato de hipocresía. Hace dieciséis años yo levantaba la mano y, junto a 35 senadores más, lográbamos tener un estándar básico, mínimo e indispensable, y lográbamos armar un instituto que permitía chequear, armar y describir puntualmente cuáles eran los glaciares y los periglaciares en la Argentina.

Dieciséis años después, sin borrar con el codo lo que escribía con la mano –para aquellos que andan viendo a ver qué dije y qué no digo–, esta ley lo único que permite, de alguna manera u otra, es devolverles a las provincias la autonomía que les corresponde sobre sus recursos naturales y hacerlo con arreglo a esa ley que sancionamos aquella noche de septiembre de 2010.

Así que, con esta consideración, adelanto mi voto afirmativo a la ley.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Luis Juez.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Santa Cruz, José María Carambia.

Sr. Carambia.- Presidente, gracias. Bueno, como lo hablamos en su momento cuando estuvimos en la Comisión, para nosotros claramente el artículo 6° genera mucha interpretación. Tanta libre interpretación que –voy a leer, discúlpeme– cuando dice “puedan alterar de modo relevante”, genera una interpretación para cada gobernante, en cada provincia, en cada lugar. Entonces, mañana si a un gobernante, por ejemplo, en Santa Cruz, que somos una provincia donde sí hay pingüinos, se le ocurre meter minería al lado del glaciar Perito Moreno, se le ocurre decir que no afecta relevantemente al glaciar, va y pone un pozo petrolero.

Digamos, la forma de redacción, según nuestra interpretación, es una autorización tácita y encubierta para que puedan hacer lo que quieran donde sea.

Dijimos que no diferencia entre una zona periglacial de un glaciar, que son dos cosas completamente diferentes y deben tener una normativa completamente distinta. Ese es otro punto más.

Y quiero resaltar algo de mi provincia porque, a veces, los que no tienen minería piensan que la minería va y te salva, ¿no? Como dijo la senadora Alicia Kirchner, hace veintiocho años tenemos minería en nuestra provincia, y todavía seguimos con muchas localidades sin los servicios básicos. Yo fui intendente de mi ciudad y, cuando empecé, el 70 por ciento de la población no tenía los servicios básicos. Lo pudimos entregar con el 30 por ciento. Falta mucho por hacer. Entonces, tampoco es que te salva porque la plata no llega al vecino común.

En este Senado de la Nación, cuando se trató la Ley Bases, el paquete fiscal, hemos logrado aumentar del 3 al 5 por ciento las regalías mineras. Eso sí, lo habíamos hecho para lo anterior, se impuso el lobby minero y lo hicimos para los nuevos emprendimientos. ¿Cuántos gobernadores adhirieron a eso? Bueno, esperemos que los gobernadores entiendan que ahí van a tener muchísimos más recursos porque hay un aumento real del 70 por ciento.

¿Por qué resalto siempre el concepto de regalías? Porque para nosotros es muy bajo. Primero, no distingue los diferentes tipos de minerales. Es lo mismo para todos. Por ejemplo, en el agro se diferencia lo que es el sorgo, la soja o el trigo, y diferencia la regalía. Acá es del 0 al 3 por ciento, del 3 al 5 por ciento para nuevos emprendimientos, pero se interpreta como si fuese todo lo mismo. Y no es lo mismo el litio, no es lo mismo el oro, no es lo mismo el cobre. Por ejemplo, hoy el oro está en 5.200 dólares, un récord histórico. Vendría a ser como que el petróleo, que hoy está a 55, estuviera a 350 dólares.

Cuando se sancionó la Ley Minera en el año 93, que es el primer RIGI que tuvimos en la Argentina, la onza de oro estaba a 150 dólares. A ver, es entendible que el monto sea del 3 por ciento. Es entendible porque estaba a 150 dólares. Hoy, está a 5.200 dólares y siguen llorando las mineras. Lloran tanto las mineras que no quieren ni pagar ese 3 por ciento. A veces, las provincias tienen que hacer de todo, presionarlas por diferentes lados, para que aporten.

Para ir a mi ciudad, que es Las Heras, me tomo un avión y voy hasta Comodoro Rivadavia, donde está el aeropuerto más cercano. Cada vez que me tomo un avión, más de la mitad del avión está lleno de trabajadores mineros que vienen de provincias del norte a trabajar a Santa Cruz. A trabajar a Santa Cruz.

En Santa Cruz, tenemos la Ley 90/10, que significa que el 90 por ciento de los trabajadores tienen que ser santacruceños. Las empresas no lo cumplen, eh. Y los invito a que tomemos un avión -cualquier avión- y van a ver esto, que es una realidad.

Cuando fui intendente de mi ciudad y estábamos en pandemia, podíamos tener un control de todos los colectivos que pasaban. Un camión grande, que se llama Master Bus, te espera abajo del aeropuerto para trasladar a los trabajadores. Y entre esos trabajadores hay de todo: está la gente que trabaja en la mina, hay maestranza, hay administrativos. A ver, yo entiendo que traigan gente foránea cuando es algo técnico que no tenemos en nuestra provincia, pero para trabajos cotidianos me parece una falta de respeto.

¿Y ahora qué hicieron? Por ejemplo, como el Gobierno actual empezó a controlar sobre la Ruta 3, empezaron a esquivar los controles y van por la Ruta 40. Entonces, desde los gobiernos provinciales, a veces, a las empresas mineras hay que exigirles o imponerles más condiciones para que tengan mayor responsabilidad social y empresarial.

No quiero abundar en muchas otras cuestiones, pero en mi provincia, hoy tenemos minería en El Macizo del Deseado. Hoy, no tenemos minería ni proyectos con esta nueva ley, pero entendemos que está muy mal escrita, muy mal redactada, por lo que va a generar muchísima interpretación. Y esa interpretación no quiero que quede en manos de cualquier gobernante provincial de ningún lado, porque creo que como estaba en la ley anterior es mucho mejor que en la nueva.

Por eso, vamos a votar en contra.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Carambia.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de Misiones, Sonia Rojas Decut.

Sra. Rojas Decut.- Señor presidente: nosotros desde nuestro bloque consideramos que este no es solamente el debate de la modificación de una ley. Hoy, estamos ante una discusión del país que queremos construir y del equilibrio que debemos garantizar.

La provincia que represento, Misiones, no tiene glaciares; sí tiene reconocidos recursos naturales que han sido protegidos desde siempre. Misiones tiene gobernanza ambiental y un reconocido liderazgo global en materia climática. De hecho, es la provincia con mayor biodiversidad de la República Argentina.

Nosotros hemos logrado posicionarnos a nivel global en los mercados de carbono de alta integridad con nuestro programa jurisdiccional, hoy calificado con una categoría AA. Una calificación que solo ha logrado el 0,2 por ciento de los programas ambientales en el mundo. Menos del 0,2 por ciento. Esto legitima la integridad y la calidad de la gestión ambiental en la provincia de Misiones. Y este no es un dato técnico. Para nosotros representa la demostración de que el desarrollo sostenible, cuando se apoya sobre una sólida institucionalidad, es posible.

Por lo tanto, nuestro argumento respecto a este proyecto es claro. Defendemos la institucionalidad ambiental federal. Creemos profundamente en el desarrollo sostenible. Estamos convencidos de que no podemos hipotecar nuestros recursos estratégicos: el agua, la biodiversidad, los glaciares, la vida misma. Y con esa misma convicción afirmamos que tampoco podemos condenar a nuestra Argentina a la improductividad, a la incertidumbre jurídica y a la pobreza, en definitiva.

El desafío hoy, con la modificación de esta ley, no es elegir entre desarrollo o ambiente. El desafío que tenemos en la Argentina es construir con equilibrio y con estándares muy altos. En este sentido, Misiones tiene una vasta experiencia.

Como provincia, nosotros sabemos lo que significa gestionar con responsabilidad los recursos naturales. Nosotros sabemos lo que implican las soluciones basadas en la naturaleza. Y sabemos que cuidar el ambiente es, en definitiva, cuidar la vida.

En este punto, coincidimos plenamente con el espíritu del acuerdo federal, que expresa que es urgente satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras. Y sostenemos que ambos objetivos no solo son compatibles, sino que son inseparables de una visión moderna para la Argentina. Por lo tanto, promovemos un federalismo ambiental responsable, no discrecional, no arbitrario.

Y nosotros hemos señalado que este proyecto de Ley de Modificación de Glaciares reafirma un principio constitucional esencial que en la provincia lo defendemos todos los misioneros: las provincias son dueñas originarias de sus recursos. Las provincias son dueñas originarias de sus recursos naturales. Por lo tanto, deben ejercer sus atribuciones con base científica, con evaluaciones ambientales rigurosas y con participación ciudadana garantizada. Y de eso sabemos las provincias. Por lo tanto, ni habilitaciones automáticas ni prohibiciones automáticas: decisiones basadas en la ciencia, con responsabilidad institucional y con conciencia ambiental.

Para Misiones el federalismo es parte de nuestra identidad. El federalismo es entendido en mi provincia como una corresponsabilidad con la Nación, y siempre tenemos presente que las provincias anteceden a la Nación, y hoy más que nunca debemos ser garantes del orden, del bien común y, por sobre todas las cosas, del progreso conjunto. En este punto, como bloque, nos parece importante traer al debate, a este recinto, el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en un caso vinculado a la minería en Catamarca y el municipio de Andalgalá. Hoy, pasaron diez años desde que un municipio frenó el desarrollo de una provincia; el fallo ratificó, en febrero de este año –o sea, en este mes– el dominio originario de los recursos naturales de las provincias y su potestad para gestionar los recursos y las actividades mineras. Y esto es importante: aclara que ningún otro nivel de gobierno

puede interponer recursos legales sobre la tutela de recursos que les corresponden. Es muy importante que consideremos este reciente fallo del máximo tribunal argentino. Tenemos que tenerlo en cuenta si necesitamos corregir errores técnicos; si no, la Argentina no va a poder aprovechar las enormes oportunidades que tiene en el sector de la minería, en el sector energético, productivo y comercial, entre otros. Pero ninguna oportunidad será sostenible sin un elemento previo e indispensable: la confianza que genera, que brinda, la seguridad jurídica. La confianza que el país necesita solo se construye con reglas claras, con previsibilidad normativa, menor litigiosidad, por supuesto, y decisiones fundadas en el conocimiento.

Quiero ser muy clara en este punto. Nosotros consideramos que esta reforma no implica una reducción de la protección ambiental. No se bajan los estándares, se clarifican las competencias, se ordenan los criterios y se fortalecen los procesos de evaluación científica y ambiental. El tenor de la reforma es plenamente compatible con el principio de no regresión ambiental. Y Misiones puede afirmarlo con absoluta seguridad, porque supo construir todo un ecosistema de leyes de vanguardia sobre este principio, que resguardan la máxima calidad ambiental de una provincia que brinda servicios ecosistémicos no solamente a la Argentina, sino al planeta.

Nosotros sabemos que el desarrollo económico y la protección ambiental no son fuerzas opuestas, son condiciones recíprocas si queremos avanzar hacia el desarrollo sostenible.

Desde Misiones siempre sostuvimos un principio rector, cuidar lo que nos pertenece, cuidar lo nuestro. Ese principio rector hoy puede ayudarnos a reflexionar y clarificar algunas afirmaciones que circulan. Nadie está diciendo que el agua no se va a cuidar. Nación no tiene competencia para cuidarla, pero las provincias sí.

En este mensaje queremos ser muy claros y actuar con absoluta responsabilidad: la Nación no garantiza el cuidado del agua ni de sus reservas, simplemente porque no puede hacerlo constitucionalmente, porque es facultad de las provincias.

Por lo tanto, nosotros desde Misiones proponemos equilibrio entre la protección del agua y la previsibilidad institucional; equilibrio entre el ambiente, el desarrollo y la seguridad jurídica, y equilibrio entre el presente y el futuro. Y eso es algo que Misiones lo sostiene con resultados.

El Pacto de Mayo expresó con absoluta claridad este rumbo estratégico para nuestra Argentina: avanzar hacia un modelo de desarrollo federal equilibrado, capaz de aprovechar realmente los recursos naturales sin comprometer a las generaciones futuras. Ese es el espíritu que hoy debe guiarnos, porque el futuro se construye con responsabilidad institucional, con racionalidad normativa y con una gran visión de Estado.

Por estas razones, y con el pleno convencimiento de que esta reforma contribuirá a un desarrollo equilibrado, previsible y ambientalmente responsable de la Argentina, desde el bloque Frente Renovador de la Concordia de la provincia de Misiones vamos a acompañar este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de Salta, Flavia Royón.

Sra. Royón.- Señor presidente: tomando conceptos de los que me precedieron en el uso de la palabra, creo que acá se trata de instalar, como decía el senador anteriormente, un terrorismo ambiental o decir que con este proyecto se entrega el agua o los glaciares.

Cuando repaso el dictamen, en el objeto claramente se refuerza la protección, se habla justamente de las reservas estratégicas de agua, la función de proveedores de agua para consumo humano, para agricultura, para la biodiversidad, como fuente de información científica, como atractivo turístico y reafirma que los glaciares son bienes de carácter público.

Así también, en el artículo 1º, reivindica el federalismo ambiental sobre el que la senadora de Misiones hablaba. Después voy a volver a este punto del federalismo ambiental. Pero quiero dejar claro que acá no se está entregando el agua; al contrario, se refuerza la protección del recurso y la protección de los glaciares.

En el artículo 3º se habla del principio precautorio, donde es claro, está todo protegido hasta tanto se demuestre lo contrario con una base técnico-científica. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la práctica? Nadie discute que el ambiente glacial tiene que estar protegido, nadie discute que el ambiente periglacial, donde haya una función hídrica y una reserva estratégica, tiene que estar protegido. La ley de 2010 mandó a hacer un inventario; el inventario, que no son fotitos, son imágenes satelitales. Se creó un instituto con una base científica clara, que realizó ese inventario en lo que se llama Nivel 1. ¿Qué es el Nivel 1? Imágenes satelitales. Ahora, en el ambiente periglacial, lo que uno tiene que proteger –lo que es claro en la ley–, lo que nosotros tenemos que proteger, es su reserva estratégica y su función hídrica.

Dentro del ambiente periglacial, nosotros tenemos que bajar a lo que se llama Nivel 2 o Nivel 3. Estos estudios involucran estudios de campo, estudios de laboratorio, toma de muestras que, claramente, hay que hacerlas en territorio y en casos concretos. Ahí es donde las provincias deben intervenir, porque nosotros tenemos que proteger, justamente, el agua. Esta modificación habla justamente sobre volver a reforzar la protección del agua. Tenemos que pasar de la lógica de la forma a la lógica de la función. No es prohibir por prohibir, sino que tenemos que proteger lo que realmente hay que proteger, y para eso se necesitan estos estudios que son mucho más profundos, de campo, y que implican un involucramiento en territorio. Y las que tienen involucramiento en el territorio son justamente las provincias. Acá hay muchísimas provincias que gestionan sus recursos naturales porque así lo manda la Constitución.

La Constitución, en su artículo 124, reza que son las provincias las que tienen el dominio originario de sus recursos. También, este proyecto de ley habla, en su artículo 6º, de las evaluaciones ambientales y de la participación ciudadana.

Ahora bien, cuando vamos al ambiente periglacial –porque el ambiente glaciar no hay ningún tipo de duda de que está protegido, tampoco instalemos de que acá se va a poner un proyecto, un hotel, o algo arriba de un glaciar porque eso no va a suceder–, para que uno pueda hacer un estudio de impacto ambiental claramente tiene que habilitarlo, ya que a futuro

podría llegar a haber una actividad. Bueno, eso hoy no se puede. Ahí hay un gris. Son los estudios de impacto ambiental los que nos van a dar, mediante el trabajo con las provincias, la certeza de si hay una función ahí o no. Esta modificación así lo reza, como también habla de la evaluación ambiental estratégica y de la participación ciudadana.

Más adelante, ratifica las actividades prohibidas. No habilita ninguna actividad en zonas que sean reservas estratégicas o que tengan función hídrica. No habla de ninguna flexibilización.

Por otro lado, creo que acá lo que tenemos que hacer para poder saber si hay función es estar basados en la ciencia y en la evidencia.

Un punto importantísimo es el tema del federalismo ambiental. Se ha dejado ver como que acá se le quiere entregar la llave a algunos gobernadores para que, aparentemente, en una decisión discrecional, habiliten proyectos. Acá, en esta Cámara, tenemos exgobernadores –gente que ha tenido la oportunidad, inclusive de provincias mineras, de la provincia de Misiones– que conocen perfectamente que no es la decisión política de un gobernador la que habilita un proyecto en una provincia. No, esto es faltarles el respeto a los cuerpos técnicos de muchísimas provincias. Acá la veo también a la compañera del Neuquén, que justamente gestionan sus recursos con responsabilidad; de Catamarca; de Misiones. En las provincias hay cuerpos técnicos capacitados. ¿Qué nos hace creer que los cuerpos de Nación son mejores que los de las provincias? ¿Saben dónde están los mejores glaciólogos? En San Juan.

Entonces, seamos responsables cuando hacemos este tipo de declaraciones. Seamos responsables con los equipos técnicos que están en cada provincia, porque tienen las capacidades para poder gestionar los recursos y así lo han hecho. De hecho, en la provincia de Santa Cruz, todos esos proyectos mineros se construyeron con responsabilidad y sin Ley de Glaciares, y son las grandes exportaciones de la Argentina de hoy.

Los impactos ambientales claramente están fundados, tienen participación ciudadana. Hoy, mucho más que nunca.

Pero también quiero hacerle una advertencia, porque en la Comisión se veía –esta es una advertencia hacia la industria minera– que la minería –también le puede caber a la industria del gas y del petróleo– genera trabajo, genera riqueza, y eso parecería justificar cualquier modificación. No, señores, eso no es así. El cuidado ambiental y el cuidado del agua están por sobre todos los intereses. La minería, hoy, es una minería responsable, y las autoridades de las provincias son las que deben controlar que esto sea así.

Como también lo mencionaron anteriormente, es una falsa dicotomía el tema del desarrollo de ambiente. Es posible el desarrollo ambientalmente sustentable, y el agua está por sobre todas las cosas. Y esta modificación no ataca eso.

Acá, de nuevo, coincido también con un senador que me precedió en la palabra: lo que hace falta es más diálogo y más información, porque no todo es válido. Acá tenemos una gran responsabilidad, y la industria también la tiene al momento de informar cabalmente a la sociedad, con argumentos técnicos, científicos. Si no, nos prestamos a que la opinión pública esté detrás de eslóganes que no tienen ningún tipo de sustento real.

Quiero hacer un punto en el tema del agua, porque mucho se habla del uso del agua y de la minería con el agua. Y si bien esto no trata de minería, si quieren hacer un emprendimiento turístico en un área periglacial, no lo pueden hacer cuando puede haber, justamente, algo que no tenga una función.

Pero volviendo al uso del agua en la minería, voy a tomar el caso de la provincia de San Juan. En la provincia de San Juan, el 94 por ciento del agua se destina al agro, el 4 por ciento al consumo humano y el 1,2 se destina a toda la industria. No a la industria minera, sino a toda la industria de la provincia. En Chile, la industria minera usa menos del 2 por ciento del agua.

O sea, el gran consumidor de agua es el agro. Y nosotros deberíamos estar mucho más preocupados por tener un uso eficiente del recurso en el agro, con sistemas de riego, con inversión pública, para cuidar realmente nuestros recursos.

Hoy, la minería, con la tecnología cada vez más moderna, cada vez utiliza menos agua.

También se citó el caso de Chile, de Canadá, de Australia. Ninguno de esos países tiene una ley de glaciares. Pero tampoco le echemos toda la culpa a este vacío. Las inversiones no se dieron por un montón de circunstancias, no por la Ley de Glaciares.

Y volviendo a la minería, es como que esta es una ley que juega sola. Y no, no juega sola. La Argentina tiene un sólido marco jurídico en materia ambiental. Tiene su Ley General de Ambiente y el Código de Minería tiene su capítulo ambiental. La Argentina fue pionera en el capítulo ambiental en materia minera. Tiene también un régimen de agua. Y las provincias, a su vez, ya tienen –y también se las invita, todavía no ha sido tan claro– un marco muy sólido en materia ambiental.

Volviendo al tema de la minería, me parece que voy a aprovechar para derribar algunos mitos. Yo he trabajado en muchos sectores de la economía –en el agro, en la ganadería, en la industria–, y la minería es el más controlado. Tiene que hacer un estudio de impacto ambiental antes de hacer su actividad de exploración. Tiene que hacer su estudio de impacto ambiental para que habiliten la explotación. Y ese estudio ambiental se debe renovar cada dos años. ¿Cuántas actividades conocen ustedes que cada dos años tengan que rendir cuentas, se las monitoree y se les pueda revertir la actividad en caso de que ese permiso no se cumpla? La actividad minera es una de las más controladas.

Para cerrar, también se habló del cambio climático. La minería es la solución del cambio climático. Hoy, las nuevas tecnologías para prevenir el cambio climático, para la adaptación, necesitan más minerales.

También se dijo que podemos vivir sin minería. Bueno, eso no es cierto. Hoy, la vida moderna no es posible sin minería. Minería es un edificio, es la arena, es la cal, es el celular. No hay tecnología posible sin cobre.

Hoy tenemos una gran oportunidad. La minería es la madre de las industrias y la Argentina no puede perderse esta oportunidad.

Pero insisto: no vale todo.

La minería sí, dentro del cuidado sustentable.

Adelanto mi voto positivo y el acompañamiento a este proyecto de ley, que no solo cuida el agua, sino que también nos lleva al paradigma de que necesitamos no prohibir por prohibir sino poder acompañar al perfeccionamiento –con métodos científico-técnicos por supuesto– de ese inventario de glaciares para poder cuidar mejor nuestros recursos, y devuelve y ratifica el federalismo ambiental de nuestro país.

Muchísimas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora.

A continuación, tiene la palabra el senador de la provincia de Catamarca, Guillermo Andrada.

Sr. Andrada.- Gracias, señor presidente.

He escuchado atentamente los discursos y las evaluaciones de todos los que me precedieron en la palabra y me hacen recordar a una parte de un poema de Campoamor que dice que nada es verdad, nada es mentira, todo es de acuerdo al cristal con que se mira. Y los políticos manejamos la retórica, sabemos usarla. Y dentro de la retórica, muchas veces hay trampas que se llaman falacias. Y acá se está planteando permanentemente una falacia del falso dilema, que es plantear que es minería o agua. No es correcto. Es una falacia, es una argumentación que quiere mostrar un tránsito lógico, verdadero, pero que es incorrecto. Y los políticos las sabemos usar.

Antes de fundamentar esta ley o este proyecto quiero aclarar que acá no estamos planteando que la minería se va a hacer a cualquier costo, que vamos a bajar los estándares ambientales. No es así. Nosotros estamos buscando que se proteja el agua, que se cuide el agua como un recurso estratégico, pero también pretendemos tener reglas claras. Hoy se está demostrando que tenemos, en un ámbito federal, distintas provincias que tienen realidades diversas. Y muchas veces queremos mostrar que hay provincias, como la mía, que necesitan del desarrollo y de la explotación de la minería.

Como dijo la senadora preopinante, no hay industria más controlada, más regulada, con monitoreo, con participación ciudadana, con participación de pueblos originarios, que la minería.

He escuchado a algunos representantes de provincias hablar de la minería como si fuera agresiva con el medio ambiente. Pero si uno les plantea el uso de herbicidas, agroquímicos, ahí no hay. Hay un doble estándar. O acá cerca, en los emprendimientos inmobiliarios que se levantan sobre humedales, todos miran para otro lado.

Por supuesto que la minería tiene mala prensa. Pero nosotros como representantes de provincias mineras tenemos que salir, debatir y demostrar. Somos conscientes de lo que son los glaciares. Nuestro país tiene 17.000 glaciares, 8.500 kilómetros cuadrados. Eso genera treinta y seis cuencas en las doce provincias que tienen glaciares. Y es cierto, alimentan de forma vital a casi 1.800 localidades. Es casi el 20 por ciento de la población argentina. Por eso somos conscientes de lo que estamos haciendo. Acá nadie viene a atropellar, no. Venimos a plantear, claramente, que queremos una ley que proteja a los glaciares, a los glaciares de escombros, a la zona periglacial, pero que no sea como hasta ahora una etiqueta estática;

que se vea la función que tienen. Y esa es la función hídrica, de reservorio de fuentes de cuencas. Y como también dijo la senadora preopinante, nadie puede evaluar mejor que la provincia que está afectada.

Entonces, para dejarlo en claro: estamos buscando una norma que sea más precisa y más federal, con una regla de oro que es que mientras sea fuente hídrica de reserva para una cuenca, no se toca. Ese es el núcleo duro

¿Hubo un problema? Sí, hubo un problema. Porque tuvimos una ley que durante quince años fue un poco ambigua, la 26.639, que regulaba este tema. Es una buena ley, ha sido una buena ley, puso al agua como recurso estratégico. Pero también debemos tener en claro que, en determinados lugares geográficos de montaña, por una técnica poco nítida, por una no muy buena definición del objeto, se generaron controversias de interpretación, trastornos interjurisdiccionales, judicialización e, inclusive, paralización. Y eso a nosotros, en nuestras provincias, nos hace mucho daño.

Por eso, venimos a plantear una solución, ¿cuál es la solución? En primer lugar, definir claramente lo que son glaciares, glaciares de escombros, área periglacial, y que tengan una función establecida, como es ser reservas estratégicas de agua y de fuente hídrica.

El artículo 1° de esta reforma habla claramente: para consumo humano, para agricultura, para biodiversidad, fuente de información científica y atractivo turístico.

También he escuchado decir a la senadora preopinante que la mayor cantidad del uso del agua es para la agricultura. La minería está abajo en el uso del agua. Aun así, la usan conscientemente, monitoreada, y la cuidan.

El Inventario, que también es importante, conserva un principio precautorio, que es no se toca, y que el monitoreo que va a hacer la provincia en forma madura... Porque las provincias no somos una entidad que no tiene conocimientos, que no tiene estructura. No. Nosotros tenemos una provincia que quiere minería, pero también quiere cuidar el agua ¿Por qué? Porque el agua es importante. Tenemos producción, tenemos turismo. Entonces, no vamos a hacer que todo sea a la marchanta. En nuestros territorios monitoreamos, somos estrictos y cuidamos.

También soy consecuente con lo que he votado con el RIGI, porque considero que las grandes inversiones son necesarias, y ellas tienen una realidad: necesitan certeza para poder invertir. Ustedes imagínense que una estructura con un capital minero invierte, entierra su dinero, durante más de cinco o seis años para poder retirar su ganancia. O sea, tiene que haber tranquilidad. Y es necesario que se haga, pero con controles, que nosotros hacemos.

Tenemos inversiones como Hombre Muerto Oeste -que ha salido con el RIGI-, MARA, Sal de Vida, Sal de Oro -que tenemos también en consideración-, que para nosotros son fundamentales porque es empleo local, son proveedores locales, son regalías que las tenemos que saber utilizar también. Y es exportación, que es crecimiento para nuestro país.

Lo que estamos queriendo reformar acá no es una renuncia ambiental; todo lo contrario. Queremos ser claros para que no haya ambigüedades y se pueda trabajar con certezas.

Mi provincia es 70 por ciento de montaña. La minería está en la Constitución. Cuidamos el turismo y la producción. Por sobre todas las cosas, la mirada que tengo cuando planteamos estos debates es que tenemos que ser conscientes de que somos un país rico en recursos naturales, pero no somos un país rico, no somos un país desarrollado. Y para que un país se desarrolle tiene que explotar sus recursos naturales con responsabilidad; tiene que mejorar su capital de infraestructura, cosa que hoy, desgraciadamente, no está sucediendo y no está acompañando el actual gobierno; y, fundamentalmente, todo lo que podamos usar de esos recursos no renovables, usarlos en recursos renovables. Y, fundamentalmente, establecer el desarrollo de los recursos humanos que tenemos, que es lo que va a hacer que nuestro país sea grande. No la explotación minera, no el desarrollo de otros sectores, sino el desarrollo humano; que nuestros jóvenes se capaciten, porque eso va a ser el mejor capital que tengamos.

Por eso, desde nuestro bloque, conscientes de saber lo que estamos reformando, vamos a apoyar esta reforma diciendo claramente que no vamos a entrar en esa falsa dicotomía que es minería o agua, porque, primero, el agua, y la minería nos va a ayudar a desarrollarnos.

Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Moisés).- Muchas gracias, senador.

Tiene la palabra la senadora Edith Terenzi.

Sra. Terenzi.- Gracias, presidenta.

Antes de entrar específicamente en el tratamiento de esta ley, necesito hacer algunas aclaraciones previas.

Todos sabemos, porque a todos nos ha pasado en alguna u otra circunstancia, lo que es recibir los azotes en las redes sociales de algunos desprevenidos, desprevenidas, de algunos malintencionados, y también de algunos con altísimos niveles de ignorancia. Por ejemplo, detrás de un teclado anónimo se preguntaban, y me preguntaban en las redes, por qué accedí al tratamiento de esta ley. Incluso, por qué tuve la osadía de firmar el pedido de una sesión especial para tratar estos proyectos que el Congreso está tratando en estos días. Necesito responderles, sobre todo para sacarlos de esa ignorancia.

¿Por qué accedí al tratamiento de esta ley? Por una razón muy sencilla: la ley fue girada, como cabecera, a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que es la que yo presido.

Explicué al principio de mi intervención cuál había sido el proceso por el cual habíamos llegado al dictamen que salió del plenario de las comisiones de Ambiente y de Minería. Y respondo que lo hice simplemente por coherencia; porque lo he venido diciendo a lo largo de estos cuatro años que llevo sentada en una banca del Senado.

Tengo la responsabilidad y tengo la obligación de tratar cualquier proyecto que ingrese a mi comisión, con más razón si la presido, porque es la obligación que me impone el Reglamento de la Casa. Y me voy a permitir leerlo, para que le quede claro absolutamente a todo el mundo.

El artículo 94 del Reglamento interno, que habla de las comisiones, dice – permiso para leer, presidente–: “Las comisiones, por intermedio de sus

presidentes, están facultadas para requerir informes y realizar todas aquellas diligencias que consideren necesarias para el estudio de los asuntos sometidos a su consideración”.

Y el artículo 95, dice: “Las comisiones comienzan su actividad en forma inmediata a la designación de sus miembros”, que fue lo que sucedió a mediados de diciembre en este Congreso, donde se designaron autoridades cuando se conformaron las comisiones.

Y dice: “Dictaminan los asuntos de su competencia durante todo el período de sesiones ordinarias”.

Y dice, además: “En caso de prorrogarse las sesiones ordinarias o convocarse a extraordinarias, las comisiones pueden seguir reuniéndose y dictaminar los asuntos sometidos a su consideración”.

Si hay algo que los radicales tenemos incrustado en el ADN, es el respeto por las instituciones. Me podrá gustar más o me podrá gustar menos este proyecto, o cualquiera de los que ingresaron en extraordinarias en el temario que envió el Poder Ejecutivo Nacional, pero lo que no podíamos hacer es desentendernos. Y voy a poner ejemplos, que están muy cerca en el tiempo, de desentendidos que hubo en este Congreso.

Lo dije varias veces en este recinto, incluso cuando he pedido sesiones especiales para tratar todos los dictámenes que había en todas las comisiones que pertenecieran a cualquier senador. Porque trabajamos un montón de tiempo en las comisiones –también me harté de repetirlo–, y, por cuestiones políticas, por agendas, por agendas diferentes de los poderes ejecutivos de turno, nos archivaban los proyectos en las comisiones.

Agradezco que está la senadora Corpacci. Uno de los proyectos que se nos cayó fue la Ley de Acompañantes Terapéuticos, que tenía media sanción de la Cámara de Diputados y este Senado no pudo traer al recinto.

Hace cuatro años que estoy presentando proyectos de autismo. Después, nos rasgamos las vestiduras por los discapacitados, pero hace cuatro años que no logro que los proyectos de autismo –con dictámenes unánimes en las comisiones– puedan llegar a este recinto. Esa fue la práctica de los dos primeros años que estuve en esta banca.

La práctica de estos dos últimos años, los de La Libertad Avanza, fue parecida. Todos aquellos proyectos que tuvieran impacto fiscal o que le molestaran al Gobierno Nacional contaban con la clausura de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. También lo dije en este recinto, y presenté cuestiones de privilegio contra el senador Atauche, que era quien la presidía, porque, por ejemplo, perdimos la media sanción de un proyecto ambiental importantísimo, el de Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul. Ahora estamos todos preocupados porque en la milla 201 tenemos estas ciudades que vemos desde la costa. Pero cuando insistíamos en tratar la media sanción del proyecto de Agujero Azul en el Senado, dejaron que se cayera y, finalmente, lo perdimos.

Quiero reforzar esto de la coherencia. No somos todos iguales. No todos respondemos de la misma manera. Y yo pretendí responder con responsabilidad cuando ingresaron todos los proyectos que el Poder Ejecutivo mandó en sesiones extraordinarias.

Otra pregunta que también quiero responder es por qué no presenté el dictamen, y me puse a distribuir el último modelo del dictamen en las bancas.

Primero, porque no me corresponde. Y, segundo, porque habíamos pactado en este bloque mayoritario que tenemos ahora –heterogéneo, por supuesto– que yo iba a explicar cuál había sido el recorrido, desde el inicio del proyecto hasta su dictamen original. Por lo tanto, el dictamen quedaba en manos de sus autores que son, nada y nada menos, los miembros informantes de La Libertad Avanza.

Hecha esta aclaración, ahora sí me quiero referir al proyecto que estamos tratando.

Una de las primeras preguntas que me surgió fue en aquellas reuniones plenarias de Minería y Ambiente cuando escuchaba al secretario de Minería, Luis Lucero, decir que esta es una ley aclaratoria, y lo escuché también en el recinto en un par de oportunidades. Adentrándome en el texto de la ley, me pregunté –y lo pregunté a viva voz– cómo podía ser que una ley aclaratoria, de pronto, permitiera actividades que la ley original prohíbe. Eso nunca me cerró y nadie me lo contestó.

Voy a parafrasear, presidente, a la diputada mandato cumplido Graciela Caamaño y voy a coincidir con sus palabras. Graciela decía que este debate no era un debate ideológico, que era un debate constitucional. Y me voy a referir a ese debate constitucional porque me parece que es importante recordarlo, recalcarlo y tenerlo a mano.

El eje constitucional central de esta ley es el artículo 41 de la Constitución Nacional. Dicho artículo, en su antepenúltimo párrafo, dice claramente: “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”.

La Ley 26.639 es el ejercicio legítimo de la competencia del Congreso de la Nación para dictar leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, como es esta Ley de Glaciares. ¿Qué es lo que asegura esta ley de presupuestos mínimos? Asegura un piso uniforme de tutela para glaciares y ambientes periglaciales y los define como bienes ambientales estratégicos.

El otro eje importante de este proyecto es el federalismo ambiental, que es la conjunción entre el artículo 41 y el artículo 124 de la Constitución Nacional. El 124 lo conocemos todos, pero, por las dudas, lo vamos a repetir. Al final del artículo 124, dice: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Pareciera haber una contradicción entre ambos artículos, pero no la hay. ¿Y por qué no la hay? Justamente, fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que pudo equilibrar ambos artículos de la Constitución Nacional con este federalismo de concertación ambiental, donde la Nación se preserva, a través del Congreso, el dictado de los estándares mínimos y las provincias gestionan y complementan.

Entonces, si lo analizamos desde ese lugar, esta Ley de Glaciares, la original, no vacía las competencias provinciales. Al contrario, evita asimetrías que tienen que ver con lo regulatorio, evita que, en distintas jurisdicciones, tratemos a los mismos bienes en forma diferente. Además,

protege esta relevancia de un recurso estratégico en los casos de interjurisdiccionalidad y, sobre todo, porque son transgeneracionales, que es parte de lo que dice la Constitución Nacional.

¿Qué fue, en definitiva, lo que resolvió la Corte Suprema en aquel fallo famoso de la Barrick? Primero, defendió la legitimidad del Congreso para dictar los presupuestos mínimos y, después, creó esta figura de compatibilidad con el sistema federal por esto de la propiedad de los recursos. Pero también la Corte confirmó la prevalencia de los derechos ambientales colectivos frente a intereses individuales. Y creo que eso es algo de lo que hoy estamos hablando.

También, tenemos algunas objeciones con respecto a los acuerdos que hemos firmado como Estado Nacional. Uno de los acuerdos es el de Escazú, que fue adoptado en Escazú, Costa Rica, en 2018. Fue ratificado por la República Argentina en 2020 por la Ley 27.566. Tiene rango constitucional.

Me voy a permitir leer el artículo 1° del Acuerdo de Escazú, que es donde están justamente los objetivos que pretende llevar adelante.

El Acuerdo de Escazú, en el artículo 1°, establece su primer objetivo cuando dice: “Garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.

Esto lo quiero recalcar, justamente, por el proceso que hemos tenido a lo largo de estos días en el tratamiento de esta ley.

Y en un artículo, que es muy importante también, del Acuerdo de Escazú, cuando habla de leyes estratégicas, como es, en este caso, la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y Zona Periglacial, dice que los Estados Parte –uno de ellos es, por supuesto, la Argentina, que lo ha ratificado– deberán asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales.

También, debe garantizar mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades que puedan tener –dice a continuación– un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud.

También dice el Acuerdo de Escazú, en el artículo 7°, que el Estado Parte promoverá la participación del público en procesos de toma de decisiones en casos relativos a asuntos ambientales de interés público, tales como el ordenamiento del territorio y la elaboración de políticas que tengan o puedan tener un significativo impacto sobre el medioambiente.

Agrega también que esa participación del público debe ser posible desde las etapas iniciales del proceso de toma de decisiones y que ese procedimiento de participación pública contemplará plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público y para que éste participe en forma efectiva, ya sea por medios apropiados escritos, electrónicos, orales, etcétera.

Incluso, agrega al final de ese artículo que el procedimiento previsto para la participación del público, incluida la fecha de comienzo y de finalización de éste, incluye las audiencias públicas.

¿Por qué rescato todo esto? Porque es parte de lo que no hemos podido hacer con este proyecto, que es una reforma estructural de la Ley de Glaciares.

Por eso, quise, sobre todo, hacer hincapié en las objeciones constitucionales que tiene este proyecto, sin entrar en las cuestiones estrictamente ambientales. Esas objeciones constitucionales las podemos sintetizar en cuatro o cinco.

Primero, se desnaturaliza el concepto de presupuesto mínimo, volviéndolo flexible y -yo diría- hasta negociable.

Segundo, fragmenta la tutela ambiental uniforme que exige el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Tercero, se aparta de este equilibrio que ha logrado la Corte Suprema de Justicia, porque se aparta del federalismo ambiental de concertación.

En cuarto lugar, otra de las objeciones constitucionales es que introduce riesgo de regresión normativa, contrariando los principios de progresividad y no regresividad.

¿Y por qué digo todo esto? Porque en esta ley no estamos haciendo ajustes técnicos, sino que estamos introduciendo cambios fundamentales, cambios estructurales. Vuelvo a insistir con la pregunta que hice al principio: ¿me pueden explicar -si alguien pudiera hacerlo- cómo una ley aclaratoria de un texto legal vigente permite, de pronto, cuestiones que la ley original prohíbe? Por eso, hablo de cambios estructurales.

Hay algo que no hemos visto en estos días, porque no habíamos tenido acceso, pero quiero introducirlo hoy en el recinto porque sucedió ayer y es muy importante. Me refiero a que hubo una asamblea extraordinaria del COFEMA, que es el Consejo Federal del Medioambiente, a la que me voy a referir en breve, pero antes me voy a referir al Tratado que acabamos de aprobar en forma casi unánime entre el Mercosur y la Unión Europea.

Si leen el artículo 26 del Tratado del Mercosur se van a encontrar con que el Acuerdo establece el derecho a regular niveles de protección, niveles compatibles con los acuerdos internacionales en materia de protección ambiental. Textualmente, el Acuerdo con el Mercosur dice: cada una de las partes se esforzará por mejorar sus disposiciones legislativas y reglamentarias y sus políticas pertinentes, a fin de garantizar unos niveles elevados y efectivos de protección medioambiental.

Finalmente, al final del artículo 26.2.3, también dice que ninguna de las partes deberá debilitar -debilitar- los niveles de protección otorgados en sus disposiciones legislativas y reglamentarias en materia medioambiental o laboral, con la intención de fomentar el comercio o la inversión. Esta es parte de la letra del Acuerdo que acabamos de aprobar entre el Mercosur y la Unión Europea.

Para cerrar, y para decirlo contundentemente, en la reunión del COFEMA de anoche, muy tarde, se hizo un acta donde estaban presentes todas las provincias y el orden del día que tenían era, justamente, el tratamiento de la

Ley del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y Ambiente Periglacial.

Hubo tres posturas en el COFEMA: una postura por el no, una postura por el sí y una postura intermedia. Cuando votaron y eligieron las posturas, resultó empatado: 8 votos por el no, 8 votos por el sí y 5 abstenciones. Es decir, estamos ante un tema tan complejo que ni siquiera el COFEMA se pudo poner de acuerdo.

Además, hay algunas precisiones interesantes de algunas provincias argentinas que en el COFEMA dejaron escritos o dejaron su impronta, y está muy bueno conocerlas. Creo que en la discusión en la Cámara de Diputados es probable que este instrumento del COFEMA sea más analizado o sea analizado en forma más detenida.

Por ejemplo, la postura de La Pampa. Pido permiso para leerla, señor presidente. La Pampa manifestó su preocupación frente a la propuesta de reforma de la Ley 26.639, en tanto la misma introduce modificaciones que, bajo el argumento de fortalecer la autonomía provincial, implican un debilitamiento efectivo de los presupuestos mínimos de protección ambiental y el rol del Estado Nacional como garante del interés ambiental común.

Termina diciendo la provincia de La Pampa que, tratándose de recursos hídricos y ecosistemas compartidos, la protección ambiental no puede quedar sujeta a decisiones unilaterales ni a evaluaciones parciales. La tutela del ambiente y del agua como bienes comunes requiere estándares mínimos, robustos, mecanismos de cooperación interprovincial y una visión federal que no reproduzca ni profundice desigualdades territoriales preexistentes.

Las provincias de Córdoba, Santa Fe y Jujuy dicen que la ley vigente es excesivamente proteccionista, lo que podría constituirse en un obstáculo para el desarrollo económico. Creen que es necesario modificar algunos aspectos de la norma, ya que parece responder a un modelo de país unitario sin tener en cuenta la complejidad de la gobernanza ambiental en un contexto federal como el de la Argentina.

Y agregan: si bien coincidimos en que la ley necesita reformas, no estamos de acuerdo con las propuestas actuales de modificación. Estas no resuelven la falta de una definición clara del ambiente periglacial, sino que, por el contrario, introducen una nueva regulación sobre los glaciares en sí. El proyecto de reforma de ley plantea riesgos jurídicos, políticos, institucionales, sociales, económicos y productivos que podrían resultar altamente costosos para el país. Trabajó mucho el COFEMA en estos días, se lo quiero garantizar.

Córdoba, Santa Fe y Jujuy tienen una propuesta para un proyecto de modificación y dicen que hay que trabajar en un proyecto de ley que sea tratado en las comisiones del Congreso, con cabecera en la Comisión de Ambiente, porque se trata de una ley ambiental, y con participación del COFEMA, que garantice la participación pública a través de una audiencia pública que convoque el Congreso, en la que sean escuchados todos los sectores. Algo similar a lo que establece el Estatuto de Escazú.

Y hacen una síntesis las provincias de Córdoba, Santa Fe y Jujuy de una propuesta alternativa para un proyecto de reforma que dice que se ponga racionalidad a los cambios, mejorando la concertación federal y la

gobernanza en materia de glaciares; que las provincias hagan sus ordenamientos territoriales de glaciares; que los inventarios sean validados por el IANIGLA y creados por ley, para que todo ello le dé fortaleza a los inventarios; y que la Nación disponga de fondos para las jurisdicciones.

¿Qué dice la provincia de Buenos Aires en el COFEMA? Dice que la propuesta de reforma es regresiva. Además, sostiene que se avanza con esta reforma y se violan principios de política ambiental, como el precautorio y los de progresividad de equidad intergeneracional y de sustentabilidad y que, a la vez, afecta la seguridad jurídica para las grandes inversiones.

La provincia de Buenos Aires dice que, por todo lo expuesto, rechaza el proyecto de reforma de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial.

Leo una sola consideración más para no cansarlos, porque supongo que este informe lo van a escuchar muchas veces.

La provincia de La Rioja dice que la reforma no es interpretativa, sino sustantiva y regresiva, que se presenta formalmente como una adecuación interpretativa. Sin embargo, el examen de su articulado demuestra que introduce modificaciones sustanciales que alteran la naturaleza, el alcance y la eficacia del régimen de presupuestos mínimos vigentes.

Finalmente, la provincia de La Rioja dice que el impacto sistémico sobre la Ley de Glaciares es importante, porque dicha ley es una ley especial de presupuestos mínimos, plenamente válida, constitucional y operativa. Y refuerza en una conclusión que dice lo siguiente: la incorporación de la jurisprudencia de la Corte Suprema confirma que el proyecto de modificación de la Ley 26.639, primero, desconoce la competencia constitucional del Congreso para fijar presupuestos mínimos ambientales; segundo, vulnera el carácter inderogable -reitero: inderogable- del piso de protección ambiental; tercero, invierte el principio precautorio; cuarto, desnaturaliza la evaluación de impacto ambiental; quinto, introduce una regresión normativa incompatible con el Derecho Ambiental argentino. Y finaliza diciendo que la reforma propuesta resulta jurídicamente improcedente y constitucionalmente inadmisibile.

Para concluir, creo que, impulsar una reforma regresiva con estos visos de inconstitucionalidad, no va a generar seguridad jurídica, que es lo que el Gobierno Nacional está persiguiendo, sino todo lo contrario, generará más incertidumbre.

La Ley 26.639 debe preservarse y debe aplicarse íntegramente.

El proyecto presenta vicios constitucionales muy importantes: desconoce la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desconoce compromisos internacionales -Escazú y ahora Mercosur-Unión Europea- y resulta incompatible, incluso, con la legislación ambiental vigente.

Yo provengo de la provincia del Chubut, la que, como el senador Linares sabe, tiene una altísima sensibilidad ambiental, y creo que este debate se merece un alto vuelo. Por eso, quise referirme únicamente a las cuestiones constitucionales y no a las ambientales, ni hablar de minería sí, minería no; desarrollo sí, desarrollo no.

Por todas las razones que he expuesto, no voy a acompañar este proyecto. También quiero dejar en claro que firmé en disidencia el dictamen de la

reunión plenaria de las comisiones de Ambiente y de Minería, porque mi decisión, ese 18 de diciembre, ya había sido tomada.

Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Terenzi.

A continuación, tiene la palabra el senador de la provincia de Catamarca, Flavio Fama.

Sr. Fama.- Gracias, señor presidente.

Tenemos varias horas escuchándonos, escuchando las distintas posiciones y haciendo lo que tenemos que hacer: analizando y abordando el proyecto del Poder Ejecutivo que nos trae, justamente, para que esta noche podamos o no darle media sanción a la reforma de la Ley N°26.639, nuestra famosa ley de protección de glaciares y áreas periglaciales.

Esa reforma viene con un objetivo: el de compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo y las competencias provinciales. Temas que han debatido extensamente los senadores que me precedieron en el uso de la palabra.

Entonces, quisiera hacer algunas reflexiones de por qué estamos reformando esta ley. Y en cuanto a lo que vengo escuchando –claramente hay dos posiciones: están los que ya anunciaron el apoyo y los que van a rechazarla–, hay algo que creo que sale de la mayoría, y que muchos han mencionado: “A la ley hay que reformarla”. Hasta quienes están en contra de la reforma admiten que hay que reformarla.

¿Por qué hay que reformarla? No porque sea espuria: tiene un interés legítimo, que es la protección del agua. Esto es absolutamente legítimo y no he escuchado a nadie que diga que no quiere proteger el agua. A mi criterio, lo que ha pasado con la ley es que, con el paso del tiempo y, sobre todo, con la mecánica de su aplicación, se transformó en una ley rígida, con algunas zonas grises y con tensiones federales. De hecho, se ha hecho mención a los juicios que llegaron a la Corte Suprema de la Nación por las tensiones federales que se propusieron a partir de la pretensión de la aplicación de esta ley.

¿Cuál es el problema cuando se producen todos estos hechos, estas tensiones federales y cuando se judicializan? Hay un problema grave: se genera incertidumbre. Entonces, hoy tenemos una ley –y nadie lo puede negar– que genera incertidumbre, y eso trae, como consecuencia lógica, la paralización de las inversiones. Y en eso espero que coincida conmigo la mayoría de los senadores.

¿Por qué creo que pasó eso? Porque en algún punto entró en conflicto con el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Solicito permiso para leer un párrafo, presidente. El artículo 41 de la Ley Suprema establece, entre otros: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.

¿Por qué leo este párrafo? Porque estoy absolutamente convencido de que se trata de una fórmula integral, no divisible, y hay senadores que han hecho mención de esto. No puede haber una competencia, un desequilibrio, entre

la protección ambiental y el desarrollo humano. Son cosas que deben ir de la mano.

Entonces, cuando leo la modificación que me trae el Poder Ejecutivo, una de las primeras cosas que quiero observar es que ese ambiente, que no solamente debe ser sano y equilibrado, tampoco debe ser solamente adecuado para el desarrollo. Esta ley debe cumplir con el artículo 41 sin excluirlo.

¿A qué va la cláusula 41? Va a abordar el concepto de sustentabilidad, que, de ninguna manera, puede ser una herramienta para minimizar el desarrollo. No puede ser. Es una condición temporal del desarrollo, no una excusa para prohibirlo. Y esto fue lo que pasó en la práctica.

Quiero dejarles aclarado a todos los senadores que no pongo en cuestión el trabajo de un instituto. Para nada. De hecho, el proyecto que nos traen a analizar en el artículo 3° bis se incluye como principio precautorio la protección de todo el glaciar, y de todo el trabajo que se llevó adelante por el IANIGLA en estos dieciséis años desde que está vigente la ley. ¡No es que vamos a hacer borrón y cuenta nueva! El punto de partida es el Inventario Nacional de Glaciares que hoy está vigente.

Por eso es que este debate exige madurez política. No se trata de una competencia entre producción y ambiente: ambas cosas deben ser respetadas. Se trata de ser compatible con lo que dice el artículo 41 y, también, se trata de reconocer la facultad y la potestad que tienen las provincias derivadas de otro artículo constitucional, que es el 124. Entonces, el desafío es esto; lo que tenemos que ver es si el proyecto verdaderamente está dando satisfacción a estos principios.

Otro de los aspectos que me parece interesante del proyecto es la participación, como dije recién, de cada una de las jurisdicciones. ¿Quién podría discutir a una provincia que no pueda tener intervención ni discusión directa sobre la definición de sus recursos naturales? Porque los glaciares y el agua también son recursos naturales. ¿Quién podría discutir eso? ¿Cuál es el problema de discutir eso? Son los titulares del dominio originario.

Obviamente, tiene que haber un esquema coordinado de estándares mínimos. Y de acá surge un desafío que plantea la norma para los gobernadores: unificar un criterio. Tener un solo criterio federal para que la norma pueda ser aplicada con homogeneidad en todo el territorio nacional. Ese es el verdadero federalismo que consagra nuestra Constitución.

Por eso creo que el enfoque de la propuesta del Poder Ejecutivo es razonable, porque protege lo que debe proteger y les devuelve a las provincias los recursos que son de su dominio.

Otro aspecto del que acá se ha hablado es el de la previsibilidad y el de la conflictividad. La seguridad jurídica tiene que ser real, señores. No puede haber prohibiciones absolutas. No puede haber prohibiciones por las dudas. No puede haber una habilitación imprecisa e irresponsable que genere inseguridad jurídica.

¿Qué me hace pensar esto? Mientras escuchaba a muchos de los senadores... Voy a decir algo que creo que nadie dijo: estamos poniendo en tela de juicio la responsabilidad que tienen las provincias. Varios me preguntaron: “¿Y las provincias tienen recursos técnicos para hacer estos

estudios?”. No voy a decir “por si no leyeron el proyecto” –porque sería una falta de respeto–, pero una de las cosas que incluye el proyecto es que cuando cada una de las provincias tenga que hacer una actualización del Inventario, como condición previa debe realizarse un informe de impacto ambiental con participación ciudadana, cumpliendo con Escazú, claramente.

¿Cómo podemos pensar que las jurisdicciones no tienen la capacidad para llevar adelante estos informes? ¿Cuáles son los argumentos que nosotros tenemos para decir no, esa provincia no puede?

Para que ustedes tengan idea –lo digo con absoluto respeto y lo decía una senadora preopinante–, hay poca experiencia en la actividad minera. Se conoce poco. Yo no coincido con que la minería tenga mala fama. Tiene mala comunicación, en todo caso. Los estándares de calidad que tiene la industria minera los tienen muy pocas industrias en el mundo, sobre todo los estándares de calidad y respeto ambientales. Esto es así por una cuestión muy obvia: es una industria que consume mucha roca y mineral, que consume agua y energía. Entonces, los países del mundo han definido normas que son estrictísimas para cada una de las empresas, y son, justamente, las provincias las que tienen la responsabilidad de controlarlas.

Ustedes piensan que autorizar un informe de impacto ambiental es tarea simple. Ustedes creen que controlar ese informe de impacto ambiental que, como bien se dijo, se debe actualizar cada dos años, es una tarea para improvisados. Esa es la tarea y la responsabilidad que tienen hoy las provincias; y nosotros acá estamos poniendo en cuestión si la provincia puede o no determinar si hay una zona periglacial. No voy a hablar de los glaciares porque está clarísimo que no vamos a ir a abordar ni a invadir ningún glaciar.

Yo creo que a veces entramos en simplificaciones que son casi absurdas. Muchas veces uno, que viene del interior a la Capital Federal, ve cómo un montón de gente tiene un montón de recetas. Protesta por el agua. Hay que defender el agua, los árboles. Minería no, porque la minería es destructiva. ¿Ustedes piensan que nosotros estaríamos sentados acá si no existiera la minería? Es un absurdo. Estoy repitiendo cosas que ya se han dicho acá. No existiría el edificio, no podríamos comunicarnos, no existirían ni estos teléfonos. Si nosotros no sacamos litio en Catamarca o en el Norte Argentino, las baterías no se hacen.

Yo creo que es una irresponsabilidad declamar banderas sin conocer ni la norma ni la realidad donde vive o convive la actividad minera en nuestras provincias.

¿Quién puede negarle la potestad a un gobernador de querer llevar adelante una explotación minera? El litio, el cobre; minerales estratégicos para la transición energética. Las tierras raras ahora. Están en nuestro norte, están en mi provincia. Pregunto esto: ¿cuál es el problema de que, a través de un estudio de impacto ambiental, como se hace con las explotaciones y las empresas mineras, se determine si un área glacial o periglacial pueda o no ser explotada? Acá lo que hay que hacer es un estudio serio, y si no se puede, no se puede. ¿O solamente un instituto puede determinar eso? ¿Solamente un instituto? Pues yo no creo que sea así.

Hablan de cuidar el agua. Yo me acuerdo de que cuando Minera Alumbraera estaba produciendo en Catamarca, en el máximo de la producción

consumía una determinada cantidad de agua. Simultáneamente, en esa época, estaba el *boom* del cultivo de olivos. Entonces, Catamarca era la provincia que mayor cantidad de hectáreas de olivos tenía en el país.

¿Saben cuánta agua consumía Alumbreira? La mitad del agua de riego de esos olivares. ¡Y yo no escuché a nadie defender eso! Yo no escuché a nadie que venga y me diga “estamos consumiendo el agua, ¡eh!, estamos consumiendo el agua!”. No escuché a nadie. La verdad es que no lo escuché.

La minería le daba cinco veces más ingresos a la provincia que los olivos. Daba diez veces más cantidad de trabajo que el campo. Ni hablemos de la calidad de empleo. Sin embargo, nadie decía nada. Y esto pasó en mi provincia, en la provincia de Catamarca.

Entonces, me molesta, me fastidia un poco cuando se hacen análisis ligeros de algunas de las cuestiones. No estoy diciendo que los senadores que se oponen a este proyecto no tienen razón y no tienen fundamento; respeto sus opiniones. Ahora, lo que yo quiero es que también respeten las decisiones de las provincias, provincias pobres como la mía, donde el 90 por ciento de los trabajadores son empleados públicos y donde tampoco tenemos muchas chances de llevar adelante ninguna actividad productiva, y donde la minería puede ser una solución. Tal vez no sea la solución ideal ni la solución completa, pero puede ser una solución.

Acá hay algo central: el desarrollo sustentable significa compatibilidad. Tenemos que ser cuidadosos con el ambiente, pero no podemos bloquear al desarrollo. Significa que donde hay una afectación relevante, la actividad no se puede hacer, pero donde un informe de impacto ambiental con participación ciudadana diga que sí se puede hacer, se debe llevar adelante. El Estado no puede cerrar la puerta por una definición previa, por las dudas.

Señores: en este país estamos cincuenta años atrasados en el desarrollo minero; y, si no, miremos a nuestros vecinos. En la misma cordillera, que tiene los mismos minerales, Chile exporta 60.000 millones de dólares por año. ¿Ustedes saben los ingresos que son para el país? ¿Ustedes tienen idea de la cantidad de trabajos reales, directos, de calidad que eso trae? ¿Cuál es el problema que las provincias intervengan en la definición de las áreas glaciares y periglaciales?! ¿Cuál es el problema?

Creo que hay que decirlo con claridad: la Argentina necesita inversiones que deben ser responsables, y la minería, cuando cumple con estos estándares ambientales, que son muy estrictos, puede convivir con la explotación de los recursos naturales. Lo puede hacer. La experiencia mundial lo demuestra. Habrá malas experiencias, pero hagamos de esta una buena experiencia. Pongamos en cabeza de las provincias las responsabilidades de control, porque si no acá vamos a discutir cincuenta años más hasta que empecemos a tener un verdadero desarrollo minero.

Aprobamos hace poco el RIGI; hay RIGI que ya el Gobierno lo tiene aprobado. Debemos dar señales de confiabilidad como país y de seriedad en el control de nuestros recursos naturales.

El debate no es minería sí o minería no. El debate es dónde, cómo y bajo qué condiciones. Y eso exige un marco jurídico “aggiornado”, que no sea ambiguo y que corrija el desequilibrio.

Proteger el agua es una obligación moral y constitucional, y también lo es generar empleo.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Muchas gracias, senador.

Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.

Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señora presidenta.

Creo que estamos ante un debate que es irreversible. La decisión que se tome respecto de esta ley es irreversible para el futuro de los argentinos. Por eso me hubiera gustado que esta ley la hubiésemos discutido un poco más, como decía el senador Bensusán al principio de este debate. Y lo mismo decía la senadora Terenzi.

Es una ley que, según acuerdos internacionales –no lo digo yo–, necesita de más participación ciudadana, y eso no pudo ocurrir. En menos de veinticuatro horas se firmó un dictamen. Y otra vez –parece que es el nuevo hábito del oficialismo–, cuando empezó el tratamiento de esta ley, nos pusieron sobre nuestras bancas las modificaciones, siendo que ya en Labor Parlamentaria las habíamos pedido porque es una ley que, si bien es profundamente política, de política económica y social, también es una ley profundamente técnica. Bueno, no lo logramos.

Creo que hoy acá no estamos, señora presidenta, discutiendo solamente una ley de presupuestos mínimos ambientales que surge del artículo 41 de la Constitución Nacional o una ley ambiental. Creo que estamos discutiendo cómo se gobierna la Argentina en un contexto de profundo endeudamiento y que produce incertidumbre de cómo vamos a afrontar no solamente el endeudamiento externo en dólares –que es mucho el que tenemos–, sino también de cómo nos vamos a hacer de los dólares para poder producir y trabajar en el país.

En ese contexto, acá nos quisieron presentar que esto era un debate técnico, y yo creo que no lo es. Creo que es un debate acerca de qué país queremos construir y cómo afrontamos y debatimos las decisiones irreversibles que vamos a tomar hoy. ¿Por qué digo que son irreversibles? Porque si hoy habilitamos que se pueda explotar un glaciar, ese glaciar desaparece, y son formaciones que tardan cientos de años en armarse y que ni con todo el oro del mundo podremos tener nuevamente.

Quienes conocen la cordillera saben que el agua no es un recurso más: es una condición de vida, de trabajo, de producción. Y acá recién hablaban de olivares, pero podemos hablar de fincas, de chacras, de ingenios, de industrias, de pueblos que sabemos que existen, sustancialmente, porque nieva, hay hielo y hay deshielo. Y para sorpresa de muchos, los argentinos nos tenemos que enterar de que el 70 por ciento de nuestro territorio es árido; la Pampa Húmeda es solo el 30 por ciento. El 70 por ciento de la población vive, existe, trabaja y produce porque nieva en la cordillera, hay hielo, hay deshielo y hay agua. Entonces, los glaciares, en este contexto, no son solamente un paisaje: son una infraestructura natural, son la reserva hídrica de los argentinos y son estabilidad económica. Por eso digo que no es un debate técnico. Y si es un debate sobre la estabilidad económica, estamos hablando del trabajo, de la producción y del arraigo de los argentinos. Y si hablamos del arraigo de los argentinos, hablamos de familia,

de comunidad y de futuro. Todo eso encierra esta ley que trabajamos solamente veinticuatro horas.

Quiero decirles algo que en este Congreso va a ser anecdótico, pero que es profundamente mundial. El año pasado la ONU, según sus informes, dijo que era alarmante la velocidad con la que se estaban derritiendo los hielos y los glaciares en el mundo. Por eso estableció el año 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares. Irónico, ¿no? ¡Qué raro la Argentina contra el mundo! Supimos ser un Congreso, una nación de vanguardia. ¡La Ley de Glaciares fue la primera ley en el mundo que protegía a los glaciares! Hoy, para atrás.

Lo que quiero destacar –y lo voy a decir hasta el cansancio– es que esta no es una modificación técnica, como dice el Poder Ejecutivo en el mensaje, no es de interpretación: es una ley que flexibiliza los estándares ambientales. Es una ley que es un retroceso y es un cambio de paradigma, así como se los digo. Pasamos de un paradigma científico, rígido, técnico, confiable del IANIGLA –con sede en Mendoza– a un criterio discrecional político. Eso es lo que estamos votando hoy.

Y esta Ley de Glaciares de la que muchos hablaron no salió de un repollo, hay una historia. Hubo una Ley de Glaciares que fue vetada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hubo una ley que los grupos circunstanciales mayoritarios de ese momento –en los que algunos de los que hoy están acá participaban– crearon y que era antiproductivista. Algunos que están acá, algunos que están allá, la impulsaron, la defendieron, la votaron. Y la expresidenta, como dijo acá el senador informante, la vetó. Entonces, vino otra ley impulsada por las provincias. Fue debatida en varios foros en la provincia y es la ley que tenemos hoy. La Ley de Glaciares que tenemos hoy es esa, una ley que se amiga con la producción y que tiene reglas claras. No hay nada de incertidumbre, lo dijo la Corte. No tiene incertidumbre. Que no les guste esa certidumbre, son dos mangos aparte. Pero esta ley prohíbe las explotaciones en los glaciares y periglaciares. Es clara, objetiva, concreta y científica.

Ahora bien, si queremos explotar los glaciares y periglaciares, ¡bueno, se hubieran puesto los pantalones largos y la hubieran derogado!, que es lo que hacen. Es lo que hacen: flexibilizar los presupuestos mínimos que establece esta ley. Pueden estar en desacuerdo, ¡pero no nos tomen por tontos! Esta ley flexibiliza y cambia el paradigma. No es una cuestión de malos y buenos, de minería sí o minería no. Queremos explotar los glaciares, bueno, de eso estamos discutiendo.

¿Por qué digo que esta ley es constitucional? Porque el artículo 41 establece que la Nación debe fijar un piso común de estándares mínimos ambientales para todas las provincias. Por eso tenemos esta ley, la Ley de Bosques y varias leyes que se encuadran en el 41.

Si había algún tipo de incertidumbre, esta ley terminó con esa discusión cuando, en 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo en el caso Barrick que es una ley constitucional y totalmente compatible con los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional. Dijo, además, que los glaciares son bienes colectivos comunes, que la Constitución tiene un plan ambiental que lo impone en el artículo 41 y que esta norma no es dudosa, no es inconstitucional, sino que va en total consonancia con la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Este principio que establece la ley actual de los glaciares es el principio precautorio, que lo escuché en varias alocuciones –incluso, al miembro informante sostenerlo– y que la Corte, en 2009, en el fallo *Salas*, estableció como un principio autónomo para dictar medidas cautelares. Este principio dice que, ante la duda, antes de lamentar cuestiones irreversibles naturales, es mejor prevenir y crear las certezas científicas para que no haya daños irreversibles en la naturaleza.

Bueno, esta ley cambia totalmente la perspectiva del principio precautorio –que no solamente está en esta ley, sino también en la Ley General de Ambiente y en varios acuerdos internacionales– y lo pone en una cláusula abierta. La verdad es que esta ley genera todo lo contrario de lo que dicen que va a generar quienes defienden esta modificación: donde había certidumbre otorgada por la Corte, ahora habrá incertidumbre, porque pasan de un paradigma científico a un paradigma discrecional abierto.

¿Por qué digo esto de que porta inseguridad jurídica? Porque en el artículo 5°, que modifica el artículo 6°, habla de “alterar de un modo relevante”. ¿Qué es “alterar de un modo relevante”? ¿Creen que esto no es judicializable? Si un gobernador establece que no es de carácter relevante, ¿van a ir a interpretarlo a la Justicia? ¿Ustedes creen que esto genera seguridad jurídica para las inversiones millonarias que hacen las mineras, las petroleras o los grandes emprendimientos turísticos de alta montaña? No. No genera seguridad jurídica. Genera inseguridad jurídica donde antes había seguridad jurídica.

Además, no tuvieron ni siquiera la luz para fijar criterios técnicos comunes entre todas las provincias. Si supuestamente el federalismo es lo que los invoca –ya vamos a hablar del federalismo también–, ni siquiera tuvieron la luz para hacer eso, para darle seguridad jurídica a las inversiones que dicen que quieren atraer. Entonces, la verdad es que ninguno de los objetivos que esgrimen en el mensaje del Ejecutivo se cumple.

Respecto del federalismo –¡vamos con el federalismo!–, es extraño que este Gobierno plantee lo del federalismo. Primero, creo que, como decía Allende, es una contradicción biológica que este Ejecutivo plantee eso. Por ejemplo, se queda con la plata de las provincias correspondiente a los combustibles, que todavía la están juntando sin repartirla, entre otras cosas. Pero, dicho de otro modo, quiero señalar que, al revés de lo que dice el Gobierno, yo sostengo exactamente lo contrario. Creo que este proyecto de ley debilita el federalismo, porque crea una especie de *dumping* ambiental flexibilizador. Con este proyecto hacen totalmente lo contrario con las provincias: en vez de cooperar y buscar un destino común –como fue cuando construimos la Nación, porque las provincias decidimos un destino común de cooperación–, las pone a competir en un *dumping* flexibilizador para ver quién atrae más inversiones.

Entonces, las provincias, en vez de cooperar, empiezan a competir. Y esto de la supuesta competencia entre los artículos 41 y 124 de la Constitución ya lo estableció el fallo *Barrick* en 2019, con el voto mayoritario. Y le pido, señora presidenta, permiso para leer un párrafo del considerando 13 de este fallo.

La Corte dice, en el voto mayoritario, que los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional deben ser interpretados buscando adaptar la gestión de los recursos naturales a las directivas de la cláusula ambiental para

cumplir, de la forma más fidedigna posible, un mecanismo propio del federalismo concertado que estableció el constituyente reformador en el 94. En ese marco, la tarea de concertación federal es, primariamente, de las autoridades políticas nacionales y provinciales, que deben conjugar intereses para potenciar el cumplimiento del texto constitucional, sin vaciar de contenido el modelo federal de Estado ni el proyecto ambiental de la Constitución.

Esto es lo que establece la Corte en 2019 respecto de la armonización de los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional: el federalismo de concertación y diálogo.

Entonces, ¿hay incertidumbre? No, no hay incertidumbre. Digan la verdad: ¿no les gusta la ley! Quieren explotar los glaciares y los periglaciares. ¡Discutámoslo! ¡Discutámoslo!

Ahora bien, ¿están todos los metales y los recursos explotados por fuera del ámbito glaciar y periglacial? No. Existen un montón de explotaciones posibles que están fuera de ese ambiente.

Lo dijeron varios, pero todos hablaron de minería y no del texto de la ley: esto no es minería sí o minería no; esto es qué país tenemos en la cabeza: si queremos una minería que sea base del desarrollo industrial y nacional soberano de los argentinos o si queremos un modelo de país de extracción de recursos naturales para afuera.

Entonces, señora presidenta, yo creo que hay que ir al corazón de la verdadera discusión que tenemos hoy. Hace tiempo que vemos que el eje de la disputa geopolítica en el mundo son los recursos naturales, y ahí la Argentina se encuentra en un punto decisivo. Nosotros tenemos la segunda reserva de ambiente periglacial más grande de Latinoamérica. Esa es nuestra fortaleza. Y estamos insertos en un modelo económico de este Gobierno de endeudamiento, de endeudamiento sostenido con más endeudamiento o con la extracción de recursos naturales. Y ojo, repito: esto no es minería sí o minería no, sino qué proyecto de país queremos construir.

Repito: el ambiente glaciar y periglacial de la República Argentina representa el 0,4 por ciento de nuestro territorio. Estamos hablando de proteger el 0,4 por ciento del territorio en donde no se puedan hacer actividades mineras, petroleras o que dañen la previsibilidad de los glaciares.

Esta ley -que, repito, está inserta en un modelo económico y social- no es aislada, sino que desde hace tiempo la vienen pidiendo varios actores internacionales -no nacionales, internacionales-. Este modelo se basa en endeudamiento con más endeudamiento, en pagar la deuda con recursos naturales que se extraen y se llevan al extranjero sin tratar.

El primero que pidió la modificación de la Ley de Glaciares fue, con su visita, Scott Bessent. Y le pido permiso para leer textual lo que dijo Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos: las empresas estadounidenses quieren la entrada preferencial en la minería de litio, cobre y tierras raras. Estas mismas corporaciones necesitan modificar la Ley de Glaciares para poder avanzar sobre esas zonas que hoy están protegidas.

Luego, esta ley y este modelo se insertan con el RIGI; o sea, debe "linkarse" con el RIGI. Ustedes dicen, bueno, el RIGI más la ley nos van a dar la plata para pagar la deuda. No. Encima de que les entregamos nuestros

glaciares por nada, a los cuatro años esas inversiones no tienen que dejar los dólares en la Argentina; ni siquiera vamos a poder usar esos dólares. Además, habilita la importación de bienes y de máquinas usadas o nuevas con cero por ciento; y, además, les bajan el impuesto a las ganancias, que es coparticipable. O sea, les damos los glaciares y ni siquiera dejan los dólares. Pero, además, esta modificación de la ley apareció en el Pacto de Mayo y apareció en la primera Ley Bases –que después tuvieron que sacar–.

Sobre el Pacto de Mayo quiero decir algo, porque es lo que va a venir al Congreso: la modificación de bosques nativos, de la Ley del Fuego; no es solamente el tema de los glaciares, es la flexibilización ambiental. Pero la modificación de la Ley de Glaciares apareció en el acuerdo de facilidades extendidas del FMI, donde uno de los requisitos para que nos den la plata era la modificación de la Ley de Glaciares. ¿Y saben también dónde aparece? En el acuerdo firmado con Estados Unidos; uno de los requisitos para el acuerdo es cambiar la Ley de Glaciares.

Como ven, el negocio es redondo; para los argentinos no, es negocio para los que se la van a llevar. Como dice Atahualpa Yupanqui, las penas son nuestras, pero las vaquitas son ajenas. Ese es el modelo económico, político y social, porque no es solamente económico, en contra de la soberanía y los intereses de los argentinos que este Gobierno nos viene a ofrecer a este recinto. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con eso.

Nosotros queremos un país que tenga desarrollo, industria nacional y que genere crecimiento. Claramente, necesitamos crecer, pero esta minería de extracción no hace crecer al pueblo argentino, eh. Ya les dije, no nos van a dejar dólares, ni siquiera impuestos internos, ni siquiera tenemos una cláusula de desarrollo de industria local de proveedores. No; los dejamos que importen las máquinas de afuera, usadas si quieren.

Los países inteligentes protegen aquellos recursos naturales que los van a llevar al desarrollo, como es el agua; nosotros los regalamos. El desarrollo necesita planificación, y hoy la verdadera discusión es esa: ¿qué tipo de explotaciones de los recursos naturales queremos? Ahí está la verdadera discusión. Se trata de qué país y qué tipo de desarrollo queremos.

Para que exista desarrollo real tiene que haber condiciones: valor agregado local, impulso de la industria nacional, infraestructura permanente, empleo calificado, inversión en universidades, en el INTI; bueno, todo eso el Gobierno lo hace al revés de lo que nosotros entendemos que debería ser una explotación de recursos naturales que genere desarrollo nacional y crecimiento con soberanía.

La verdad es que creemos que la Argentina no puede resolver sus problemas estructurales, como lo es el endeudamiento externo, hipotecando el futuro estratégico. La necesidad de dólares urgente no puede justificar que rifemos recursos que no vamos a poder recuperar ni con todo el oro del mundo.

Yo quiero que nos hagamos una pregunta. Les damos la explotación de los glaciares; perfecto. ¿Cuántos viñedos, hortalizas o chacras van a quedar cuando se vayan? Esto no es una utopía, es el modelo de Australia el que les estoy explicando. Es el modelo australiano. ¿Cuántas carreteras o cuántos puentes van a quedar? ¿Cuántas universidades van a fundar? ¿Cuánto empleo genuino van a generar? ¿Cuánta capacitación? ¿Cuántas escuelas

técnicas? ¡Nada! ¡Porque les regalamos todo! Porque no estamos discutiendo cómo vamos a generar desarrollo con estas oportunidades que nos da nuestro territorio.

Tuvimos la suerte de nacer en el territorio argentino, que tiene grandes riquezas naturales, y las estamos rifando por urgencias de un Gobierno que no sabe cómo desendeudar a la Argentina.

Miren, yo soy de la provincia de Mendoza, y quiero ser más precisa en mi exposición. Saben que es la provincia más hermosa de la Argentina...

-Manifestaciones simultáneas.

Sra. Fernández Sagasti.- Bueno, nobleza obliga, es la más hermosa, y muchos de ustedes la semana que viene van a andar por allá, así que más vale que me digan que sí. *(Risas.)* Es muy hermosa, productiva, trabajadora, y la verdad es que Mendoza hace más de una década que está en sequía. Hace más de una década que estamos en sequía, y estamos iniciando un proceso productivo de minería -para mi gusto mal hecho, pero bueno-, y los estudios científicos hablan del retroceso que han tenido los glaciares en la provincia de Mendoza. En los últimos treinta años los glaciares han retrocedido en superficie un 36 por ciento.

¿Están explotados todos los recursos naturales en la provincia de Mendoza por fuera de los glaciares? No. Yo lo digo en este contexto porque en tiempos de sequía en la provincia de Mendoza los explican entre un 20 y un 50 por ciento el caudal de nuestros ríos. Y creo que esta discusión de la Ley de Glaciares no es ideológica -lo repito: no es ideológica-, es una decisión de responsabilidad económica y social de cuidar uno de los recursos más preciados que tenemos como argentinos.

Yo soy hija de hombres y mujeres que en la Argentina y en la provincia de Mendoza ayudaron a fundar fincas, que trabajaron en pozos petroleros de YPF, y gracias a sus esfuerzos se construyeron escuelas, hospitales, y lograron que sus hijos sean médicos, ingenieros, yo abogada -primera generación de mi familia-. Y a mí no me lo contaron; eso está en el ADN de los mendocinos.

No tengo dudas de que esta es una decisión que va a perjudicar a las generaciones que vienen y que la provincia de Mendoza tiene una gran oportunidad, pero cuidando su reserva hídrica.

Creo que esta coyuntura fiscal no es suficiente mérito para entregar todo. Entiendo que acá muchos van a decir: "Vienen a bloquear por bloquear", "Se oponen por oponerse". No. Cuando se tratan leyes que tienen el carácter de consecuencias irreversibles, como expliqué, este Senado debería ser un recinto de reflexión.

No creo que dentro de veinte años los argentinos empiecen a ver los vericuetos técnicos de esta ley. Creo que dentro de veinte años los argentinos van a contar los glaciares que nos faltan, y no como consecuencia del cambio climático.

La mayoría de este bloque va a votar en contra de esta ley, porque creemos que la Argentina necesita crecer, pero necesita crecer con soberanía; necesita inversión, pero una inversión que construya nación; necesita producción, pero una producción que banque y desarrolle la industria nacional.

Defender el agua es defender el progreso, y no es incompatible con la inversión extranjera ni con la explotación de nuestros recursos naturales.

Queremos una Argentina que forje su futuro y no lo hipoteque, señora presidenta. Queremos una Argentina que produzca, se industrialice y decida por sí misma su futuro.

Por todo eso, señora presidenta, vamos a rechazar este proyecto de ley, que entendemos que es un retroceso, un cambio de paradigma y una flexibilización a nuestras leyes ambientales.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senadora.

Tiene el uso de la palabra la senadora Patricia Bullrich.

Sra. Bullrich.- Muchísimas gracias, presidenta.

Voy a coincidir con la senadora preopinante respecto de que esta es una ley profundamente política; y es profundamente política porque estamos hablando de ideas respecto a cómo crece, a cómo se desarrolla y a cómo se construye la riqueza en la Argentina, frente a una idea de un país empobrecido que sólo sabe crear Estado, más Estado, y eso genera la pobreza de los argentinos.

Cuando discutimos que la Argentina, con sus recursos, pueda generar las capacidades de explotación, como lo hacen cruzando la cordillera -no hay que irse a Australia o a Canadá para verlo-, eso significa para la Argentina tocar un recurso estratégico. ¿O no son recursos estratégicos para nuestro país los recursos naturales que tienen? Es un recurso estratégico nuestra Pampa Húmeda y la capacidad de generar un campo que da divisas y riquezas, y eso ha hecho crecer a determinadas zonas del país. Sin embargo, hay otras provincias de nuestro país que tienen hundidos sus recursos estratégicos; y esos recursos estratégicos -como puede ser el oro, del que tantas veces habló la senadora preopinante-, con esa concepción retrógrada de no lograr que la Argentina pueda explotar sus recursos naturales, van a seguir enterrados. Porque siempre hay un "pero"; siempre hay un "pero" que impide que la Argentina pueda crecer. Porque es más fácil un país dominado con lógicas feudales; porque es más fácil un país en el que la lógica corporativa feudalista le gana al capitalismo desarrollado, a aquel que le da a la gente la libertad de poder usar todos los recursos que el país da para sus habitantes. Acá parece que eso está prohibido. Acá parece que la Argentina tiene casi la obligación de seguir siendo un país pobre y, por eso, ¡sí!, claro que estamos cambiando profundamente la Argentina y la historia de la Argentina, como lo dije antes.

Estamos cambiando la historia de la Argentina porque no queremos discutir más esta lógica ridícula, retrógrada, entre ambiente y economía, como lo han dicho tantos senadores en esta sesión. Porque esa es una dicotomía que hace pobres a los argentinos. Es una dicotomía que piensa en una sola dimensión; no puede pensar que se puede compatibilizar total y absolutamente la capacidad de un pueblo de pensar en sus recursos estratégicos hídricos y en sus recursos estratégicos mineros, o de cualquier otro tipo, porque acá no estamos hablando solamente de la minería. Porque, cuando se discutió esta ley, se dejó tan abierta la posibilidad de explicar qué

es el ambiente periglacial que un montón de zonas productivas de nuestro país quedaron sin poder producir justamente por esa interpretación.

Entonces, ¿por qué no vamos a desarrollarnos? ¿Por qué no vamos a generar esa capacidad, esa inteligencia –como decían los senadores– que tienen las provincias para poder entender cómo proteger su agua? ¿O usted cree que San Juan o Mendoza no quieren tener agua, no quieren poder proteger su agua? La quieren proteger, pero también quieren que sus pueblos vivan con mejores recursos y explotar los recursos que tienen.

Cuando uno va a Malargüe, ¿qué le piden los mendocinos? “Abran; abran la explotación minera, porque acá ya nos hemos quedado sin petróleo y queremos tener capacidad de nuevos recursos”. ¿Qué le dice el norte de Santa Cruz, con sus pozos que ya están sin poder explotarse? ¿Qué les dicen en la zona de Comodoro Rivadavia, donde los pozos ya están sin capacidad de seguir produciendo; en la primera zona estratégica de petróleo que tuvo nuestro país?

Entonces, terminemos con la falsa elección: no es agua o trabajo, es un país que cuida su agua, como lo hacen tantas provincias, y que tiene que cuidar su trabajo, su producción y la capacidad de desarrollarse.

La otra lógica es la que desde el año 2010 hasta ahora nos impidió lograr tener una cantidad importantísima de inversiones, que no la pudimos lograr por esta no delimitación en la Ley de Glaciares.

Pero acá –y esto es lo importante– en 2010 hubo un objetivo que fue legítimo; el gobierno dijo: “Bueno, vamos a ver cómo logramos que los glaciares sean bienes públicos”, y siguen siendo bienes públicos; siguen siéndolo, lo dice la ley. Siguen siendo reservas estratégicas de agua; lo dice la ley. Es decir que no hay un cambio en la concepción; hay un cambio en la irracionalidad de una ley que no permite que en áreas extensas que no tienen cuencas de agua, que no son hídricas, se pueda producir.

Queremos un país que pueda producir hasta en el último milímetro, para lograr que la gente esté mejor, tenga mejores salarios, sea más rica, que haya más empresas y que haya un capitalismo productivo real con seguridad jurídica.

¡No se elimina; se ordena! ¡No estamos eliminando nada! ¡El artículo 1º queda exactamente igual! ¡Léanlo! Estamos ordenando lo que no estaba ordenado, y por eso estamos ordenándolo tantos años después.

Hoy, votamos un acuerdo que tardó veintiséis años; y les aviso que, aunque no nos dejaron, fuimos el primer país en lograrlo, porque la promulgamos. El presidente de la Nación la promulgó hace un rato. Así que, no es que competimos con Uruguay, pero queríamos ser el primer país, y por suerte lo logramos.

Gracias a todos, porque todo el mundo votó. Gracias a todo el mundo.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Bullrich.- Gracias a todos: a los 69 que votaron este proyecto, y a los que no votaron también, porque así es la democracia.

No estamos paralizando. Proteger no es paralizar, y acá proteger ha sido paralizar. Y cuidar no es prohibir. Porque en la Argentina todo se ha prohibido. Todo es al revés en la Argentina: “te prohíbo abrir un negocio,

porque si abris el negocio vas a tener un problema". No se confía en los ciudadanos. No se confía en la libertad de la gente. No se confía en la conciencia. No se confía en la conciencia de aquellos que tienen que decidir...

-Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Les pido por favor silencio, así puede concluir su disertación la senadora.

Sra. Bullrich.- Bueno, parece que cada vez que hablo me interrumpen.

Entonces, terminemos con esta confusión. Esta confusión ha paralizado una cantidad importantísima de inversiones.

El principio precautorio del que tanto se ha hablado es, justamente, evitar el daño. Este daño se está evitando, claramente, al no tocar la columna vertebral de esta ley. No se toca la columna vertebral de la ley; se deja intacta.

El artículo 1º, que es el que define exactamente qué significa esta ley, queda exactamente igual. Entonces, la consecuencia es la capacidad de delimitar que en las áreas periglaciales hay áreas que no son reservas hídricas, y las seguimos teniendo como tales porque la ley impide que podamos generar esa investigación.

Entonces, a ver, ¿vamos a hacer de la Argentina un país rico? Bueno, para ser un país rico tenemos que lograr que las leyes no prohíban absolutamente toda la capacidad de producción que tiene nuestro país.

Esto está claramente planteado: hay una evaluación de impacto ambiental. ¿Todas las actividades de nuestro país tienen evaluación de impacto ambiental? No, casi ninguna. Acá existe. La actividad minera tiene muchas más precauciones que cualquier otra actividad. Existe una evaluación ambiental también estratégica cuando la escala del proyecto lo exige. También existe la participación ciudadana; es decir, toda la capacidad que puede tener un estudio de impacto ambiental para hacer una evaluación real y una evaluación de impacto ambiental estratégica cuando la escala lo plantea.

Esto quiere decir que estamos planteando protección con responsabilidad y reglas claras. Estamos profesionalizando los controles. Esto es muy importante: la profesionalización de los controles.

Se habla de la Constitución y está claro lo que dice la Constitución. Y le pido permiso a la senadora para leer...

-Manifestaciones simultáneas.

Sra. Bullrich.- Presidente: le pido permiso.

La Constitución establece la utilización racional de los recursos naturales, y en el 124 dispone el dominio originario de las provincias sobre sus recursos, que lo estamos planteando en esta ley. Es decir, constitucionalismo puro contra la prohibición absoluta.

No vamos hacia una ley que plantee un extractivismo irresponsable; estamos planteando controles claros, muy claros, para tener un desarrollo que sea sostenible. Hablamos de hacer las cosas bien, pero hacerlas, no dejar enterrada la riqueza argentina que les significa la posibilidad de una mejor vida a cientos de miles de argentinos, y muchas provincias podrían cambiar

su matriz de empleado público, de gobiernos que solo pueden ofrecer empleo público por empleo privado.

Hay provincias que hoy votaron en contra –algunos senadores, no todos–, y a ellos les pregunto si saben cómo se van a beneficiar las provincias de Córdoba o de Santa Fe con la industria metalmecánica con todos los proyectos mineros que va a haber. ¿Saben quiénes van a generar esa capacidad? La provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe...

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Bullrich.- Las provincias de Córdoba y Santa Fe son las que van a poder generar esta posibilidad.

Y quiero plantear algo importante.

–Manifestaciones de la senadora Fernández Sagasti fuera de micrófono.

Sra. Bullrich.- ¿El RIGI? Ahora le voy a hablar del RIGI, porque va a ver la cantidad de plata que va a entrar.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Bullrich.- Hoy, el mundo está viviendo una transición energética histórica: energías renovables, autos eléctricos, baterías que necesitan minerales. Se necesita cobre, se necesita litio, y por eso la pregunta es directa: ¿la Argentina va a participar de esta transformación o se va a quedar mirando, con pobres, con empleados públicos y sin producción? Nosotros elegimos meternos en este momento histórico que va a permitir que, legislando esto para darles seguridad jurídica, la Argentina pueda participar de este cambio energético enorme que está teniendo la humanidad y que va a ser a favor de nuestro país, de nuestra gente y de nuestro trabajo.

¿Qué pasó con esta discusión ideológica que ha habido? No llegaron las inversiones, no se creó empleo, hubo provincias sin oportunidades. Las provincias que aprovecharon las oportunidades son las que más defienden esta ley: San Juan, Salta y muchas más. Pero, ¿por qué lo defienden San Juan y Catamarca? Porque saben lo que lograron con proyectos mineros, con seriedad y con evaluación ambiental seria para que los proyectos sean sostenibles.

Entonces, vamos a que otras provincias se sumen, vamos a que el país logre sumar sus recursos en la misma cordillera que del otro lado explotan.

El RIGI, que algunos no lo votaron, pero otros sí y por eso hoy lo tenemos. En los próximos años vamos a tener entre 23.000 y 25.000 millones de dólares de inversión minera real. Entonces, no nos hablen de deuda externa, hablemos de cómo estamos abriendo las inversiones, porque la deuda externa es mucho más baja que la que dejó el peor presidente de la historia argentina.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Silencio, por favor.

Sra. Bullrich.- Estamos hablando de proyectos como Vicuña, José María, Filo del Sol –18.000 millones de dólares–; El Pachón, MARA o Taca Taca en Salta suman millones y millones...

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Bullrich.- Sí. Se llama Taca Taca la mina. Se llama Taca Taca, ¿qué quieren que haga? No le voy a cambiar el nombre.

Sra. Presidente (Villarruel).- Les pido silencio por favor, senadores.

Sra. Bullrich.- Es salteña.

-Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Senadores, por favor, les pido silencio para que pueda concluir y podamos pasar a la votación.

Sra. Bullrich.- Es decir que el RIGI, que se votó en este Senado, en el Parlamento de la Nación, ya va superando los 25.000 millones de dólares. Fíjense la importancia: empleo, infraestructura, divisas, desarrollo federal.

-Manifestaciones simultáneas.

Sra. Bullrich.- Cada vez que yo hablo parece que hay un...

Sra. Presidente (Villarruel).- Les pido, por favor, silencio. Ustedes pudieron disertar y hacer sus exposiciones. Les pido que dejemos el espacio para que lo haga la senadora, por favor.

Sra. Fernández Sagasti.- Decís cosas que hacen reír.

Sra. Bullrich.- Algo importante: esto no es una promesa. Acá la historia nos está golpeando la puerta. Abrámosla. No dejemos pasar esta oportunidad. Hemos dejado pasar muchas oportunidades en la Argentina.

Por favor, vayamos a pensar que el trabajo, que la producción, que la inversión valen la pena; que vale la pena jugarse por eso.

Estamos hablando de cambios estructurales. Las proyecciones son claras: exportaciones mineras en 2025, más de 6.000 millones; hacia 2029, 14.000 millones de dólares.

¿Les parece poco? Imagínense las provincias que van a cambiar y donde su gente va a vivir mejor.

Tres pilares nos van a sostener -y podríamos tener más si algunas provincias avanzan- hoy: el cobre, el litio y el oro.

Tenemos la reserva más importante de plata del país. Sin embargo, eso todavía está siendo discutido. Ojalá podamos avanzar en algunas regiones donde todavía la minería no ha logrado hacerlo y no tiene, quizás, la licencia social que tendrán que construir los gobernadores y los pueblos para poder entender la importancia de este cambio que estamos haciendo.

Por eso, queremos que hoy se entienda que el verdadero ambientalismo del siglo XXI no prohíbe. Es un ambientalismo que tiene tecnología para ir con cuidado, que tiene controles para cuidar nuestros recursos y que no se terminen, que tiene transparencia y que tiene previsibilidad.

Eso es lo que estamos planteando. Es un ambientalismo responsable. No es el ambientalismo extremo que lo único que hace es impedir todo.

Nosotros vamos a ir contra aquellos que impiden todo.

Por eso estamos planteando que estas inversiones van a llegar con previsibilidad. Y esta ley genera previsibilidad.

Está bien que la pidan aquellos que quieran invertir. Por supuesto, tienen que pedir que el país tenga seguridad jurídica, que no cambie sus leyes todos los días, que no diga un Gobierno que va a voltear la ley que otro aprueba. Claro que lo quieren, porque son inversiones de largo plazo.

Procedimientos claros, autoridades definidas, evaluaciones ambientales serias, todo esto es lo que necesitamos.

El capitalismo, señora presidenta, no le teme al control. Le teme a la arbitrariedad, al clientelismo, a la discrecionalidad, al feudalismo. A eso le teme el capitalismo, no al control. El control es intrínseco del capitalismo, porque necesita seguridad jurídica.

Por eso nosotros estamos solucionando esta falsa dicotomía de una manera razonable. Y por eso creo que la mayoría de los senadores hoy lo van a entender así.

Como dijo la senadora Royón, las provincias tienen los equipos para hacer las cosas con base científica, desarrollo federal, trabajo formal, inversión productiva, equilibrio constitucional.

Eso es lo que dice el artículo de la Constitución que utiliza la palabra claramente; el concepto es claro, no es difuso. No dice que las cosas son de una determinada manera. Dice que tiene que ser responsable, que tiene que ser razonable. Utiliza la palabra “razonable”.

La razonabilidad no es dejar la producción afuera. Eso no es razonable.

Y si hoy hay pérdida de glaciares o de agua en la cordillera, como acaba de plantear la senadora preopinante, eso no es producto de esta ley. Eso está pasando ahora, no es que va a pasar por esta ley.

Entonces, estamos hablando, justamente, de que esta ley va a mantener intacta esa columna. No la toca.

No le tengan miedo. No tengamos miedo al futuro. Tengamos madurez institucional como la estamos teniendo en este momento.

No elijamos perder la posibilidad de crecer con responsabilidad.

La Argentina necesita empleos. La Argentina necesita inversión. La Argentina necesita trabajo. Necesita bajar el 32 por ciento de pobreza que todavía tenemos. Heredamos el 50, ahora tenemos el 32. Necesita bajarlo para que vuelva ese gran país de clase media que hemos sido donde, como dijo la senadora preopinante, el sueño de los padres sea que sus hijos mejoren, estudien, tengan un título o hagan lo que quieran, pero que progresen.

Nosotros queremos el progreso de los argentinos. Queremos que sean ricos, no pobres.

No le tenemos miedo a la palabra “riqueza”. No le tenemos miedo a la palabra “empresa”. No le tenemos miedo a la palabra “inversión”. No le tenemos miedo a la expresión “inversión extranjera”.

Por eso hoy votamos una ley técnica y política. Porque votamos para que la Argentina vuelva a confiar en sí misma, ya que estamos cambiando la historia en nuestro país.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senadora.

Corresponde votar la autorización de las inserciones y las abstenciones, a mano alzada.

-Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resultan aprobadas.

Propongo que se vote en primer término, en general y por medios electrónicos, el Orden del Día N° 700/25.

Senadora Corroza: tiene el uso de la palabra.

Sra. Corroza.- Gracias.

Por favor, quiero pedir permiso para abstenerme en las votaciones en general y en particular de toda la ley.

Sra. Fernández Sagasti.- ¿No tienen que leer primero las modificaciones o después...?

Sra. Di Tullio.- ¿Qué se va a votar?

-Manifestaciones simultáneas.

Sra. Di Tullio.- Presidenta: ¿puedo pedir la palabra?

Sra. Presidente (Villarruel).- Sí.

Tiene el uso de la palabra, senadora Di Tullio.

Sra. Di Tullio.- Presidenta: ya lo dijo el senador Bensusán y también, la senadora Anabel Fernández Sagasti.

Cuando empezó el debate, nos dejaron un papelito con modificaciones acá. No tiene ni el membrete del Senado.

Yo le quiero decir que las sesiones son públicas y las comisiones también. Se negocia y se discute en las comisiones para que todo el pueblo se entere y no haya sospechas de dónde y qué se negocia para los dictámenes.

Pero, por lo menos, que el miembro informante lea cuáles son las modificaciones para saber qué se está votando. Que lo sepa el pueblo argentino, señora presidenta, ya que no supimos dónde negociaron, qué se negoció, quién les dio qué. Porque la verdad es que acá de lo único que se habló fue de minería; no se habló de otra cosa. No se habló de medioambiente. No se habló más que de negocios, minería, etcétera.

Si querían seguridad jurídica, la verdad es que lo que menos hicieron fue darle, a esto que van a convertir en ley, justamente, seguridad jurídica.

No se hacen así las cosas. Pero por lo menos, como mínimo, que lean cuáles son las modificaciones antes de ponerlas a votación.

Sra. Presidente (Villarruel).- Senadora: antes de darle la palabra al senador Coto, le explico que primero íbamos a votar en general el dictamen 700/25. Luego, se iba a votar en particular, y ahí se iba a dar lectura artículo por artículo.

Tiene el uso de la palabra el senador Coto.

Sr. Coto.- Gracias, señora presidente.

Quería decir lo que acaba de expresar usted: que íbamos a hacer la votación general y, luego, se haría la lectura por Secretaría de las modificaciones.

Nada más, señora presidente.

-Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene el uso de la palabra el senador Vischi.

Sra. Di Tullio.- Están votando mal, eh...

Sr. Vischi.- Gracias, señora presidente.

Si ustedes integraran las comisiones, podrían estar participando de las negociaciones y de todo lo que corresponde. Ustedes no integran las comisiones, entonces, no se quejen.

En segundo lugar, como siempre se hace, se aprueba en general. Luego, se proponen las modificaciones y se vota en particular.

Si ustedes habilitan, se leen primero las modificaciones y votamos todo en una sola votación. Y así es perfecto.

Si ustedes habilitan, no hay ningún problema. Así que propongo como moción que se lea...

Sra. Presidente (Villarruel).- Les explico, senadores, que tal como habíamos estipulado, se va a votar en general.

Luego de que el presidente de bloque que defiende la ley hace uso de la palabra, no hay más participaciones. Eso lo sabemos todos.

Entonces, la intención es votar primero en general. Y luego se va a votar en particular, artículo por artículo. Se dará lectura previamente de cada uno de ellos por Secretaría.

Se va a votar por medios electrónicos el Orden del Día N° 700/25 sobre Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, PE. 161/25.

Tenemos dos miembros y uno más no identificados.

Sr. Vischi.- Señora presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Sí, senador Vischi.

Sr. Vischi.- Señora presidenta: usted me interrumpió, pero yo estaba planteando que ya que ellos estaban de acuerdo en que se leyeran todas las modificaciones, se podía hacer en una sola votación en general y en particular.

Entonces, mociono que si quieren hacerlo de esa forma, avancemos con la lectura de las modificaciones...

-Manifestaciones simultáneas.

Sr. Vischi.- Bueno, ahora no quieren. Pero es lo que plantearon ustedes.

Sra. Fernández Sagasti.- ¿Sabe por qué no? Por chicanero. Entonces, no.

Sr. Vischi.- ¿Por chicanero?

Bueno, entonces haremos como usted dijo, señora presidente.

-Manifestaciones simultáneas.

Sr. Secretario (Giustinian).- Senadora Moisés: ¿se puede identificar? Porque se levantó de la banca.

Sra. Presidente (Villarruel).- Si no hay más abstenciones, se vota.

-Se practica la votación por medios electrónicos.

-Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Senadoras Marks y Kirchner: voten, por favor.

-Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos 40, negativos 31 y 1 abstención. (*Aplausos.*)

-El resultado de la votación surge del Acta N° 3.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resultando aprobado en general, corresponde ahora proceder a la votación en particular.

Por Secretaría se va a dar lectura de los cambios propuestos en el artículo 1°.

Les pido, por favor, a los senadores, que no aplaudan entre votación y votación.

Gracias.

Sr. Secretario (Giustinian).- Artículo 1°.- Sustitúyase el artículo 1° de la Ley N° 26.639 por el siguiente:

“Artículo 1° - *Objeto.* La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, a fin de que puedan ser destinados a los siguientes usos: (a) para el consumo humano; (b) para la agricultura; (c) para la protección de la biodiversidad; (d) como fuente de información científica; y (e) como atractivo turístico.

Los glaciares constituyen bienes de carácter público.

La protección de los glaciares y del ambiente periglacial en los términos del presente artículo y de los artículos 6°, 7° y 8° de la presente ley deberá interpretarse de un modo compatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que dispone la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias, titulares del dominio originario de los mismos según el artículo 124 de la Constitución Nacional, de un modo que atienda a las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.

Sra. Presidente (Villarruel).- En consecuencia, propongo que se vote el artículo 1° en conformidad con los cambios propuestos, por medios electrónicos.

Se vota.

-Se practica la votación por medios electrónicos.

-Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos 40, negativos 31 y 1 abstención.

-El resultado de la votación surge del Acta N° 4.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobado el artículo 1°.

Corresponde, entonces, se someta a votación el artículo 2°.

Por Secretaría se va a dar lectura de los cambios propuestos en el artículo 2°.

Sr. Secretario (Giustinian).- Artículo 2°.- Sustitúyase el artículo 3° de la Ley N° 26.639 por el siguiente:

“Artículo 3° - *Inventario*. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán los glaciares y las geoformas periglaciales existentes en el territorio nacional que actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, funciones hídricas a las que se hace referencia en el artículo 1°, con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.

El Inventario será de ineludible consulta y consideración por parte de las autoridades competentes, sin que ello implique desmedro de las atribuciones contempladas por los artículos 6°, 7° y 8° de la presente ley”.

Sra. Presidente (Villarruel).- En consecuencia, propongo que se vote el artículo 2° en conformidad con los cambios propuestos, por medios electrónicos.

Se vota.

-Se practica la votación por medios electrónicos.

-Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos 40, negativos 31 y 1 abstención.

[-El resultado de la votación surge del Acta N° 5.](#)

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobado el artículo 2°.

Corresponde que se someta a votación el artículo 3°.

Por Secretaría se va a dar lectura de los cambios propuestos en el artículo 3°.

Sr. Secretario (Giustinian).- Artículo 3°.- Incorpórese como artículo 3° *bis* a la Ley N° 26.639 el siguiente:

“Artículo 3° *bis* - *Principio precautorio*. En virtud del principio precautorio, todos los glaciares y geoformas periglaciales que se encuentren incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares serán considerados como parte del objeto protegido de la presente ley hasta tanto la autoridad competente verifique la inexistencia de las funciones hídricas mencionadas en el primer párrafo del artículo 1°.

A partir del momento en que la autoridad competente constate, sobre la base de estudios técnico-científicos, que un glaciar o geoforma periglacial incluida en el Inventario Nacional de Glaciares no cumple con las funciones previstas en el primer párrafo del artículo 1°, se considerará que el glaciar o la geoforma periglacial en cuestión no está alcanzada por las previsiones de la presente ley, sin perjuicio de la protección general que le corresponda con arreglo a la Ley General del Ambiente N° 25.675 y demás normas aplicables”.

Sra. Presidente (Villarruel).- En consecuencia, propongo que se vote el artículo 3° en conformidad con los cambios propuestos.

Se vota.

-Se practica la votación por medios electrónicos.

-Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos 40, negativos 31 y 1 abstención.

[-El resultado de la votación surge del Acta N° 6.](#)

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobado el artículo 3°.

Por secretaría se va a dar lectura de los cambios propuestos en el artículo 4°.

Sr. Secretario (Giustinian).- Artículo 4°. - Sustitúyase el artículo 5° de la Ley N° 26.639 por el siguiente:

“Artículo 5° - *Realización del Inventario*. El inventario y monitoreo del estado de los glaciares y de las geoformas periglaciales será realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley.

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del inventario.

La autoridad competente que detectare en su territorio un glaciar o geoforma periglacial que cumpla con alguna de las funciones hídricas previstas en el primer párrafo del artículo 1° y que no estuviera incluida en el Inventario Nacional de Glaciares, le notificará dicha circunstancia al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) a fin de que lo incorpore en el Inventario.

Cuando la autoridad competente constate, sobre la base de estudios técnico-científicos, que un glaciar o geoforma periglacial incluida en el Inventario Nacional de Glaciares no cumple con las funciones hídricas a las que se hace referencia en el primer párrafo del artículo 1°, deberá notificar dicha circunstancia al mencionado Instituto, quien deberá eliminarlo del Inventario Nacional de Glaciares. La omisión de hacerlo por parte del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) no afectará la validez de la autorización otorgada por la autoridad competente de la jurisdicción respectiva en los términos del artículo 7° de la presente ley”.

Sra. Presidente (Villarruel).- En consecuencia, propongo que se vote el artículo 4° en conformidad con los cambios propuestos.

Se vota.

-Se practica la votación por medios electrónicos.

-Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Senador Goerling Lara: su voto, por favor.

-Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos 40, negativos 31 y 1 abstención.

-El resultado de la votación surge del Acta N° 7.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobado el artículo 4°.

Corresponde se someta a votación el artículo 5°.

Por Secretaría se va a dar lectura de los cambios propuestos en el artículo 5°.

Sr. Secretario (Giustinian).- Artículo 5°. - Sustitúyase el artículo 6° de la Ley N° 26.639 por el siguiente:

“Artículo 6° - *Actividades prohibidas.* En los glaciares y en el ambiente periglacial identificados por la autoridad competente de la jurisdicción respectiva conforme a lo dispuesto por el apartado 1) del artículo 8°, quedan prohibidas las actividades que puedan alterar de modo relevante, en los términos del artículo 27 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, su condición natural o las funciones hídricas señaladas por el artículo 1°, incluyendo las que impliquen su destrucción o traslado, o interfieran en su avance, en particular las siguientes:

a) la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen;

b) la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para investigación científica y las prevenciones de riesgos;

c) la exploración y explotación minera e hidrocarburífera; y

d) la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.

La autoridad competente de la jurisdicción respectiva según el artículo 8° tendrá a su cargo determinar, mediante la correspondiente evaluación de impacto ambiental, qué actividades proyectadas implican una alteración relevante en los términos del presente artículo y, como consecuencia, no pueden ser autorizadas”.

Sra. Presidente (Villarruel).- En consecuencia, propongo que se vote el artículo 5° en conformidad con los cambios propuestos.

Se vota.

-Se practica la votación por medios electrónicos.

-Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos 40, negativos 31 y 1 abstención.

-El resultado de la votación surge del Acta N° 8.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobado el artículo 5°.

Corresponde se someta a votación el artículo 6°.

Por Secretaría se va a dar lectura de los cambios propuestos en el artículo 6°.

Sr. Secretario (Giustinian).- Artículo 6°. - Sustitúyase el artículo 7° de la Ley N° 26.639 por el siguiente:

“Artículo 7° - *Evaluaciones ambientales*. Todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente. Cuando, a criterio de la autoridad con competencia ambiental de la jurisdicción respectiva, la escala y grado de intervención lo justifique, se llevará también a cabo una evaluación ambiental estratégica.

Las evaluaciones deberán garantizar una instancia de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido por los artículos 19, 20 y 21 de la Ley General del Ambiente N° 25.675.

Se exceptúa de la exigencia del procedimiento de evaluación de impacto ambiental a las siguientes actividades:

- a) de rescate derivado de emergencias;
- b) científicas, realizadas a pie o sobre esquíes, con eventual toma de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglacial; y
- c) deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturben el ambiente”.

Sra. Presidente (Villarruel).- En consecuencia, propongo que se vote el artículo 6° en conformidad con los cambios propuestos.

Se vota.

-Se practica la votación por medios electrónicos.

-Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Senador Salino...

-Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos 40, negativos 31 y 1 abstención.

[-El resultado de la votación surge del Acta N° 9.](#)

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobado el artículo 6°.

Corresponde se sometan a votación los artículos 7° y 8°.

Por Secretaría se va a dar lectura de los cambios propuestos en el artículo 7°.

Sr. Secretario (Giustinian).- Artículo 7°. - Sustitúyase el artículo 8° de la Ley N° 26.639 por el siguiente:

“Artículo 8° - *Autoridades competentes*. A los efectos de la presente ley, será autoridad competente aquella que determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley N° 22.351, será autoridad competente la Administración de Parques Nacionales.

La autoridad con competencia ambiental de la jurisdicción correspondiente:

1) identificará basándose en estudios técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglacial ubicados en su territorio que cumplan con alguna de las funciones hídricas previstas en el artículo 1°, es decir, actúen como

reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; y

2) notificará al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) la información que obtenga sobre los glaciares y las geoformas periglaciales existentes en su respectiva jurisdicción, a fin de que este último actualice el Inventario Nacional de Glaciares”.

Artículo 8°. - Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Sra. Presidente (Villarruel).- En consecuencia, propongo que se voten el artículo 7° en conformidad con los cambios propuestos, y el artículo 8°, de forma.

Se vota.

-Se practica la votación por medios electrónicos.

-Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos 40, negativos 31 y 1 abstención.

[-El resultado de la votación surge del Acta N° 10.](#)

Sra. Presidente (Villarruel).- Resultando aprobado, en general y en particular, el Orden del Día N° 700/25, sobre Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

[-La sanción se publica en la web del Senado como "Texto definitivo" con acceso por el respectivo número de expediente.](#)

Sra. Presidente (Villarruel).-Se solicita el asentimiento del Cuerpo a fin de facultar a la Dirección General de Secretaría, que depende de la Secretaría Parlamentaria de esta Honorable Cámara, a realizar, según las pautas de estilo, las correcciones y demás adecuaciones de forma que considere pertinentes para la comunicación del proyecto de ley sancionado por este Cuerpo.

-Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Queda aprobado.

No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

-Son las 21:08.

Pablo A. Volpe

DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

10

APÉNDICE

I

CONVOCATORIA

Nota de Senadores

Senado de la Nación

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de febrero de 2026

Señora
Presidente del H. Senado de la Nación
Dra. Victoria Eugenia Villarruel

Por medio de la presente, los jefes de bloque que suscribimos, solicitamos a Ud. que en la convocatoria a las sesiones especiales para los días **26 y 27 de febrero** del corriente año, se trate el siguiente temario;

El objeto de la convocatoria **para el día 26 de febrero**, es considerar los siguientes asuntos comprendidos, en el siguiente orden.

- Acuerdo UE – Mercosur (C.D. 34-2025)
- Pliego de Fernando Iglesias (PE 175-2025)
- Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial - Ley N° 26.639. (Msje. 36/2025, Exp. Senadores PE 161-2025).

El objeto de la convocatoria **para el día 27 de febrero**, es considerar los siguientes asuntos comprendidos, en el siguiente orden.

- Proyecto de Ley de Modernización Laboral (P.E. 159-2025)
- Proyecto Régimen Penal Juvenil (C.D. 33-2025)

Saludamos a Ud. cordialmente

Dra. Patricia Bullrich
Presidente del Bloque LLA

Senador Nacional
Eduardo A. Vischi
Presidente Bloque UCR

AVILA

ABALLA

Decreto de la Presidencia del Honorable Senado

"2026 - Año del 120 Aniversario del Palacio Legislativo"

*Presidencia
del
Senado de la Nación*

DPP-12/26

Buenos Aires, 24 de febrero de 2026

VISTO:

la comunicación cursada por diversos senadores solicitando la realización de una Sesión Pública Especial registrada bajo el Expediente S-2188/25; y

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 17, 19, 20, 32 y concordantes del Reglamento de este H. Senado, establecen el marco para la citación de las Sesiones Públicas Especiales.

Que, por tanto, el presente se encuadra en las disposiciones reglamentarias en vigencia;

POR ELLO:

LA PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA NACIÓN,

D E C R E T A:

Artículo 1°- Por Secretaría cítese a las señoras y señores Senadores a Sesión Pública Especial, para el día jueves 26 de febrero del corriente, a las 11.00 horas, a efectos de considerar los siguientes temas:

- OD 703/25: Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión que aprueba el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Unión Europea (UE), celebrado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay (CD-34/25).



Victor Manuel
[Signature]

Senado de la Nación

- OD 704/25: Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Fernando Adolfo Iglesias (PE-175/25).
- OD 700/25: Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica la ley 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (PE-161/25).

Artículo 2°- Comuníquese.



Victorie Villaseca

[Signature]

Acta N° 3

Proyecto: OD 700/25 - GLACIARES

Descripción: SE VOTA EN GENERAL

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 26/02/2026 20:51:45

Acta : 3

Mayoría: MAS 1/2

VOTOS EMITIDOS

Miembros del cuerpo: 72

Votación: NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 72	Ausentes: 0	AMN: 36
---------------	-------------	---------



Afirmativos:	40
Negativos:	31
Abstenciones:	1
Resultado:	AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Nombre Completo	Voto
Abad, Maximiliano	NO	Juri, Mariana	SI
Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Kirchner, Alicia Margarita Antonia	NO
Almeida, Romina María	SI	Kroneberger, Daniel Ricardo	NO
Alvarez Río, Carmen Silvia	SI	Lewandowski, Marcelo Néstor	NO
Andrada, Guillermo Eduardo	SI	Linares, Carlos Alberto	NO
Arce, Carlos Omar	SI	López, Cándida Cristina	NO
Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	López, María Florencia	NO
Atauche, Ezequiel	SI	Losada, Carolina	SI
Ávila, Beatriz Luisa	SI	Manzur, Juan Luis	NO
Bahl, Adán Humberto	NO	Marks, Ana Inés	NO
Bedia, Vilma Facunda	SI	Marquez, Nadia Judith	SI
Benegas Lynch, Joaquín Alberto	SI	Mayans, José Miguel Ángel	NO
Bensusán, Daniel Pablo	NO	Mendoza, Sandra Mariela	SI
Bullrich, Patricia	SI	Moisés, María Carolina	SI
Capitanich, Jorge Milton	NO	Monte de Oca, Belén	SI
Carambia, José María	NO	Monteverde, Agustín Anibal	SI
Cervi, Mario Pablo	SI	Moreno, Elia Esther Del Carmen	NO
Corpacci, Lucia Benigna	SI	Neder, José Emilio	NO
Corroza, Julieta	ABS.	Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI
Coto, Agustín	SI	Orozco, María Emilia	SI
Cristina, Andrea Marcela	NO	Pagotto, Juan Carlos	SI
De Pedro, Eduardo Enrique	NO	Paoltroni, Francisco Manuel	SI
Di Tullio, Juliana	NO	Recalde, Mariano	NO
Espínola, Carlos Mauricio	SI	Rejal, Jesús Fernando	NO
Fama, Flavio Sergio	SI	Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI
Fernández Sagasti, Anabel	NO	Royón, Flavia	SI
Fullone, Enzo Paolo	SI	Salino, Fernando Aldo	NO
Gadano, Natalia Elena	NO	Schneider, Silvana Lorena	SI
Galarretto, Eduardo Horacio	SI	Soria, Martín Ignacio	NO
Giménez Navarro, María Celeste	NO	Suárez, Rodolfo Alejandro	SI
Godoy, Juan Cruz	SI	Terenzi, Edith Elizabeth	NO
Goerling Lara, Enrique Martín	SI	Uñac, Sergio Mauricio	SI
González, María Teresa Margarita	NO	Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI
Guzmán Coraita, Gonzalo	SI	Vigo, Alejandra María	NO
Huala, María Victoria	NO	Vischi, Eduardo Alejandro	SI
Juez, Luis Alfredo	SI	Zamora, Gerardo	NO

Observaciones:

Acta N° 4

Proyecto: OD 700/25 - ART. 1°

Descripción: SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 26/02/2026 20:54:20

Acta : 4

Mayoría: MAS 1/2

VOTOS EMITIDOS

Miembros del cuerpo: 72

Votación: NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 72

Ausentes: 0

AMN: 36



Afirmativos:	40
Negativos:	31
Abstenciones:	1
Resultado:	AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Nombre Completo	Voto
Abad, Maximiliano	NO	Juri, Mariana	SI
Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Kirchner, Alicia Margarita Antonia	NO
Almeida, Romina María	SI	Kroneberger, Daniel Ricardo	NO
Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	Lewandowski, Marcelo Néstor	NO
Andrada, Guillermo Eduardo	SI	Linares, Carlos Alberto	NO
Arce, Carlos Omar	SI	López, Cándida Cristina	NO
Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	López, María Florencia	NO
Atauche, Ezequiel	SI	Losada, Carolina	SI
Ávila, Beatriz Luisa	SI	Manzur, Juan Luis	NO
Bahl, Adán Humberto	NO	Marks, Ana Inés	NO
Bedia, Vilma Facunda	SI	Marquez, Nadia Judith	SI
Benegas Lynch, Joaquín Alberto	SI	Mayans, José Miguel Ángel	NO
Bensusán, Daniel Pablo	NO	Mendoza, Sandra Mariela	SI
Bullrich, Patricia	SI	Moisés, María Carolina	SI
Capitanich, Jorge Milton	NO	Monte de Oca, Belén	SI
Carambia, José María	NO	Monteverde, Agustín Aníbal	SI
Cervi, Mario Pablo	SI	Moreno, Elia Esther Del Carmen	NO
Corpacci, Lucia Benigna	SI	Neder, José Emilio	NO
Corroza, Julieta	ABS.	Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI
Coto, Agustín	SI	Orozco, María Emilia	SI
Cristina, Andrea Marcela	NO	Pagotto, Juan Carlos	SI
De Pedro, Eduardo Enrique	NO	Paoltroni, Francisco Manuel	SI
Di Tullio, Juliana	NO	Recalde, Mariano	NO
Espinola, Carlos Mauricio	SI	Rejal, Jesús Fernando	NO
Fama, Flavio Sergio	SI	Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI
Fernández Sagasti, Anabel	NO	Royón, Flavia	SI
Fullone, Enzo Paolo	SI	Salino, Fernando Aldo	NO
Gadano, Natalia Elena	NO	Schneider, Silvana Lorena	SI
Galarretto, Eduardo Horacio	SI	Soria, Martín Ignacio	NO
Giménez Navarro, María Celeste	NO	Suárez, Rodolfo Alejandro	SI
Godoy, Juan Cruz	SI	Terenzi, Edith Elizabeth	NO
Goerling Lara, Enrique Martín	SI	Uñac, Sergio Mauricio	SI
González, María Teresa Margarita	NO	Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI
Guzmán Coraita, Gonzalo	SI	Vigo, Alejandra María	NO
Huala, María Victoria	NO	Vischi, Eduardo Alejandro	SI
Juez, Luis Alfredo	SI	Zamora, Gerardo	NO

Observaciones:

Acta N° 5

Proyecto: OD 700/25 - ART. 2º

Descripción: SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 26/02/2026 20:56:02

Acta : 5

Mayoría: MAS 1/2

VOTOS EMITIDOS

Miembros del cuerpo: 72

Votación: NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 72	Ausentes: 0	AMN: 36
---------------	-------------	---------



Afirmativos:	40
Negativos:	31
Abstenciones:	1
Resultado:	AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Nombre Completo	Voto
Abad, Maximiliano	NO	Juri, Mariana	SI
Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Kirchner, Alicia Margarita Antonia	NO
Almeida, Romina María	SI	Kroneberger, Daniel Ricardo	NO
Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	Lewandowski, Marcelo Néstor	NO
Andrada, Guillermo Eduardo	SI	Linares, Carlos Alberto	NO
Arce, Carlos Omar	SI	López, Cándida Cristina	NO
Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	López, María Florencia	NO
Atauche, Ezequiel	SI	Losada, Carolina	SI
Ávila, Beatriz Luisa	SI	Manzur, Juan Luis	NO
Bahl, Adán Humberto	NO	Marks, Ana Inés	NO
Bedia, Vilma Facunda	SI	Marquez, Nadia Judith	SI
Benegas Lynch, Joaquín Alberto	SI	Mayans, José Miguel Ángel	NO
Bensusán, Daniel Pablo	NO	Mendoza, Sandra Mariela	SI
Bullrich, Patricia	SI	Moisés, María Carolina	SI
Capitanich, Jorge Milton	NO	Monte de Oca, Belén	SI
Carambia, José María	NO	Monteverde, Agustín Anibal	SI
Cervi, Mario Pablo	SI	Moreno, Elia Esther Del Carmen	NO
Corpacci, Lucia Benigna	SI	Neder, José Emilio	NO
Corroza, Julieta	ABS.	Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI
Coto, Agustín	SI	Orozco, María Emilia	SI
Cristina, Andrea Marcela	NO	Pagotto, Juan Carlos	SI
De Pedro, Eduardo Enrique	NO	Paoltroni, Francisco Manuel	SI
Di Tullio, Juliana	NO	Recalde, Mariano	NO
Espínola, Carlos Mauricio	SI	Rejal, Jesús Fernando	NO
Fama, Flavio Sergio	SI	Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI
Fernández Sagasti, Anabel	NO	Royón, Flavia	SI
Fullone, Enzo Paolo	SI	Salino, Fernando Aldo	NO
Gadano, Natalia Elena	NO	Schneider, Silvana Lorena	SI
Galarretto, Eduardo Horacio	SI	Soria, Martín Ignacio	NO
Giménez Navarro, María Celeste	NO	Suárez, Rodolfo Alejandro	SI
Godoy, Juan Cruz	SI	Terenzi, Edith Elizabeth	NO
Goerling Lara, Enrique Martín	SI	Uñac, Sergio Mauricio	SI
González, María Teresa Margarita	NO	Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI
Guzmán Coraita, Gonzalo	SI	Vigo, Alejandra María	NO
Huala, María Victoria	NO	Vischi, Eduardo Alejandro	SI
Juez, Luis Alfredo	SI	Zamora, Gerardo	NO

Observaciones:

Acta Nº 6

Proyecto: OD 700/25 - ART. 3º

Descripción: SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 26/02/2026 20:57:56

Acta : 6

Mayoría: MAS 1/2 VOTOS EMITIDOS

Miembros del cuerpo: 72 Votación: NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 72	Ausentes: 0	AMN: 36
---------------	-------------	---------



Afirmativos:	40
Negativos:	31
Abstenciones:	1
Resultado:	AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Nombre Completo	Voto
Abad, Maximiliano	NO	Juri, Mariana	SI
Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Kirchner, Alicia Margarita Antonia	NO
Almeida, Romina María	SI	Kroneberger, Daniel Ricardo	NO
Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	Lewandowski, Marcelo Néstor	NO
Andrada, Guillermo Eduardo	SI	Linares, Carlos Alberto	NO
Arce, Carlos Omar	SI	López, Cándida Cristina	NO
Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	López, María Florencia	NO
Atauche, Ezequiel	SI	Losada, Carolina	SI
Ávila, Beatriz Luisa	SI	Manzur, Juan Luis	NO
Bahl, Adán Humberto	NO	Marks, Ana Inés	NO
Bedia, Vilma Facunda	SI	Marquez, Nadia Judith	SI
Benegas Lynch, Joaquín Alberto	SI	Mayans, José Miguel Ángel	NO
Bensusán, Daniel Pablo	NO	Mendoza, Sandra Mariela	SI
Bullrich, Patricia	SI	Moisés, María Carolina	SI
Capitanich, Jorge Milton	NO	Monte de Oca, Belén	SI
Carambia, José María	NO	Monteverde, Agustín Anibal	SI
Cervi, Mario Pablo	SI	Moreno, Elia Esther Del Carmen	NO
Corpacci, Lucia Benigna	SI	Neder, José Emilio	NO
Corroza, Julieta	ABS.	Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI
Coto, Agustín	SI	Orozco, María Emilia	SI
Cristina, Andrea Marcela	NO	Pagotto, Juan Carlos	SI
De Pedro, Eduardo Enrique	NO	Paoltroni, Francisco Manuel	SI
Di Tullio, Juliana	NO	Recalde, Mariano	NO
Espinola, Carlos Mauricio	SI	Rejal, Jesús Fernando	NO
Fama, Flavio Sergio	SI	Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI
Fernández Sagasti, Anabel	NO	Royón, Flavia	SI
Fullone, Enzo Paolo	SI	Salino, Fernando Aldo	NO
Gadano, Natalia Elena	NO	Schneider, Silvana Lorena	SI
Galaretto, Eduardo Horacio	SI	Soria, Martín Ignacio	NO
Giménez Navarro, María Celeste	NO	Suárez, Rodolfo Alejandro	SI
Godoy, Juan Cruz	SI	Terenzi, Edith Elizabeth	NO
Goerling Lara, Enrique Martín	SI	Uñac, Sergio Mauricio	SI
González, María Teresa Margarita	NO	Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI
Guzmán Coraita, Gonzalo	SI	Vigo, Alejandra María	NO
Huala, María Victoria	NO	Vischi, Eduardo Alejandro	SI
Juez, Luis Alfredo	SI	Zamora, Gerardo	NO

Observaciones:

Acta N° 7

Proyecto: OD 700/25 - ART. 4°

Descripción: SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 26/02/2026 21:00:19

Acta : 7

Mayoría: MAS 1/2

VOTOS EMITIDOS

Miembros del cuerpo: 72

Votación: NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 72	Ausentes: 0	AMN: 36
---------------	-------------	---------



Afirmativos:	40
Negativos:	31
Abstenciones:	1
Resultado:	AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Nombre Completo	Voto
Abad, Maximiliano	NO	Juri, Mariana	SI
Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Kirchner, Alicia Margarita Antonia	NO
Almeida, Romina María	SI	Kroneberger, Daniel Ricardo	NO
Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	Lewandowski, Marcelo Néstor	NO
Andrada, Guillermo Eduardo	SI	Linares, Carlos Alberto	NO
Arce, Carlos Omar	SI	López, Cándida Cristina	NO
Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	López, María Florencia	NO
Atauche, Ezequiel	SI	Losada, Carolina	SI
Ávila, Beatriz Luisa	SI	Manzur, Juan Luis	NO
Bahl, Adán Humberto	NO	Marks, Ana Inés	NO
Bedia, Vilma Facunda	SI	Marquez, Nadia Judith	SI
Benegas Lynch, Joaquín Alberto	SI	Mayans, José Miguel Ángel	NO
Bensusán, Daniel Pablo	NO	Mendoza, Sandra Mariela	SI
Bullrich, Patricia	SI	Moisés, María Carolina	SI
Capitanich, Jorge Milton	NO	Monte de Oca, Belén	SI
Carambia, José María	NO	Monteverde, Agustín Aníbal	SI
Cervi, Mario Pablo	SI	Moreno, Elia Esther Del Carmen	NO
Corpacci, Lucia Benigna	SI	Neder, José Emilio	NO
Corroza, Julieta	ABS.	Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI
Coto, Agustín	SI	Orozco, María Emilia	SI
Cristina, Andrea Marcela	NO	Pagotto, Juan Carlos	SI
De Pedro, Eduardo Enrique	NO	Paoltroni, Francisco Manuel	SI
Di Tullio, Juliana	NO	Recalde, Mariano	NO
Espinola, Carlos Mauricio	SI	Rejal, Jesús Fernando	NO
Fama, Flavio Sergio	SI	Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI
Fernández Sagasti, Anabel	NO	Royón, Flavia	SI
Fullone, Enzo Paolo	SI	Salino, Fernando Aldo	NO
Gadano, Natalia Elena	NO	Schneider, Silvana Lorena	SI
Galarretto, Eduardo Horacio	SI	Soria, Martín Ignacio	NO
Giménez Navarro, María Celeste	NO	Suárez, Rodolfo Alejandro	SI
Godoy, Juan Cruz	SI	Terenzi, Edith Elizabeth	NO
Goerling Lara, Enrique Martín	SI	Uñac, Sergio Mauricio	SI
González, María Teresa Margarita	NO	Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI
Guzmán Coraita, Gonzalo	SI	Vigo, Alejandra María	NO
Huala, María Victoria	NO	Vischi, Eduardo Alejandro	SI
Juez, Luis Alfredo	SI	Zamora, Gerardo	NO

Observaciones:

Acta N° 8

Proyecto: OD 700/25 - ART. 5º

Descripción: SE VOTA EN PARTICULAR



Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 26/02/2026 21:02:36

Acta : 8

Mayoría: MAS 1/2

VOTOS EMITIDOS

Miembros del cuerpo: 72

Votación:

NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 72	Ausentes: 0	AMN: 36
---------------	-------------	---------

Afirmativos:	40
Negativos:	31
Abstenciones:	1
Resultado:	AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Nombre Completo	Voto
Abad, Maximiliano	NO	Juri, Mariana	SI
Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Kirchner, Alicia Margarita Antonia	NO
Almeida, Romina María	SI	Kroneberger, Daniel Ricardo	NO
Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	Lewandowski, Marcelo Néstor	NO
Andrada, Guillermo Eduardo	SI	Linares, Carlos Alberto	NO
Arce, Carlos Omar	SI	López, Cándida Cristina	NO
Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	López, María Florencia	NO
Atauche, Ezequiel	SI	Losada, Carolina	SI
Ávila, Beatriz Luisa	SI	Manzur, Juan Luis	NO
Bahl, Adán Humberto	NO	Marks, Ana Inés	NO
Bedia, Vilma Facunda	SI	Marquez, Nadia Judith	SI
Benegas Lynch, Joaquín Alberto	SI	Mayans, José Miguel Ángel	NO
Bensusán, Daniel Pablo	NO	Mendoza, Sandra Mariela	SI
Bullrich, Patricia	SI	Moisés, María Carolina	SI
Capitanich, Jorge Milton	NO	Monte de Oca, Belén	SI
Carambia, José María	NO	Monteverde, Agustín Anibal	SI
Cervi, Mario Pablo	SI	Moreno, Elia Esther Del Carmen	NO
Corpacci, Lucia Benigna	SI	Neder, José Emilio	NO
Corroza, Julieta	ABS.	Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI
Coto, Agustín	SI	Orozco, María Emilia	SI
Cristina, Andrea Marcela	NO	Pagotto, Juan Carlos	SI
De Pedro, Eduardo Enrique	NO	Paoltroni, Francisco Manuel	SI
Di Tullio, Juliana	NO	Recalde, Mariano	NO
Espínola, Carlos Mauricio	SI	Rejal, Jesús Fernando	NO
Fama, Flavio Sergio	SI	Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI
Fernández Sagasti, Anabel	NO	Royón, Flavia	SI
Fullone, Enzo Paolo	SI	Salino, Fernando Aldo	NO
Gadano, Natalia Elena	NO	Schneider, Silvana Lorena	SI
Galaretto, Eduardo Horacio	SI	Soria, Martín Ignacio	NO
Giménez Navarro, María Celeste	NO	Suárez, Rodolfo Alejandro	SI
Godoy, Juan Cruz	SI	Terenzi, Edith Elizabeth	NO
Goerling Lara, Enrique Martín	SI	Uñac, Sergio Mauricio	SI
González, María Teresa Margarita	NO	Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI
Guzmán Coraita, Gonzalo	SI	Vigo, Alejandra María	NO
Huala, María Victoria	NO	Vischi, Eduardo Alejandro	SI
Juez, Luis Alfredo	SI	Zamora, Gerardo	NO

Observaciones:

Acta N° 9

Proyecto: OD 700/25 - ART. 6°

Descripción: SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 26/02/2026 21:04:39

Acta : 9

Mayoría: MAS 1/2 VOTOS EMITIDOS

Miembros del cuerpo: 72 Votación: NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 72	Ausentes: 0	AMN: 36
---------------	-------------	---------



Afirmativos:	40
Negativos:	31
Abstenciones:	1
Resultado:	AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Nombre Completo	Voto
Abad, Maximiliano	NO	Juri, Mariana	SI
Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Kirchner, Alicia Margarita Antonia	NO
Almeida, Romina María	SI	Kroneberger, Daniel Ricardo	NO
Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	Lewandowski, Marcelo Néstor	NO
Andrada, Guillermo Eduardo	SI	Linares, Carlos Alberto	NO
Arce, Carlos Omar	SI	López, Cándida Cristina	NO
Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	López, María Florencia	NO
Atauche, Ezequiel	SI	Losada, Carolina	SI
Ávila, Beatriz Luisa	SI	Manzur, Juan Luis	NO
Bahl, Adán Humberto	NO	Marks, Ana Inés	NO
Bedia, Vilma Facunda	SI	Marquez, Nadia Judith	SI
Benegas Lynch, Joaquín Alberto	SI	Mayans, José Miguel Ángel	NO
Bensusán, Daniel Pablo	NO	Mendoza, Sandra Mariela	SI
Bullrich, Patricia	SI	Moisés, María Carolina	SI
Capitanich, Jorge Milton	NO	Monte de Oca, Belén	SI
Carambia, José María	NO	Monteverde, Agustín Aníbal	SI
Cervi, Mario Pablo	SI	Moreno, Elia Esther Del Carmen	NO
Corpacci, Lucia Benigna	SI	Neder, José Emilio	NO
Corroza, Julieta	ABS.	Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI
Coto, Agustín	SI	Orozco, María Emilia	SI
Cristina, Andrea Marcela	NO	Pagotto, Juan Carlos	SI
De Pedro, Eduardo Enrique	NO	Paoltroni, Francisco Manuel	SI
Di Tullio, Juliana	NO	Recalde, Mariano	NO
Espínola, Carlos Mauricio	SI	Rejal, Jesús Fernando	NO
Fama, Flavio Sergio	SI	Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI
Fernández Sagasti, Anabel	NO	Royón, Flavia	SI
Fullone, Enzo Paolo	SI	Salino, Fernando Aldo	NO
Gadano, Natalia Elena	NO	Schneider, Silvana Lorena	SI
Galarretto, Eduardo Horacio	SI	Soria, Martín Ignacio	NO
Giménez Navarro, María Celeste	NO	Suárez, Rodolfo Alejandro	SI
Godoy, Juan Cruz	SI	Terenzi, Edith Elizabeth	NO
Goerling Lara, Enrique Martín	SI	Uñac, Sergio Mauricio	SI
González, María Teresa Margarita	NO	Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI
Guzmán Coraita, Gonzalo	SI	Vigo, Alejandra María	NO
Huala, María Victoria	NO	Vischi, Eduardo Alejandro	SI
Juez, Luis Alfredo	SI	Zamora, Gerardo	NO

Observaciones:

Acta N° 10

Proyecto: OD 700/25 - ARTS 7° Y 8°

Descripción: SE VOTA EN PARTICULAR



Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 26/02/2026 21:06:56

Acta : 10

Mayoría: MAS 1/2

VOTOS EMITIDOS

Miembros del cuerpo: 72

Votación:

NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 72	Ausentes: 0	AMN: 36
---------------	-------------	---------

Afirmativos:	40
Negativos:	31
Abstenciones:	1
Resultado:	AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Nombre Completo	Voto
Abad, Maximiliano	NO	Juri, Mariana	SI
Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Kirchner, Alicia Margarita Antonia	NO
Almeida, Romina María	SI	Kroneberger, Daniel Ricardo	NO
Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	Lewandowski, Marcelo Néstor	NO
Andrada, Guillermo Eduardo	SI	Linares, Carlos Alberto	NO
Arce, Carlos Omar	SI	López, Cándida Cristina	NO
Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	López, María Florencia	NO
Atauche, Ezequiel	SI	Losada, Carolina	SI
Ávila, Beatriz Luisa	SI	Manzur, Juan Luis	NO
Bahl, Adán Humberto	NO	Marks, Ana Inés	NO
Bedia, Vilma Facunda	SI	Marquez, Nadia Judith	SI
Benegas Lynch, Joaquín Alberto	SI	Mayans, José Miguel Ángel	NO
Bensusán, Daniel Pablo	NO	Mendoza, Sandra Mariela	SI
Bullrich, Patricia	SI	Moisés, María Carolina	SI
Capitanich, Jorge Milton	NO	Monte de Oca, Belén	SI
Carambia, José María	NO	Monteverde, Agustín Aníbal	SI
Cervi, Mario Pablo	SI	Moreno, Elia Esther Del Carmen	NO
Corpacci, Lucia Benigna	SI	Neder, José Emilio	NO
Corroza, Julieta	ABS.	Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI
Coto, Agustín	SI	Orozco, María Emilia	SI
Cristina, Andrea Marcela	NO	Pagotto, Juan Carlos	SI
De Pedro, Eduardo Enrique	NO	Paoltroni, Francisco Manuel	SI
Di Tullio, Juliana	NO	Recalde, Mariano	NO
Espinola, Carlos Mauricio	SI	Rejal, Jesús Fernando	NO
Fama, Flavio Sergio	SI	Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI
Fernández Sagasti, Anabel	NO	Royón, Flavia	SI
Fullone, Enzo Paolo	SI	Salino, Fernando Aldo	NO
Gadano, Natalia Elena	NO	Schneider, Silvana Lorena	SI
Galarretto, Eduardo Horacio	SI	Soria, Martín Ignacio	NO
Giménez Navarro, María Celeste	NO	Suárez, Rodolfo Alejandro	SI
Godoy, Juan Cruz	SI	Terenzi, Edith Elizabeth	NO
Goerling Lara, Enrique Martín	SI	Uñac, Sergio Mauricio	SI
González, María Teresa Margarita	NO	Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI
Guzmán Coraita, Gonzalo	SI	Vigo, Alejandra María	NO
Huala, María Victoria	NO	Vischi, Eduardo Alejandro	SI
Juez, Luis Alfredo	SI	Zamora, Gerardo	NO

Observaciones:

integre al interior profundo al comercio global. Pero hay algo aún más profundo en juego.

Durante años, Argentina expulsó talento. Miles de jóvenes emigraron en busca de seguridad, previsibilidad, oportunidades y futuro. No podemos resignarnos a exportar nuestro capital humano, nuestra creatividad y nuestra capacidad emprendedora.

El desarrollo no se mide solo en indicadores macroeconómicos. Se ve en un joven que decide quedarse, en una familia que puede proyectar su vida, en una pyme que se anima a crecer y en una comunidad que recupera la esperanza.

Sueño con un país donde irse sea una opción y no una necesidad. Un país al que valga la pena volver. Un país donde formar una familia, emprender e innovar sea posible.

Argentina tiene con qué. Tiene talento, recursos, cultura productiva y espíritu emprendedor.

Este nuevo escenario internacional brinda a la Argentina –y a Córdoba en particular– una oportunidad concreta para transformar sus capacidades en desarrollo.

Es el momento de integrarnos, producir y crecer.

Es el momento de volver a confiar en nuestro país.

Es el momento de hacer grande a la Argentina otra vez.

Gracias, señora presidente.

3

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA TERENCEZI

(OD. 700/25)

Señora presidente:

Hemos debatido ampliamente sobre la reforma de la Ley 26.639, Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, propuesta por el Poder Ejecutivo.

Me preocupan, específicamente, los efectos jurídicos concretos de esta reforma porque significa un evidente retroceso en los estándares de protección ambiental vigentes.

Estamos confrontando abiertamente con el artículo 41 de la Constitución Nacional, con jurisprudencia concreta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, obviamente, con la legislación ambiental que nos rige.

Coincido plenamente con la diputada Graciela Caamaño (MC) cuando manifiesta que “este no es un debate ideológico. Es una cuestión de constitucionalidad”.

Y, en ese marco, quiero compartir con este Cuerpo un informe cuya autoría es del doctor Franco Michi, abogado prestigioso de Rawson, la capital

de mi provincia. Doctor en Derecho, docente universitario en UNPSJB, UCES, USAL, UCEMA.

El doctor Michi analiza la constitucionalidad de la Ley 26.639, sancionada en el año 2010, formula objeciones de orden constitucional al proyecto de ley que propicia su modificación, y manifiesta expresamente que “el análisis se realiza desde una perspectiva estrictamente jurídico-constitucional, prescindiendo de valoraciones políticas o sectoriales, y atendiendo al bloque de constitucionalidad vigente, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia ambiental”.

Con respecto a la Ley de Glaciares como ejercicio legítimo del artículo 41 de la Constitución Nacional, el doctor Michi afirma que: “el artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y atribuye al Congreso de la Nación la facultad de dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, reservando a las provincias la potestad de complementarlas.

La Ley 26.639 se inscribe plenamente dentro de este diseño constitucional. Se trata de una ley de presupuestos mínimos, de carácter hiperespecial¹, destinada a asegurar un umbral uniforme de protección de bienes ambientales estratégicos –glaciares y ambiente periglacial– que cumplen funciones esenciales como reservas de agua dulce, reguladores hídricos y componentes críticos del equilibrio ecosistémico.

La fijación de prohibiciones generales respecto de determinadas actividades en tales ambientes no constituye un exceso legislativo, sino una técnica normativa propia del Derecho Ambiental, fundada en los principios de prevención y precaución consagrados en la Ley General del Ambiente (Ley 25.675).

En este marco, la ley no elimina la evaluación ambiental, sino que establece límites materiales previos allí donde el riesgo ambiental resulta incompatible con el estándar mínimo de protección exigido por la Constitución”.

Al referirse al federalismo ambiental, la armonización entre presupuestos mínimos y dominio originario provincial –artículo 124, Constitución Nacional–, Franco Michi dice que “uno de los principales argumentos invocados para cuestionar la Ley 26.639 –y retomado por el proyecto de modificación– es la supuesta afectación del dominio originario de los recursos naturales reconocido a las provincias por el artículo 124 de la Constitución Nacional².

Sin embargo, esta objeción ha sido expresamente descartada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Tribunal ha señalado de manera consistente que no existe contradicción entre los artículos 41 y 124, en tanto el primero establece una competencia federal para fijar presupuestos mínimos ambientales, mientras que el segundo reconoce el dominio provincial en un marco de competencias concurrentes.

¹ Véase Esain, J. A. (14-08-2019). *La Corte y la Ley de Glaciares bajo el escrutinio del control de complementariedad*. La Ley, 2019-D, 389. Thomson Reuters. TR LALEY AR/DOC/2280/2019.

² En su último párrafo (...) “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

La Corte ha desarrollado un modelo de federalismo ambiental de concertación, en el cual, la Nación fija los estándares mínimos de protección ambiental; las provincias conservan la gestión, administración y complementación normativa de los recursos dentro de sus jurisdicciones.

Es por ello que los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional deben interpretarse de forma armónica, de modo que el dominio originario provincial sobre los recursos naturales se ejerza conforme a los presupuestos mínimos de protección ambiental, en el marco de un federalismo ambiental de concertación.

En tal sentido, la Ley de Glaciares se inscribe en este modelo al identificar a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua y bienes ambientales colectivos, cuya protección exige coordinación interjurisdiccional y prevalece frente a intereses individuales, habilitando un diálogo federal orientado a la efectiva tutela del mandato constitucional.

En efecto, la Ley de Glaciares no sustituye ni vacía las competencias provinciales, sino que establece un piso de tutela ambiental uniforme, indispensable para evitar asimetrías regulatorias que comprometan bienes ambientales de relevancia interjurisdiccional y transgeneracional”.

Y con relación a la constitucionalidad resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, manifiesta expresamente que “La constitucionalidad de la Ley 26.639 ya ha sido objeto de control judicial pleno y definitivo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En los precedentes *Barrick*³ y *Cámara Minera de Jujuy*⁴ el Máximo Tribunal rechazó de manera unánime las acciones de nulidad e inconstitucionalidad promovidas contra la ley, tanto en lo referido al procedimiento legislativo como a su contenido sustantivo.

En tal sentido, la Corte afirmó la legitimidad del Congreso de la Nación para dictar la norma en su carácter de ley de presupuestos mínimos, su plena compatibilidad con el sistema federal y la prevalencia de los derechos ambientales de incidencia colectiva frente a intereses patrimoniales individuales cuando ambos se encuentran en situación de tensión.

En este punto, es menester resaltar la incorporación normativa del Código Civil y Comercial, el cual dispone los criterios para resolver las tensiones antedichas.

En tal sentido en el fallo *Barrick* la CSJN sostuvo:

[...] Dado que las previsiones de la Ley de Glaciares apuntan a proteger derechos de incidencia colectiva, tales como el ambiente, en tanto preservan el acceso al agua potable, los jueces deben ponderar que las personas físicas y jurídicas pueden ciertamente ser titulares de derechos subjetivos que integran el concepto constitucional de propiedad, pero también deben considerar que ese derecho individual debe ser armonizado con los derechos colectivos —arts. 14 y 240 del Código Civil y Comercial— para asegurar que

³ Corte Suprema de Justicia de la Nación. (2019, 4 de junio). *Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro c. Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad*. La Ley. Thomson Reuters. TR LALEY AR/JUR/14911/2019.

⁴ Corte Suprema de Justicia de la Nación. (2014, 30 de diciembre). *Cámara Minera de Jujuy y otra (Provincia de Jujuy) c. Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad*. La Ley. Thomson Reuters. TR LALEY AR/JUR/109380/2013.

el ejercicio de la industria lícita sea sustentable —arts. 1º, 2º y 4º de la Ley General del Ambiente, ley 25.675—“.

En efecto, la CSJN sostiene la constitucionalidad de la ley en los planteos realizados.

A raíz de estos fallos, se consolida una cosa juzgada constitucional fuerte, que impone un estándar de especial deferencia frente a intentos legislativos posteriores que, sin fundamentos constitucionales suficientes, procuren debilitar el nivel de protección ambiental validado por el Tribunal”.

El doctor Michi también aborda la cuestión de la participación pública y el acceso efectivo a la tutela ambiental en el marco del Acuerdo de Escazú: “La República Argentina es Estado Parte del Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

La Ley 26.639 se encuentra alineada con estos estándares, en tanto:

- 1) Refuerza la publicidad y sistematización de información ambiental mediante el Inventario Nacional de Glaciares;
- 2) Establece reglas claras y generales que brindan previsibilidad y transparencia;
- 3) Protege bienes ambientales cuya afectación tiene impacto colectivo y transfronterizo.

Si bien el proyecto de modificación invoca formalmente el Acuerdo de Escazú, lo hace para reintroducir márgenes amplios de discrecionalidad decisoria, trasladando definiciones sustantivas a instancias técnicas o administrativas fragmentadas, con riesgo de debilitamiento del control público y social exigido por el tratado.

El verdadero espíritu del artículo 7 del acuerdo de Escazú contempla la participación pública efectiva como un componente esencial de la toma de decisiones ambientales, imponiendo a los Estados la obligación de garantizar desde las etapas iniciales, con acceso oportuno, claro y comprensible a la información ambiental relevante.

Asimismo, exige que las autoridades consideren de manera efectiva las observaciones del público y fundamenten sus decisiones, prestando especial atención al público directamente afectado y a los grupos en situación de vulnerabilidad. La participación pública se configura, así como un requisito de legitimidad de las decisiones ambientales, y no como una mera formalidad”.

Cuando se refiere a las objeciones constitucionales al proyecto de modificación, sostiene: “El proyecto de ley actualmente en trámite presenta objeciones constitucionales de entidad. En primer lugar, desnaturaliza el concepto de presupuesto mínimo ambiental al convertirlo en un estándar flexible y negociable, debilitando su función de piso uniforme de protección.

En segundo término, fragmenta la tutela ambiental homogénea exigida por el artículo 41 de la Constitución Nacional y se aparta del modelo de federalismo ambiental de concertación delineado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Asimismo, introduce un serio riesgo de regresión normativa, en abierta tensión con principios estructurales de los derechos humanos –en particular, el principio de progresividad y no regresividad del sistema de tutela ambiental, *pro natura*– al reducir niveles de protección ya consolidados y validados judicialmente.

Por ello, estas modificaciones no pueden ser concebidas como meros ajustes técnicos, sino que implican un cambio estructural del régimen de protección ambiental, incompatible con el bloque de constitucionalidad ambiental actualmente vigente”.

Finalmente, concluye que “La Ley 26.639 constituye un ejercicio legítimo y constitucional de la potestad del Congreso de la Nación de dictar presupuestos mínimos de protección ambiental conforme al artículo 41 de la Constitución Nacional. Su validez ha sido expresamente confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se encuentra en plena consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, en particular con el Acuerdo de Escazú.

El proyecto de modificación actualmente en trámite presenta objeciones constitucionales sustanciales, en tanto debilita el estándar mínimo de protección ambiental, se aparta del modelo de federalismo ambiental de concertación y desconoce la doctrina consolidada del Máximo Tribunal.

En consecuencia, corresponde preservar la vigencia y aplicación integral de la Ley de Glaciares, conforme al bloque de constitucionalidad ambiental vigente y a los principios que rigen la tutela del ambiente en la República Argentina”.

En plena concordancia con la postura expuesta en este informe por el doctor Franco Michi, me tomo el atrevimiento de hacer propias sus apreciaciones y, en consecuencia, no voy a acompañar con mi voto la reforma propuesta por el oficialismo a la modificación de la Ley 26.639.

Muchas gracias, señora presidente.

4

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR DE PEDRO

(OD. 703/25)

Señora presidenta:

La discusión sobre un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no es nueva, lleva más de veinticinco años. Todos sabemos que se trata de dos bloques económicos que pueden beneficiarse de fortalecer su relación económica, comercial, científica y tecnológica.

El propio presidente Lula da Silva, al impulsar nuevamente este acuerdo en Brasil, señaló que la relación entre el Mercosur y la Unión Europea puede abrir oportunidades para el desarrollo, la inversión y la cooperación entre dos regiones que comparten valores democráticos.

Nosotros compartimos esa aspiración, que resume también los objetivos a los que apuntamos con la idea de un acuerdo entre ambas regiones. Integrarse al mundo, ampliar mercados y promover la cooperación son

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR DE PEDRO

(OD. 700/25)

Señora presidenta:

Estamos discutiendo una modificación a la Ley de Glaciares que, en los hechos, implica debilitar una de las normas más importantes que tiene la Argentina para cuidar el ambiente y, sobre todo, para cuidar un recurso esencial y estratégico como es el agua.

Los glaciares no son solamente un paisaje de la cordillera. Son reservas naturales de agua dulce. Son los que regulan el caudal de los ríos que atraviesan nuestras provincias y que sostienen la vida cotidiana, la producción agropecuaria, el desarrollo de muchas economías regionales y el abastecimiento de agua potable para millones de familias argentinas.

En nuestro país existen casi diecisiete mil cuerpos glaciares que ocupan más de 8.400 kilómetros cuadrados a lo largo de toda la cordillera, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Doce provincias tienen glaciares en su territorio y más de siete millones de personas viven en cuencas que dependen de esos sistemas para el abastecimiento de agua.

Por eso la Ley de Glaciares, sancionada en 2010, estableció algo muy simple: proteger esas reservas estratégicas de agua dulce frente a actividades que puedan dañarlas. Esa ley no surgió de un capricho ni de una discusión ideológica. Fue el resultado de un debate profundo en este Congreso y fue defendida después en la Justicia cuando algunas empresas mineras intentaron declararla inconstitucional. La Corte Suprema terminó confirmando por unanimidad que la ley es plenamente válida y que el Congreso tiene la responsabilidad de fijar presupuestos mínimos para proteger el ambiente en todo el país.

Y quiero detenerme un segundo en esto, porque a veces se instala una falsa discusión. Se dice que esta ley frena el desarrollo o impide la actividad minera. Eso no es cierto.

Los glaciares ocupan menos del 1 por ciento de la superficie de la cordillera. Es decir que el 99 por ciento del territorio cordillerano está disponible para desarrollar actividades productivas, incluida la minería. Lo único que plantea la ley es algo bastante razonable: que ese 1 por ciento que concentra las reservas estratégicas de agua no se toque. La razón es obvia: no se puede vivir sin agua.

Este proyecto que impulsa el Gobierno Nacional intenta cambiar ese criterio. Modifica el sentido de la ley vigente y reduce los niveles de protección ambiental, elimina el criterio científico para que ahora se pueda determinar de forma discrecional qué glaciares se protegen y cuáles no, relativiza el inventario científico que realizó el IANIGLA. El resultado es la desarticulación del sistema de protección de los glaciares y el agua.

Y esto ocurre en un contexto que debería llevarnos exactamente en la dirección contraria. Hoy sabemos que los glaciares están retrocediendo en todo el mundo producto del cambio climático. En Argentina, distintos estudios muestran que en varias regiones se ha perdido más del 40 por

ciento de la superficie glaciaria en las últimas tres décadas y que estos procesos se están acelerando con el aumento de la temperatura global.

Esto tiene consecuencias concretas. Menos hielo significa menos agua disponible en los momentos del año en que más se necesita, especialmente en regiones áridas o semiáridas de nuestro país donde el deshielo regula el abastecimiento de las cuencas.

La Argentina ya está pagando los costos de la crisis climática. Lo vemos en sequías cada vez más intensas, en incendios forestales más frecuentes y en una creciente inestabilidad en los sistemas hídricos. En casi dos tercios del territorio nacional la demanda de agua supera a su disponibilidad natural.

En ese contexto, debilitar la protección de los glaciares no es una política de desarrollo. Es un acto de irresponsabilidad.

Nosotros creemos en el desarrollo productivo. Creemos en la industria, en la minería sustentable, en aprovechar los recursos naturales que tiene la Argentina para generar trabajo y valor agregado. Pero también sabemos que ningún modelo de desarrollo puede sostenerse si pone en riesgo los recursos básicos que hacen posible la vida y la producción. El agua es uno de esos recursos, posiblemente el más básico y esencial.

Durante mi gestión en el Ministerio del Interior trabajamos con todas las provincias en un Plan de Desarrollo Federal que identificó las más de mil cuatrocientas obras estratégicas que hacían falta para impulsar las economías regionales. Surgió de relevar lo que todos los gobernadores, sus ministros, las cámaras y sectores productivos señalaban como infraestructura crítica para poder invertir, producir agregando valor y como resultado, crear más trabajo.

Un tercio de esas obras eran hídricas. Eso muestra hasta qué punto el agua es un factor central para el desarrollo productivo de nuestro país. Por eso la discusión que estamos teniendo hoy no es solamente ambiental. También es una discusión sobre el modelo de país que queremos.

Si queremos una Argentina que entregue sus recursos sin planificación, o una que piense estratégicamente cómo aprovecharlos sin hipotecar el futuro de las próximas generaciones de argentinos. Si queremos un país que debilite el rol del Estado y de la ciencia en la toma de decisiones, o un país que utilice el conocimiento científico para administrar de manera inteligente sus bienes comunes.

Nosotros creemos en lo segundo. Creemos que el desarrollo del siglo XXI necesita más ciencia, más tecnología, más planificación federal y más responsabilidad con el ambiente. La Ley de Glaciares representa justamente esa idea: cuidar un recurso estratégico para que el desarrollo sea posible hoy y también mañana.

En definitiva, de eso se trata esta discusión, de qué país le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Cuidar el agua es cuidar la vida. Y una Argentina sin agua no tiene futuro.

Por eso vamos a votar en contra de esta modificación. Muchas gracias.